

LES ÉTUDES DU CERI

N° 275-276 - Enero 2025

AMÉRICA LATINA EL AÑO POLÍTICO 2024

Bajo la dirección de David Recondo





América latina. El año político 2024 es una publicación del Observatorio político de América latina y el Caribe (Opalc) del CERI-Sciences Po (Paris, Francia). Este extiende el enfoque del sitio web www.sciencespo.fr/opalc ofreciendo claves para la comprensión de un continente plagado de profundas transformaciones. La información complementaria de esta publicación está disponible en el sitio web. Esta publicación es la traducción del Amérique latine. L'Année politique 2024, publicado en francés por el CERI-Sciences Po en los Etudes du CERI (n° 275-276, Enero 2025).

Para citar este volumen: David Recondo (dir.), América latina. El año político 2024/Les Etudes du CERI, n° 275-276, Enero 2025 [en línea, www.sciencespo.fr/ceri/fr/papier/etude].

Los autores

Marc-André Anzueto es profesor del departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Quebec en Outaouais (UQO), miembro del Equipo Interuniversitario de Investigación sobre Inclusión y Gobernanza en América Latina (Erigal) y del Observatorio Canadiense de Crisis y Acción Humanitaria (OCCAH).

Rodrigo Barrenechea es profesor del departamento académico de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico (Perú).

David Copello es maître de conférences en sociología política en el Institut Catholique de Paris-Centro de investigación "Religion, Culture et Société" e investigador asociado en el Centre de Recherche et de Documentation sur les Amériques (CREDA).

Marina Ferreira de Araujo Fernandes es doctoranda en sociología por la Universidad de Montreal y en ciencias políticas por la Universidad de Brasilia (Brasil).

Christian Girault es director de investigación emérito en el Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Centro de Investigación y Documentación de las Américas (CREDA).

Damien Larrouqué es profesor adjunto de ciencia política en CY Cergy Paris Université y miembro del laboratorio Agora.

Tom Long es profesor de relaciones internacionales en el Departamento de Política y Estudios Internacionales de la Universidad de Warwick y profesor afiliado en la División de Estudios Internacionales del CIDE en México.

Patricia M. Martin es profesora titular del departamento de geografía, Universidad de Montréal (Canada).

Claire Nevache es doctoranda en el Centre d'étude de la vie politique (Cevipol, ULB) e investigadora en el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS) (Panamá).

Kevin Parthenay es profesor en la Universidad de Tours y miembro Junior del Instituto Universitario de Francia (IUF).

Gustavo Pastor es profesor de la Universidad del Pacífico (Perú) y miembro de Opalc.

Thomas Posado es profesor asociado en civilización latinoamericana contemporánea en la Universidad de Rouen Normandie e investigador en el Équipe de Recherche Interdisciplinaire sur les Aires Culturelles (ERIAC).

David Recondo es investigador en CERI-Sciences Po y presidente del Opalc.

Dario Rodriguez es Profesor de la Sorbonne Université e Investigador titular del CRIMIC.

Alberto Vergara es Profesor de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad del Pacífico (Perú).

Carlos Zavarce Velásquez es Profesor Asistente de la Facultad de Derecho en la Universidad de Tohoku (Japón).

Indice

Introducción

Continuidad política en un contexto de estabilidad económica David Recondo	
David Necondo	p. 5
Primera parte – América latina en la actualidad	
Una visión prospectiva de la controversia territorial por la Guayana Esequiba Carlos Zavarce Velásquez	p. 10
Argentina, un año después Darío Rodriguez	p. 14
Bernardo Arévalo: entre semillas de esperanza y compromisos políticos Marc-André Anzueto	p. 20
¿Crisis migratoria en América Latina? Patricia M. Martin	p. 25
Segunda parte – América latina frente a la historia	
La batalla de Ayacucho (1824) Gustavo Pastor	p. 31
Cincuentenario del fallecimiento de Perón: una herencia trunca David Copello	p. 36
Las transformaciones del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra durante la Nueva República brasileña (1988-2016)	,
Marina Ferreira de Araujo Fernandes	p. 41
La región de Schrödinger: América del Norte después de 30 años Tom Long	p. 46
Tercera parte – América latina en las urnas	
Tres tendencias en las elecciones latinoamericanas de 2024: eficacia recompensada, alternancia pacífica y conflicto postelectoral	
David Recondo	p. 52
Nayib Bukele 2.0: ¿el camino hacia la desconsolidación democrática? Kevin Parthenay	p. 54

Elecciones en México: la continuidad en el cambio David Recondo	p. 58
Las elecciones en la República Dominicana: continuidad política Christian Girault	p. 62
Elecciones en Panamá: el retorno del martinellismo Claire Nevache	p. 67
Uruguay, elecciones generales 2024: el Frente Amplio vuelve al poder Damien Larrouqué	p. 71
Las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio de 2024: un escrutinio fraudulento Thomas Posado	
Cuarta parte – América latina en perspectiva	p. 75
Perú: el peligro de una democracia impotente	
Rodrigo Barrenechea y Alberto Vergara	p. 79

NB: Todas las direcciones de los sitios web mencionados en este volúmen han sido verificadas en Enero 2025.

Introducción Continuidad política en un contexto de estabilidad económica

David Recondo

En 2024, América Latina refleja dos grandes paradojas: por un lado, la concomitancia de crisis políticas y regímenes estables y, por el otro, la existencia de un consenso sobre los retos comunes que hay que, pero que los Estados no pretenden abordar de la misma manera.

Primera paradoja: crisis políticas y estabilidad de los regímenes

En un contexto de crecimiento económico ligeramente superior (2,2% en 2024 frente al 2% en 2023)¹ y de inflación controlada en todas partes (media regional del 3,4% frente al 3%)², la situación es menos dramática que en el año anterior, con excepción de Haití y Venezuela. Las tensiones políticas que marcaron 2023 han dado paso a una calma relativa.

En el frente electoral, los gobernantes en ejercicio fueron reelegidos con holgados márgenes en El Salvador, México y la República Dominicana. En Panamá y Uruguay, las elecciones dieron lugar a una alternancia en el poder. La sanción casi sistemática de los titulares y la elección de candidatos antisistema (*outsiders*) que marcaron las elecciones de 2023 han dado paso a una dinámica más tranquila de continuidad, por un, y de alternancia a favor de fuerzas políticas bien asentadas en el panorama político nacional, por otro.

Desde este punto de vista, la crisis venezolana es una excepción. Las elecciones del 28 de julio suscitaron una polémica sobre los resultados, ya que tanto el presidente en ejercicio, Nicolás Maduro, como el candidato de la oposición, Edmundo González, se atribuyeron la victoria. La autoridad electoral anunció los resultados sin publicar las actas transmitidas por los mesas de votación (Maduro habría obtenido el 51,2% de los votos)³. La oposición, basándose en copias de las actas enviadas por sus representantes, publicó resultados diametralmente opuestos (Humberto González Urrutia habría obtenido el 67,04% de los votos)⁴. Tras las se produjeron importantes protestas. El gobierno reprimió a los manifestantes, decenas de personas resultaron heridas y cerca de 2.400 fueron encarceladas⁵, mientras que

¹ Cepal, "Economías de América Latina y el Caribe mantienen un bajo crecimiento y se expandirán 2,2% en 2024 y 2,4% en 2025: CEPAL", 18 de diciembre de 2024 (www.cepal.org/es/comunicados/economias-america-latina-caribe-mantienen-un-crecimiento-se-expandiran-22-2024-24-2025).

² Ibid.

³ "Présidentielle au Venezuela: Nicolas Maduro considère comme acquise la victoire, neuf pays d'Amérique latine exigent 'un réexamen complet des résultats'", *Le Monde*, 29 de julio de 2024 (www.lemonde.fr/international/ article/2024/07/29/presidentielle-au-venezuela-le-conseil-electoral-annonce-la-reelection-denicolas-maduro-l-opposition-craint-des-fraudes 6260776 3210.html).

⁴ F. Singer, "El centro Carter presenta a la OEA las actas recopiladas por la oposicion de Venezuela que otorgan la victoria a Edmundo Gonzales", *El Pais*, 2 de octubre de 2024 (https://elpais.com/america/2024-10-02/el-centro-carter-presenta-a-la-oea-las-actas-originales-de-la-votacion-en-venezuela-que-otorgan-la-victoria-de-edmundo-gonzalez.html).

⁵ Human Rights Watch, "Venezuela: Brutal represión contra manifestantes y votantes", 24 de septiembre de

Edmundo González se exilió. El arbitraje de la Organización de Estados Americanos (OEA) y los intentos de mediación de Brasil, Colombia y México fracasaron.

En la región han surgido tres posiciones: por un lado, los Estados que apoyan a Maduro (Bolivia, Cuba, Honduras y Nicaragua), y por otro, los que han reconocido victoria de Edmundo González (el resto de Centroamérica, Argentina, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y República domicana); Por último, un tercer grupo de países, encabezado por Brasil, Colombia y México, adoptó una postura de neutralidad, al no reconocer la victoria de ninguno de los dos candidatos y al exigir a la autoridad electoral venezolana que publique las actas de escrutinio. La propuesta de mediación de estos tres países no prosperó. Estados Unidos condenó lo que consideró una interceptación fraudulenta del proceso electoral por parte del gobierno. La Unión Europea se negó a reconocer los resultados oficiales de las elecciones, mientras que el resto de la comunidad internacional se dividió entre los defensores del presidente en funciones y los partidarios de la oposición.

La crisis postelectoral en Venezuela ha puesto en jaque a todo el sistema interamericano, al fracasar todos los intentos de mediación. Es indicativa de una tendencia fundamental escala mundial: la deriva autocrática y aislacionista de regímenes políticos dirigidos por jefes de Estado que controlan el ejército y la policía, y hacen caso omiso de los contrapesos institucionales neutralizando abiertamente la independencia del poder judicial y considerando al parlamento como una mera caja de resonancia de su voluntad. Sin embargo, Venezuela, al igual que Nicaragua, es un caso límite que no representa una tendencia generalizada en América Latina. Aunque el valor otorgado a la democracia y al Estado de Derecho parece estar disminuyendo frente a la demanda seguridad y económica (empleo, control de la inflación/aumento del poder adquisitivo de los hogares), las elecciones más recientes, con la excepción de las de Venezuela, reflejan (y siguen reflejando) una preferencia global por abordar los retos de la sociedad en un marco democrático en el que el voto de los ciudadanos sea el árbitro⁶.

Paradójicamente, ante crisis políticas como las de Honduras, Perú, Ecuador, Colombia y en Guatemala, el temor generalizado es que los gobiernos sean débiles o incluso impotentes, en lugar de que el orden democrático se vea socavado por la concentración de poder en manos de un autócrata.

Segunda paradoja: retos comunes, enfoques divergentes para afrontarlos

Los problemas comunes nunca han sido tan claros. Además del lento crecimiento económico, los gobiernos y las sociedades de la región se enfrentan a tres azotes: el cambio climático, la corrupción y la inseguridad vinculada a la delincuencia.

El primer azote se ha manifestado con especial fuerza, su cuota de inundaciones (Porto Alegre, Brasil), sequías (Ecuador, México) y tormentas tropicales. Los temas de la transición energética y la protección de la biodiversidad figuran en la agenda de todos los gobiernos. Incluso dos grandes reuniones internacionales han situado a América Latina en el centro de

 $^{2024\ (}www.hrw.org/es/news/2024/09/03/venezuela-brutal-represion-contra-manifestantes-y-votantes).$

⁶ "Informe Latinobarómetro 2024: La Democracia Resiliente" (www.latinobarometro.org/lat.jsp).

las cuestiones medioambientales: la COP 16 del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), celebrada en Cali del 21 de octubre al 1de noviembre, y la cumbre del G20, que tendrá lugar en Río de Janeiro del 18 al 19 de noviembre de 2024.

Los pueblos indígenas fueron los principales protagonistas de la primera reunión. Consiguieron la creación de un órgano subsidiario permanente que les permitirá participar en todas las fases de reflexión y toma de decisiones del CDB. También se acordó la creación de un banco para apoyar las acciones de conservación de las comunidades indígenas. Sin embargo, la reunión no desembocó en el establecimiento de una estrategia de financiación de los esfuerzos de protección de la biodiversidad.

Por su parte, la reunión del G20 se centró en la reforma de la gobernanza mundial, la lucha contra el hambre y la pobreza acción por el clima. Para evitar que la reunión se paralizara por los enfrentamientos en torno a las guerras de Ucrania y Oriente Medio, el Presidente Lula hizo todo lo posible para que los debates y las declaraciones se centraran en la lucha contra el hambre y la pobreza, que presentó como la nueva "cruzada" capaz de unir a la humanidad. Tema consensuado y despolitizado donde los haya (la cuestión de la desigualdad fue hábilmente dejada de lado), la pobreza facilitó la puesta en escena de una comunión de las grandes potencias. Sin embargo, no se trazó ninguna hoja de ruta. En cuanto a la transición energética, los participantes se limitaron a declaraciones de principios. Una cortina de humo demasiado delgada para ocultar las incoherencias estratégicas de los gobiernos, empezando por Brasil, que sigue promoviendo la prospección de reservas petrolíferas en Amazonas.

América Latina no es una excepción: está experimentando una creciente disociación en la escena internacional entre, por un lado, la clarividencia y el aparente consenso sobre los grandes retos a los que se enfrenta el planeta y, por el otro lado, el desacuerdo sobre las estrategias necesarias para abordarlos. Frente al consenso entre los gobiernos sobre los objetivos comunes existe un desacuerdo total (pero tácito) tanto sobre las causas profundas de los problemas como sobre las soluciones que hay que encontrar.

En 2024, más que nunca, el rasgo común en América Latina es, por tanto, la desunión. Los Estados se repliegan sobre sus propios asuntos internos, con el efecto concomitante del estancamiento de los procesos de integración regional, y las relaciones bilaterales con China, Estados Unidos y Europa.

La incapacidad para resolver la crisis venezolana sólo tiene parangón en la inextricable situación en la que se encuentra Haití. En un contexto de guerra civil entre bandas, y entre éstas y lo que queda de fuerzas del orden, el Presidente interino y ex Primer Ministro Ariel Henry dimitió el 24 de abril y fue sustituido por un Consejo Presidencial que reúne a representantes de las principales fuerzas políticas, del sector privado y de la sociedad civil. En octubre, cuando población sufría escasez de alimentos, medicinas y otros productos básicos, el gobierno anunció que tomaría medidas, el Consejo anunció tres prioridades: la seguridad, la reforma constitucional e institucional y la elección de un nuevo presidente en febrero de 2026 (las últimas elecciones se celebraron en 2016)⁷.

⁷ "Le Conseil présidentiel haïtien annonce l'élection d'un nouveau président en février 2026", Guadeloupe La 1ère, AFP, 9 de abril de 2024 (https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/le-conseil-presidentiel-haitien-annonce-lection-d-un-nouveau-president-en-fevrier-2026-1478792.html).

Dos hechos destacan en la geopolítica hemisférica: la creciente presencia de China como socio comercial e inversor, y elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos el 5 de noviembre de 2024.

China consolida su presencia en Sudamérica. El puerto de Chancay, a 78 km al norte de Lima, en Perú, construido por una empresa china y dedicado íntegramente al comercio entre el gigante asiático y el continente americano, fue inaugurado el 14 de noviembre de 2024 en presencia de Xi Jinping y de la presidenta peruana, Dina Boluarte. La puesta en marcha del puerto se produce en un momento en el que el presidente electo de Estados Unidos ha acusado a México de ser un caballo de Troya para los productos chinos en el mercado estadounidense, y amenaza con aumentar los aranceles a las exportaciones mexicanas en un 25%. América Latina se ha convertido en el principal escenario de la rivalidad económica entre las dos grandes potencias mundiales.

La elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos ha sido el segundo gran acontecimiento del año. Sus declaraciones y las personas que ha nombrado para el Departamento de Estado reflejan un cambio en la política latinoamericana de la primera potencia mundial. Todo hace pensar que se prestará especial atención a una región que, principios de milenio, ha sido objeto de una "negligencia benigna" (benign neglect). Tres son los objetivos estratégicos anunciados por Donald Trump: la lucha contra los cárteles de la droga, con la intervención directa en suelo mexicano, de ser necesario; el control del comercio mediante el aumento de los aranceles a todas las importaciones, y la ocupación militar del Canal de Panamá si no se ajustan a la baja las tarifas de acceso al mismo; y la deportación inmediata de los migrantes ilegales que se encuentran en suelo estadounidense. Estas son las señales de un cambio radical en el equilibrio de poder en el hemisferio, pero es imposible saber si irán seguidas de medidas concretas o si son sólo un bluff destinado a influir en las negociaciones sobre nuevos acuerdos de cooperación con los Estados latinoamericanos y a galvanizar a la opinión pública estadounidense.

Para citar este capítulo: David Recondo, "Introducción. Continuidad política en un contexto de estabilidad económica", in D. Recondo (dir.), *América latina. El año político 2024/Les Etudes du CERI*, nº 275-276, Enero 2025 [en línea: www.sciencespo.fr/ceri/fr/papier/etude].

América latina en la actualidad

Una visión prospectiva de la controversia territorial por la Guayana Esequiba

Carlos Zavarce Velásquez

América Latina y el Caribe se han caracterizado en años recientes por su vocación pacifista. Sin embargo, dentro de la región existen disputas fronterizas por resolver, producto de herencias coloniales y/o del surgimiento de nuevas reglas dentro del derecho internacional. Una de las más conocidas actualmente es la controversia territorial por la Guayana Esequiba entre la República Cooperativa de Guyana (Guyana) y la República Bolivariana de Venezuela (Venezuela). En este diferendo, ambos países reclaman un territorio de 159.500 Km² de gran importancia geoestratégica debido principalmente a los recursos naturales que en este se encuentran.

Actualmente, luego de más de dos décadas de buscar una solución mediante el mecanismo de los Buenos Oficios, auspiciados por la Secretaria General de las Naciones Unidas (ONU), esta disputa se encuentra ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), la cual en 2020 se declaró competente para dirimir el asunto¹.

Dado este contexto, este artículo busca proporcionar una visión prospectiva sobre los diferentes escenarios que pudiesen presentarse en la búsqueda de una solución definitiva a la controversia territorial entre Guyana y Venezuela. El análisis se sustenta en fuentes primarias y secundarias, tales como declaraciones oficiales de Guyana, Venezuela, la ONU, y otros organismos regionales, así como literatura especializada en la materia.

Antecedentes de importancia

Aunque los antecedentes históricos de este diferendo se remontan a la época colonial, más específicamente a la Bula Papal *Inter Caetera* de 1493, el primer gran hito se dio en 1899, cuando un tribunal arbitral conformado por Estados Unidos, Reino Unido y Rusia, decidió, mediante el Laudo Arbitral de París², adjudicar al Reino Unido 159.500 Km² que constituían parte de lo que Venezuela considera como su territorio, con base en el espacio geográfico que conformaba la Capitanía General de Venezuela y el principio del *Uti Possidetis uris*³.

Años más tarde, tras una extensa defensa en diversos foros internacionales para reivindicar los derechos venezolanos sobre la Guayana Esequiba, el Reino Unido accedió a reconocer el reclamo de Venezuela. En este sentido, el 17 de febrero de 1966, representantes de ambas partes firmaron el Acuerdo de Ginebra. Este instrumento legal registrado ante la ONU, bajo el N.º 8192, establece que la controversia debe "ser amistosamente resuelta en forma que resulte aceptable para ambas partes"⁴.

¹ Corte Internacional de Justicia, "Summary of the Judgment of 6 April 2023", La Haya, 2023.

² "Award regarding the Boundary between the Colony of British Guiana and the United States of Venezuela", París, 1899.

³ Naciones Unidas, Acuerdo para Resolver la Controversia entre Venezuela y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre la Frontera entre Venezuela y Guayana Británica, 1966.

⁴ Naciones Unidas, "Secretary-General Chooses International Court of Justice as Means for Peacefully Settling Long-Standing Guyana-Venezuela Border Controversy", Nueva York, 2018.

Sin embargo, tres meses luego de la firma de este acuerdo, el Reino Unido otorgó la independencia a Guyana. Esta acción transformó lo que originalmente se consideraba como una disputa territorial entre una potencia extracontinental y un país sudamericano en un conflicto limítrofe entre países vecinos.

Si bien inicialmente hubo negociaciones entre Venezuela y Guyana para buscar una solución al conflicto en el marco de una Comisión Mixta, las partes no alcanzaron ningún acuerdo. Esto hizo que ambas naciones iniciaran en 1990 un proceso de Buenos Oficios, auspiciados por un representante personal del Secretario General de la ONU. Este mecanismo estuvo vigente hasta enero de 2018, cuando el Secretario General, António Guterres, siguiendo las recomendaciones de su predecesor, Ban Ki-moon, decidió remitir la controversia a la CIJ, al tiempo que sugería mantener los Buenos Oficios como un mecanismo complementario⁵.

Situación actual

La decisión del Secretario General de la ONU de remitir la controversia a la CIJ inició un proceso de judicialización del diferendo territorial apuntalado en una demanda de Guyana a Venezuela en la Corte. Mediante esta demanda, Guyana solicitó a la CIJ "que confirme la validez legal y el efecto vinculante del Laudo con respecto a la frontera entre la colonia de la Guayana Británica y los Estados Unidos de Venezuela, del 3 de octubre de 1899"⁶.

En el marco de este proceso judicial, Venezuela defiende la vigencia del Acuerdo de Ginebra como único instrumento para encontrar una solución práctica y satisfactoria al diferendo. Así mismo, argumenta que la Corte carece de competencia para dirimir el asunto, ya que Venezuela no es firmante del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas⁷, ni del Protocolo⁸ Facultativo de Jurisdicción Obligatoria para la Solución de Controversias⁹. Sin embargo, Venezuela ha asistido a las audiencias del caso y presentado la información necesaria para defender su posición.

A la fecha, múltiples audiencias públicas se han llevado a cabo para escuchar las posiciones de las partes. Asimismo, ambos han presentado por escrito sus defensas: Guyana una memoria y Venezuela una contramemoria. Sin embargo, el 14 de junio de 2024, la CIJ estableció las fechas límites para la presentación de una segunda ronda de argumentos escritos: Guyana (diciembre 9, 2024) y Venezuela (agosto 11, 2025)¹⁰.

⁵ Naciones Unidas, "Secretary-General Chooses International Court of Justice as Means for Peacefully Settling Long-Standing Guyana-Venezuela Border Controversy", Nueva York, 2018.

⁶ Corte Internacional de Justicia, "Guyana files an application against Venezuela", La Haya, 2018.

⁷ El Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, también conocido como Pacto de Bogotá, fue firmado por las repúblicas independientes de las Américas durante la Conferencia Panamericana el 30 de abril de 1948 en Bogotá, Colombia. Su objetivo es obligar a los estados firmantes a resolver sus disputas pacíficamente. También se les pide que utilicen todos los medios regionales a su disposición antes de acudir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Los Estados firmantes también reconocen la jurisdicción de la CIJ.

⁸ Acordado en Viena en abril de 1961.

⁹ Republica Bolivariana de Venezuela, "Memorandum of the Bolivarian Republic of Venezuela on the Application filed before the International Court of Justice by the Cooperative Republic of Guyana on March 29th, 2018", Caracas, 2020.

¹⁰ Corte Internacional de Justicia, Order of 14 June 2024, La Haya, 2024.

Paralelamente al proceso judicial, ambas naciones realizan acciones complementarias en la búsqueda de proteger sus intereses en el área en disputa. Por un lado, Guyana mantiene una política activa de otorgamiento de concesiones a empresas trasnacionales para la exploración y explotación de recursos naturales en la zona en reclamación. Actualmente, diversas empresas, como ExxonMobil, CNOOC Nexen, Hess, entre otras, tienen presencia en la zona. De igual manera, Guyana ha aumentado su gasto militar adquiriendo nuevos equipos de defensa¹¹ y profundizando la cooperación militar con aliados estratégicos, principalmente los Estados Unidos¹².

Por su parte, el gobierno de Venezuela optó por la organización de un referéndum para consultar a la población que acciones debía tomar en el marco de la controversia territorial. Esta convocatoria llevó a la petición de medidas provisionales por parte de Guyana ante la CIJ y produjo diversos pronunciamientos regionales e internacionales. No obstante, como resultado de la consulta, la Asamblea Nacional de Venezuela promulgó la Ley Orgánica en Defensa del Esequibo, la cual busca generar un marco legal para la administración del territorio¹³.

En medio de crecientes tensiones, representantes de Venezuela y Guyana, en compañía de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), se reunieron el 14 de diciembre de 2023, en San Vicente y las Granadinas. Allí, las partes firmaron la declaración de Argyle, mediante la cual acordaron no amenazarse ni utilizar la fuerza y reconocieron que cualquier controversia se resolverá de conformidad con el derecho internacional, incluido el Acuerdo de Ginebra de 1966¹⁴.

Posibles escenarios

Tomando en cuenta las posiciones históricas de ambos Estados y la dinámica actual del diferendo territorial, se pueden considerar al menos cinco escenarios posibles en el marco de esta controversia.(cuadro 1).

¹¹ "Guyana buys US\$11.5M boat to protect Exxon's operations", *Kaieteur News*, 8 de noviembre de 2023 (www.kaieteurnewsonline.com/2023/11/08/guyana-buys-us11-5m-boat-to-protect-exxons-operations/).

¹² Embajada de los Estados Unidos en Guyana, "SOUTHCOM to Conduct Flight Over Guyana", 2023 (https://gy.usembassy.gov/southcom-to-conduct-flight-over-guyana/).

¹³ Asamblea Nacional, "AN aprueba en primera discusión Ley Orgánica para la Defensa del Esequibo", 2024 (https://mincomercionacional.gob.ve/?p=16833#:~:text=La%20nueva%20Ley%20Org%C3%A1nica%20para,1).

¹⁴ Ministry of Foreign Affairs of Guyana, "The Joint Declaration of Argyle for Dialogue and Peace between Guyana and Venezuela", 2023.

Cuadro 1 Posibles escenarios e implicaciones en la controversia territorial por la Guayana Esequiba

Guyana Reconocimiento y	Venezuela	Empresas Trasnacionales
apoyo de la comunidad internacional sobre sus derechos soberanos en la Guayana Esequiba con base en la decisión de la CIJ.	Rechazo de la decisión de la CIJ y búsqueda de otras alternativas diplomáticas.	Marco legal claro para operar en el territorio de la Guayana Esequiba, ofreciendo un entorno estable y con ello la posibilidad de continuar y profundizar las operaciones de exploración y explotación de recursos naturales.
Rechazo de la decisión de la CIJ y búsqueda de otras opciones diplomáticas. Solicitud de apoyo a sus aliados internacionales, especialmente el Reino Unido y Estados Unidos.	Ratificación de su posición histórica que le permite ejercer plenamente sus derechos soberanos sobre la Guayana Esequiba.	Inicio de un proceso de renegociación con Venezuela para establecer los nuevos términos de las concesiones previamente otorgadas por Guyana.
Control de una gran parte de la zona en disputa, lo que le permite continuar con la explotación de recursos en la parte del territorio bajo su control. No obstante, Guyana tendría que colaborar con Venezuela para la gestión de recursos existentes mediante inversiones y desarrollos conjuntos.	La resolución pacífica del diferendo y la recuperación de una parte del territorio en disputa pueden ser vistos como un logro diplomático para la nación. Sin embargo, la nueva dinámica del territorio requeriría un enfoque de cooperación y concesiones mutuas para el acceso a recursos naturales en la zona.	Adaptación de las operaciones y estrategias a las políticas y regulaciones impuestas por ambos países en sus respectivas áreas de control. Mayor estabilidad operativa a medida que disminuyen las tensiones territoriales y políticas.
Guyana y Venezuela se comprometerían a buscar una solución mediante mecanismos alternos a la vía judicial. La declaración de Argyle, y el involucramiento de nuevos actores como la CELAC y CARICOM, entre otros, abren oportunidades para un mejor entendimiento entre las partes.		Reducción significativa del riesgo físico y legal para las empresas trasnacionales, proporcionando un entorno estable para las operaciones e inversiones.
Incremento del gasto militar y de las movilizaciones de fuerzas de seguridad para proteger la frontera. Solicitud de apoyo a las tropas de países aliados como Estados Unidos y el Reino Unido.	Mayor movilización y despliegue de las Fuerza Armada en las zonas colindantes con Guyana, aumentando el gasto militar en un contexto de crisis económica interna, con el consecuente riesgo de ser objeto de nuevas sanciones económicas por parte de la comunidad internacional.	Alta probabilidad de interrupciones en las operaciones debido al conflicto armado. Posible incremento de costos operativos y pérdidas financieras.
	derechos soberanos en la Guayana Esequiba con base en la decisión de la CIJ. Rechazo de la decisión de la CIJ. Rechazo de la decisión de la CIJ y búsqueda de otras opciones diplomáticas. Solicitud de apoyo a sus aliados internacionales, especialmente el Reino Unido y Estados Unidos. Control de una gran parte de la zona en disputa, lo que le permite continuar con la explotación de recursos en la parte del territorio bajo su control. No obstante, Guyana tendría que colaborar con Venezuela para la gestión de recursos existentes mediante inversiones y desarrollos conjuntos. Guyana y Venezuela se com solución mediante mecanism La declaración de Argyle, y e actores como la CELAC y CA oportunidades para un mejor partes. Incremento del gasto militar y de las movilizaciones de fuerzas de seguridad para proteger la frontera. Solicitud de apoyo a las tropas de países aliados como Estados Unidos y el	la CIJ y búsqueda de otras alternativas diplomáticas. Rechazo de la decisión de la CIJ y búsqueda de otras opciones diplomáticas. Solicitud de apoyo a sus aliados internacionales, especialmente el Reino Unido y Estados Unidos. Control de una gran parte de la zona en disputa, lo que le permite continuar con la explotación de recursos en la parte del territorio bajo su control. No obstante, Guyana tendría que colaborar con Venezuela para la gestión de recursos existentes mediante inversiones y desarrollos conjuntos. Guyana y Venezuela se comprometerían a buscar una solución mediante mecanismos alternos a la vía judicial. La declaración de Argyle, y el involucramiento de nuevos actores como la CELAC y CARICOM, entre otros, abren oportunidades para un mejor entendimiento entre las partes. Mayor movilización y despliegue de las Fuerza Armada en las zonas colindantes con Guyana, aumentando el gasto militar y de las movilizaciones de fuerzas de seguridad para proteger la frontera. Solicitud de apoyo a las tropas de países aliados como Estados Unidos y el Reino Unido.

Finalmente, es importante resaltar que independientemente de la decisión de la CIJ y de la futura delimitación de la frontera terrestre entre Guyana y Venezuela, aún quedará por resolver la delimitación marítima. Esta cuestión no forma parte del proceso actual ante la CIJ y requerirá cooperación, entendimiento y consenso entre ambos países.

Para citar este capítulo: Carlos Zavarce Velásquez, "Una visión prospectiva de la controversia territorial por la Guayana Esequiba", in D. Recondo (dir.), América latina. El año político 2024/Les Etudes du CERI, n° 275-276, Enero 2025 [en línea: www.sciencespo.fr/ceri/fr/papier/etude].

Argentina, un año después Darío Rodriguez

A mediados de noviembre del año pasado Javier Milei se transformó en el nuevo presidente de los argentinos gracias al apoyo de 55,6% del electorado. Una clara mayoría de la población optó por salir de la profunda crisis económica y social en la que se encontraba el país dando un salto al vacío. Una figura desconocida pocos años atrás, sin partido, sin apoyo institucional y social-corporativo, logró encarnar el desencanto y el descontento ciudadano despertando un sueño de esperanza, de cambio, sin importar los costos. Encarnado una (nueva) ruptura fundacional en la sociedad argentina, Javier Milei puso en marcha desde principios de 2024 un proceso de inédito ajuste fiscal conservando, no obstante, un importante respaldo en la opinión pública. ¿Qué nos deja entonces un año de Javier Milei en el poder? ¿Cómo ha logrado construir poder rechazando al poder? En las siguientes páginas, reflexionaremos sobre este proceso examinando los diferentes proyectos de reforma impulsados desde el ejecutivo, la estructuración de los respaldos parlamentarios, la evolución del contexto económico-social y la configuración del nuevo escenario que se perfila de cara a las próximas elecciones legislativas.

"Vamos por todo"1

Desde la llegada a la presidencia de Javier Milei, dos líneas definieron su política gubernamental: un proyecto de transformación radical y una voluntad irrefrenable de llevarlo a cabo. Como resultado de esto, se pusieron en marcha, desde diciembre de 2023, diferentes proyectos de ley que tuvieron como meta reducir drásticamente el déficit fiscal estableciendo un ajuste inédito en el gasto público y en la estructura nacional del Estado². Esta política de austeridad quedo plasmada, particularmente, en el proyecto de ley de Bases que el gobierno logró aprobar, con importantes modificaciones, a fines del mes de junio de 2024.

Luego de meses de negociación con los diferentes bloques parlamentarios opositores, el gobierno pudo aprobar un conjunto de reformas que supusieron, primero, extender el régimen de emergencia pública por un año en materia administrativa, económica, financiera y energética; segundo, un régimen limitado de privatizaciones; tercero, un plan de reforma laboral que penalizaba severamente toda acción de bloqueo como forma de protesta social; cuarto, la promoción del trabajo registrado; quinto, un régimen especial de inversiones otorgando diferentes ventajas impositivas y, finalmente, un reorientación en la organización del mercado de energía favoreciendo su exportación en detrimento del mercado interno³. Pocos días

¹ J. P. Kavanagh, "Milei activa el *vamos por todo* libertario: más privatizaciones y recortes en el Estado", *Perfil*, 27 de octubre de 2024 (www.perfil.com/noticias/politica/milei-activa-el-vamos-por-todo-libertario-mas-privatizaciones-y-recortes-en-el-estado.phtml).

² Durante sus primeros ocho meses en el poder, el Gobierno se comprometió a una reducción del gasto público del 30,1%. Fuente: Informe de la Asociación de Presupuesto y Administración Pública, septiembre de 2024 (www.asap.org.ar/).

³ Para un análisis detallado del proyecto de Bases, ver: "Artículos cambiados, nuevos y eliminados. Así quedó

después, el 8 de julio, el gobierno obtuvo un nuevo éxito al lograr acordar con 18 gobernadores, sobre un total de 24, el llamado "Pacto de Mayo" que ilustró, sin pocas ambigüedades, el liberalismo economico extremo que define a la orientación ideológica gubernamental.

Dicho pacto, promocionado por el gobierno como un nuevo contrato social, supuso la adhesión a 10 principios básicos. Entre ellos sobresalió la inviolabilidad de la propiedad privada, el carácter innegociable del equilibrio fiscal, la reducción del gasto público en torno del 25% del PBI, una reforma impositiva que reduzca la presión fiscal permitiendo mejorar su eficiencia, una organización más justa del régimen de distribución de recursos impositivos entre las provincias, una política de liberalización comercial permitiendo que la Argentina recupere su protagonismo en la economía global y una política de defensa del trabajo formal.

Aunque las medidas más extremas en términos de pérdida de la soberanía monetaria, como la dolarización de la economía o el cierre del Banco Central, fueron por el momento descartadas, una nueva etapa se abrió en la Argentina desde noviembre de 2023 marcando el regreso brutal del principio de un orden autorregulado. La defensa irrestricta de las libres fuerzas del mercado, la promoción sin límites de la iniciativa privada y el rechazo sistemático tanto de la presencia reparadora del Estado como a toda acción de tipo pública definieron, sin matices, la versión doméstica de una nueva derecha mundial obsesionada, en el caso argentino, con la disminución del gasto. Prueba de ello fueron, por ejemplo, los vetos respectivos a las leyes de financiamiento jubilatorio y del sector educativo superior en un contexto de importante movilización social. Entre los meses de septiembre y octubre, el gobierno logró vetar diferentes proyectos de ley, aprobados en primera estancia por la reunión de las fuerzas opositoras en la cámara de diputados, que tenían como objetivo recomponer los ingresos de uno de los sectores más vulnerables de la población, los jubilados, y de un sector que supo ser una de las piezas más valoradas del patrimonio nacional, la universidad pública.

Pero si la libertad económica se materializó como un principio rector del gobierno, no es posible identificar un proceso paralelo en el terreno político, institucional y social. La prédica discursiva de Javier Milei en su identificación con el ciudadano común, que ha germinado en el fértil terreno de las redes sociales, basada una retórica del odio y en el quiebre de los cánones de la corrección política, se ha revelado abiertamente opuesta, para empezar, a la construcción de un debate plural y democrático⁴. Pero también contraria al apego a los controles institucionales democráticos como lo ha demostrado no solo su estilo político, sino también su intento de modificar la actual composición de la Corte Suprema incluyendo la nominación de dos nuevos jueces, entre ellos el cuestionado juez federal, Ariel Lijo. Finalmente, los propios valores de la democracia aparecen amenazados frente a un presidente que ha persistido en negar reconocer los crímenes cometidos por la última Dictadura militar y en ir en contra de los avances logrados, recientemente, en materia de igualdad de género y defensa de la libertad sexual⁵.

la versión definitiva de la Ley Bases", *La Nación*, 27 de junio de 2024 (www.lanacion.com.ar/politica/ley-bases-de-javier-milei-asi-quedo-el-proyecto-definitivo-despues-de-los-ultimos-cambios-acordados-nid27062024/).

⁴ Puede leerse a su vez en esta línea el decreto 780/2024 establecido por el gobierno a principios del mes de septiembre mediante el cual se reglamentaron diferentes restricciones al acceso a la información pública.

⁵ Esto puede ilustrarse tanto a partir de la decisión presidencial del 10 de junio de cerrar el Ministerio de la

Contra la Casta, pero con ella

Milei contó con el apoyo electoral de más de 14.500.000 electores, pero la presencia institucional de su propia fuerza, la Libertad Avanza, se redujo a 37 diputados sobre un total de 284 y a 7 senadores sobre un total de 72 sin contar con ningún gobernador propio en las 24 provincias del territorio nacional. Para poner en marcha el "programa de reformas más ambicioso de la historia de la humanidad" el presidente apeló durante su primer año de gobierno al rechazo de la política haciendo uso y abuso de sus prácticas más tradicionales. Es decir que, si por un lado buscó sin pausa seducir a la opinión pública desde la posición del *outsider*, capaz de escuchar a una ciudadanía desencantada en búsqueda de representación, por el otro lado, los referentes políticos de su fuerza se abocaron al oscuro trabajo de la negociación, articulación y transacción partidaria. Y dada la situación institucional que definió su legitimidad de origen, estas lógicas, opuestas en apariencia, parecieron articularse puesto que la conquista de su capital de popularidad en el terreno virtual de la opinión pública le permitió aumentar su capacidad de presión sobre la dirigencia político-partidaria. Ya sea desde la omnipresencia en las redes sociales o desde los espacios institucionales donde la voz presidencial circuló nacional e internacionalmente desde su llegada al poder, Milei desplegó una retórica desconcertante, siempre polémica, políticamente incorrecta, pero percibida como libre, sin ataduras corporativas, honesta y transparente, en virtud de la cual el presidente cumplía -por fin- con lo prometido. Su figura generó confianza, tal como lo demuestran los sondeos de opinión, logrando reconstruir lazos representativos desde una matriz de tipo populista como dispositivo político. Los enemigos fueron claramente identificados, por un lado, los actores (los partidos políticos, los medios de información, los representantes corporativos, los burócratas estatales), pero también diferentes imaginarios ideológicos de fronteras más difusas (el comunismo, el socialismo, el estatismo⁷) en una operación discursiva donde su imagen se duplicó siendo tanto el outsider que se fusiona con los representados como aquel que se eleva siendo el mesías salvador capaz de tomar las decisiones que la Argentina necesita.

Si en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el respaldo de los votantes de Cambiemos habilitó la victoria de Milei, el sostén institucional durante su mandato se lo brindaron una parte importante de los legisladores, principalmente del Propuesta Republicana (PRO) y de una parte de la Unión Cívica Radical (UCR), antiguos socios de esta coalición. La ley de Bases aprobada el 27 de junio contó con el apoyo integral de los 38 diputados del partido del presidente, La Libertad Avanza (LLA), a los que se sumaron 37 legisladores del

Mujer y la Subsecretaria contra la violencia de género como de desfinanciar distintos programas destinados a apoyar la lucha en favor de los derechos de la mujer y las minorías sexuales.

⁶ "Milei dijo que prepara el programa de reformas más ambicioso en la historia de la humanidad", *Dataclave*, 5 de abril de 2024 (www.dataclave.com.ar/poder/milei-dijo-que-prepara-el-programa-de-reformas---mas-ambicioso-en-la-historia-de-la-humanidad- a661014a58c8f421507c3f639).

⁷ Aunque Milei dio pruebas también de un descarnado realismo político ya que, si su acción en el terreno internacional se definió por su identificación con los líderes de las diferentes versiones de la una derecha mundial, en su versión más conservadora y reaccionaria, esto no impidió que el gobierno negocie con la República Popular de China la obtención de un importante préstamo para hacer frente al problema del déficit fiscal.

PRO, 26 de la UCR y otros respaldos de diferentes fuerzas menores⁸. En las primeras semanas de septiembre, gracias al voto negativo de 87 legisladores, el gobierno logró vetar el proyecto de reforma que buscaba mejorar los haberes de los jubilados y un mes después fue el turno del veto al proyecto de financiamiento universitario. En este caso, el gobierno reunió el sostén de 85 legisladores reproduciendo el mismo esquema de alianzas y en el que se pudo observar, como en votaciones anteriores, la presencia también de diferentes diputados fieles a distintos gobernadores peronistas⁹.

En suma, con un respaldo claramente minoritario en ambas cámaras, el gobierno ha logrado durante su primer año asegurar la gobernabilidad en un contexto donde una parte importante de la oposición ha optado por la colaboración, asumiendo el costo de la multiplicación de sus conflictos internos y en donde el peronismo, la fuerza opositora más importante, naufraga al calor de una importante crisis de liderazgo político sin poder reconstruirse, por el momento, como una alternativa. En este contexto de dispersión y fragmentación, el gobierno ha buscado asimismo relanzar su propio espacio bajo la conducción del *Jefe*, Karina Milei, la hermana del presidente¹⁰. A fines del mes de septiembre, en un acto público en un parque del sur de la Ciudad de Buenos Aires, se realizó el lanzamiento oficial de LLA como fuerza nacional. Con la participación del presidente, como principal orador, se destacó la importancia de avanzar en la necesaria organización de una fuerza que permita vencer definitivamente a un enemigo tan poderoso como omnipresente, "la corrupta casta política, mediática, sindical y económica"¹¹.

Lo que vendrá: ¿es la economía, estúpido?

Nadie puede negarle a Milei que durante su primer año de mandato no haya honrado sus promesas de campaña. Desde diciembre del 2023 se establecieron un conjunto de drásticas medidas centradas en la reducción del gasto público, acompañadas por una política de la oferta donde el capital privado y las inversiones extranjeras fueron endiosados como garantes del crecimiento económico. Estas medidas asociadas con el dogma neoliberal conviven, por el momento, con una política heterodoxa, ilustrada en el mantenimiento de rígidos controles públicos en el mercado cambiario y con un sesgo anti-exportador y anti-librecambista en el terreno comercial¹² que confirman que la prioridad número uno del gobierno ha sido y es

⁸ 13 diputados de Hacemos Coalición Federal, 8 de Innovación Federal, 5 de Coalición Cívica (CC), 3 del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), 3 de los tucumanos de Independencia, 2 de Buenos Aires Libre, 2 de Producción y Trabajo, 1 de Creando oportunidades (CREO,) 1 de Por Santa Cruz y 1 de Movimiento Popular Neuquino.

⁹ En un esquema político partidario poco estable, donde los acuerdos se fueron construyendo en cada votación en particular, distintos jefes provinciales críticos del *kirchnerismo*, optaron por acompañar al gobierno en un contexto de brusco recorte en la obra pública y en las transferencias de recursos discrecionales desde el Estado nacional hacia las provincias.

¹⁰ Milei llama a su hermana "el Jefe" buscando provocar la reacción del movimiento feminista.

¹¹ "En el lanzamiento nacional de LLA, Milei compartió escenario con Karina y arengó para insultar a los Medios", *La Nación*, 29 de septembre de 2024 (www.lanacion.com.ar/politica/javier-milei-vuelve-a-parque-lezamapara-presentar-a-la-libertad-avanza-como-partido-nacional-nid28092024/).

¹² Ver P. Guerchunoff, "¿Encarna Milei un peronismo monetarista o es otra cosa?", *La Nación*, 20 de agosto de 2024 (www.lanacion.com.ar/ideas/encarna-milei-un-peronismo-monetarista-o-es-otra-cosa-nid23082024/).

– antes que nada – el control de la inflación, y para quien la única solución a esta maldición nacional es la reducción de la oferta monetaria a través de una política de austeridad fiscal.

Y hasta el momento, los graves costos que estas medidas recesivas y fiscalistas han provocado en la población argentina, fueron compensados, de manera parcial, por los resultados precisamente en materia de estabilización de precios. Junto con la eliminación de subsidios al transporte y a la energía, el gobierno nacional estableció en diciembre de 2023 una fuerte devaluación del 118,3% que disminuyó aún más el ya deteriorado poder de compra de los argentinos. Si el índice de los precios al consumidor (IPC) acumuló un aumento del 101,6% entre enero y septiembre de 2024¹³, desde principios de este año la inflación comenzó a bajar en un contexto donde el gobierno hizo todo para poder enfriar la economía desacelerando la demanda. A partir de mayo, el IPC bajó del 25,5% registrado en diciembre de 2023 a un 4,5% oscilando entre leves aumentos y descensos hasta poder presentar la baja más significativa desde noviembre de 2020 con un 3,5% en el mes de octubre de este año¹⁴. Si las recetas económicas del gobierno parecen dar resultado, por el momento, en este terreno han provocado al mismo tiempo consecuencias muy negativas en materia de crecimiento¹⁵ y en el plano social.

Para empezar, puede observarse en este sentido un aumento del desempleo de 0,8 % respecto del primer trimestre de 2023 alcanzado un 7,7% en el mes de junio de 2024. Según los datos publicados en el mes de septiembre, la pobreza alcanzó a un 52,9% de la población en el primer semestre del año y la indigencia un 18,1%, registrando un aumento, respectivamente, de 12,8% y de 8,8% en relación con los valores del primer semestre de 2023. Esto supone que hoy en la Argentina hay casi 25 millones de pobres de los cuales 7,3 millones son menores de 14 años¹6. ¿Cómo explicar que en este escenario donde la economía decrece y la sociedad se empobrece, el gobierno cuente aún con un sostén importante en la opinión pública¹7?

¹³ En este aumento incidió de manera directa la suba en las tarifas públicas de diferentes servicios públicos (agua un 267%, electricidad un 204%, gas natural un 1132%) y el transporte un 484% entre diciembre de 2023 y agosto de 2024.

¹⁴ Fuente: INDEC, octubre 2024.

¹⁵ Se constató una baja del 3,9% interanual en el mes de junio de 2024 impactando principalmente en los sectores de la construcción (con una caía del 23,6%) y de la industria manufacturera (-20,4%). Esto contrasta, revelando el perfil del modelo económico, con un aumento registrado en otras actividades como la agricultura, ganadería (+82%) y en la explotación de minas y canteras (+4,6%). Fuente: Informe Técnico, INDEC, Vol. 8, n° 187, p. 3.

¹⁶ Cabe señalar que el Gobierno ha aumentado la asistencia social universal para las poblaciones más pobres, pero ha reducido radicalmente las transferencias a las provincias en forma de diversos programas sociales más específicos. Fuente: Asap, "Informe de ejecución presupuestaria de la administración pública nacional", septiembre de 2024 (https://asap.org.ar/img_informes/10151455_EjecucinPresupuestariaAPNSeptiembre2024.pdf).

¹⁷ En el contexto marcado por las importantes movilizaciones sociales en contra del gobierno y en defensa de la educación pública durante el mes de septiembre, la figura del presidente conservaba una imagen positiva del 43% siendo el líder político con mayor apoyo entre los miembros de la dirigencia política argentina. Sin embargo, esta encuesta de opinión pública realizado por la universidad de San Andrés también destaca que problemas como la pobreza y los bajos salarios desplazaron a la cuestión de la inflación. Esto revela que los apoyos al presidente en el terreno de la opinión pública podrían disminuir si la situación económico-social de buena parte de los argentinos continúa deteriorándose. (Fuente: "Según una encuesta, el 80% quiere mayor presupuesto del Estado en jubilaciones, educación y salud pública", *Perfil*, 25 septiembre 2024 (www.perfil.com/noticias/politica/segununa-encuesta-el-80-quiere-mayor-presupuesto-del-estado-en-jubilaciones-y-educacion-y-salud-publica.phtml).

En pocas palabras, la tolerancia social al ajuste creemos que se explica, primero, por el estado de desconfianza que reina en la sociedad argentina en un contexto de estabilización de los precios. Ante los fracasos respectivos de los dos proyectos que se organizaron como respuestas a la crisis de 2001, el *kirchnerismo* y el *macrismo*, buena parte del electorado prefiere creer en lo desconocido, en aquello que rompe con lo dado, cueste lo que cueste. Segundo, porque la oposición está muy lejos hoy de poder configurarse como una alternativa. El peronismo se encuentra muy debilitado, habiendo perdido la representación natural de los sectores populares y sumido hoy en una crisis muy fuerte de liderazgo en la que el *kirchnerismo* corre el riesgo de perder su lugar como corriente hegemónica. La centroderecha, espacio representado por el liderazgo del ex presidente Mauricio Macri, se debate entre la opción de la cooperación con el gobierno, corriendo el riesgo de la cooptación y la desaparición, y la posibilidad, hoy muy incierta, de construir una opción superadora tanto del gobierno como de un kirchnerismo hoy en una clara posición defensiva.

La política es, antes que nada, materia de creencias. Si la economía continua su marcha por el camino de la estabilización macroeconómica, el gobierno podrá seguir presentándose, en este particular escenario político, como la única opción transformadora contando, en el próximo turno electoral, con un reforzado respaldo político-partidario. ¿Pero a qué costo para la mayoría de los argentinos y para la calidad del régimen democrático?

Para citar este capítulo: Darío Rodriguez, "Argentina, un año después", in D. Recondo (dir.), *América latina. El año político 2024/Les Etudes du CERI*, n° 275-276, Enero 2025 [en línea: www.sciencespo.fr/ceri/fr/papier/etude].

Bernardo Arévalo: entre semillas de esperanza y compromisos políticos Marc-André Anzueto

Han pasado ochenta años desde la Revolución del 20 de Octubre y las primeras elecciones libres en Guatemala, que dieron la victoria a Juan José Arévalo en diciembre de 1944. Este periodo de 1944 a 1954, conocido como los "Diez Años de Primavera", se caracterizó por numerosos avances democráticos y grandes transformaciones socioeconómicas. Con más del 58% de los votos, la inesperada victoria de su hijo, Bernardo Arévalo, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 20 de agosto de 2023, suscitó la esperanza de una "nueva primavera democrática". Sin embargo, con la corrupción endémica que asola las instituciones guatemaltecas, el Presidente Arévalo navega por un terreno extremadamente hostil para su gobierno.

Después de la salida de la CICIG: Semilla enfrenta la cultura de la impunidad

La oferta política presentada por el binomio presidencial del partido Semilla, Bernardo Arévalo y Karina Herrera, es una continuación de la campaña anticorrupción² liderada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) entre 2007 y 2017. Creado en 2014 por intelectuales guatemaltecos, Semilla fue inicialmente un grupo de análisis sobre la situación sociopolítica de Guatemala, enfocándose en temas como la pobreza, las desigualdades socioeconómicas entre las poblaciones indígenas y la fragilidad de la democracia³. Posteriormente, en 2015, el movimiento Semilla participó en la gran movilización ciudadana que derrocó al presidente Otto Pérez Molina (2012-2015) y su administración en el marco del caso de corrupción presentado por la CICIG y el MP conocido como "La Línea". Sin embargo, las acusaciones, procesamientos y castigos a funcionarios, empresarios, narcotraficantes y políticos guatemaltecos por parte de la CICIG y el MP han sacudido seriamente a la oligarquía y a la clase político-militar⁴. Tras la polémica decisión del presidente Jimmy Morales de poner fin al mandato de la CICIG en 2018⁵, el movimiento Semilla se convirtió en un partido político de centro-izquierda del espectro

¹ E. Guevara, "Las elecciones presidenciales de 2023: ¿Una nueva primavera democrática para Guatemala?", in D. Recondo (dir.), *América latina. El año político 2023/Les Études du CERI*, nº 271-272, enero de 2024 (**www.sciencespo.fr/ceri/fr/papier/etude**).

² R. A. Schwartz y A. Isaacs, "How Guatemala Defied the Odds", *Journal of Democracy*, Vol. 34, n° 4, 2023, pp. 21-35.

³ A. Pradilla, "Cómo pasó Semilla de grupo de análisis a querer competir en las elecciones", *Plaza Pública*, 7 de mayo de 2018 (https://www.plazapublica.com.gt/content/como-paso-semilla-de-grupo-de-analisis-querer-competir-en-las-elecciones).

⁴ Varias de las personas señaladas por la CICIG y el MP también estaban vinculadas a las violaciones masivas de derechos humanos cometidas durante y después del conflicto armado guatemalteco (1960-1996). Véase Marc-André Anzueto, "Effets de l'aide canadienne sur les enjeux de mémoire au Guatemala par l'entremise de la lutte contre l'impunité", en L. Celis y M. Hébert (dir.), Devoir de mémoire. Perspectives sociales et théoriques sur la vérité, la justice et la réconciliation dans les Amériques, Presses de l'université Laval, 2020, pp.183-202.

⁵ I. Escobar, "Pacto de Corruptos cumple un año", *Prensa Libre*, 12 de septiembre de 2018 (**www.prensalibre. com/guatemala/politica/pacto-de-corruptos-cumple-un-ao/**).

político guatemalteco. Aunque Semilla sólo tenía siete diputados en el Congreso desde las elecciones de 2019, incluyendo a Bernardo Arévalo, el partido desafió todos los pronósticos electorales en 2023 y provocó consternación dentro los asociados al "pacto de los corruptos".

Esta expresión, surgida en el argot guatemalteco en 2017, se refiere sobre todo a una "alianza informal" de políticos, oligarcas y empresarios que cooptan las instituciones guatemaltecas en colaboración con el crimen organizado⁶. Iniciada bajo la presidencia de Jimmy Morales (2016-2020), esta alianza se consolidó durante la presidencia de Alejandro Giammattei (2020-2024) y contribuyó al retroceso político y jurídico que aún afecta los resultados de las elecciones de 2023. Así, el partido Semilla propone una agenda política que contrasta con los intereses de esta "oligarquía criminal". El movimiento Semilla pretende sentar las bases de una "mayoría alternativa" que se define a sí misma como una "gran fuerza ciudadana" que busca la transformación del Estado "excluyente y discriminador" en uno "democrático y plural". A partir de 2023, Bernardo Arévalo propone "10 semillas para recuperar el futuro", el plan de gobierno de Movimiento Semilla donde la educación, la salud, el desarrollo, el medio ambiente y el diálogo constitucional forman parte de una ambiciosa hoja de ruta para un nuevo contrato social en 2056⁸.

Sobrevivir a la crisis política: movilización interna y apoyo internacional

Paradójicamente, las herramientas y prácticas previamente implementadas para combatir la impunidad guatemalteca proporcionan ahora instrumentos legales utilizados por el MP para criminalizar a la oposición⁹. Tres miembros del poder judicial guatemalteco a sueldo del "pacto de los corruptos" han intentado reiteradamente anular los resultados de las elecciones de 2023: la fiscal general, Consuelo Porras, el fiscal de Sección de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, y el juez penal de primera instancia, Fredy Orellana. Frente a los incesantes ataques de estos operadores judiciales contra el Presidente Arévalo y el partido Semilla¹⁰, la movilización interna, en particular de los jóvenes y de las organizaciones

⁶ La oligarquía guatemalteca se refiere al conglomerado de clanes familiares que han monopolizado el poder económico y político desde la época colonial. Varios representantes de esta oligarquía están vinculados al sector agroexportador y permanecen activos en el seno del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF). Promotor de las iniciativas del sector privado y opuesto a las reformas de la política fiscal desde su creación en 1957, el CACIF actúa como una especie de partido político de la élite económica del país. G. Lissardy, "Por qué la élite económica de Guatemala es considerada una de las más "voraces" de América Latina (y cuánto pesa en el rumbo del país)", *BBC News Mundo*, 16 de agosto de 2023 (www.bbc.com/mundo/articles/c2je2drrd05o).

⁷ Movimiento Semilla, "¿Quiénes somos?" (https://movimientosemilla.gt/quienes-somos).

⁸ Movimiento Semilla, Plan de Gobierno 2024-2028. Por un país para vivir. Para vivir bien, marzo 2023.

⁹ En este sentido, la primera candidata de Semilla en las elecciones presidenciales de 2019 fue la exfiscal general y jefa del MP que había trabajado estrechamente con la CICIG Thelma Aldana (2014-2018). Al igual que varios otros funcionarios de justicia guatemaltecos involucrados en la lucha contra la impunidad, se vio obligada a exiliarse.

¹⁰ G. Robert, "Le président élu pourrait ne jamais gouverner: la tentative de coup d'Etat judiciaire au Guatemala provoque une mobilisation jamais-vu", *The Conversation*, 3 de deciembre de 2023 (https://theconversation.com/le-president-elu-pourrait-ne-jamais-gouverner-la-tentative-de-coup-detat-judiciaire-au-guatemala-provoque-une-mobilisation-jamais-vu-216220).

de los pueblos indígenas, junto con el apoyo de la comunidad internacional, permitió detener los intentos de golpe de Estado judicial en Guatemala hasta la investidura presidencial.

Desde el otoño de 2023 comenzaron las manifestaciones a una escala sin precedentes en apoyo del Presidente Arévalo y contra los implicados en el "pacto de los corruptos". Las Autoridades Comunales de los 48 cantones de Totonicapán, iniciaron un paro nacional indefinido el 2 de octubre de 2023, y la resistencia duró más de 106 días consecutivos hasta la toma de posesión de Arévalo el 14 de enero de 2024. Estas grandes movilizaciones de diversos sectores de la población guatemalteca en todo el país se caracterizaron por más de 142 bloqueos de carreteras. La toma de posesión presidencial estuvo marcada por un ambiente tenso y lleno de incertidumbre, debido a las disputas legales en el seno del Congreso. La ceremonia de investidura del Presidente Arévalo se retrasó más de nueve horas, lo que provocó enfrentamientos entre manifestantes y la policía. En medio de este ambiente caótico, el administrador de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) declaró en la plataforma X (antes Twitter) que no había "ninguna duda" de que Bernardo Arévalo era el Presidente de Guatemala, llamando a todas las partes a "mantener la calma" y pidiendo al Congreso guatemalteco que "respete la voluntad del pueblo"11. De hecho, el apoyo de la administración Biden fue crucial para asegurar la victoria de Arévalo. En este sentido, Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá emitieron sanciones al estilo Magnitsky¹² contra funcionarios guatemaltecos corruptos, demostrando que estaban dispuestos a utilizar mayores medios económicos y diplomáticos para garantizar la toma de posesión de Bernardo Arévalo¹³.

Sin embargo, incluso antes del trastorno causado por su toma de posesión, la selección y presentación del gabinete del Presidente Arévalo ya estaba causando revuelo. Su gabinete estaba formado por siete hombres y siete mujeres, incluida una mujer indígena, Miriam Roquel, quien fue nombrada Ministra de Trabajo¹⁴. Dado que los pueblos indígenas constituyen más del 43,75% de la población guatemalteca, la decepción es palpable entre varias organizaciones que consideran que la toma del poder no habría sido posible sin su apoyo¹⁵. Con sólo 23 de los 160 escaños del Congreso, el Presidente Arévalo tiene las "manos atadas" y los compromisos son necesarios para sobrevivir. Mientras la legitimidad de Arévalo y del partido Semilla es constantemente cuestionada por actores políticos vinculados al "pacto de los corruptos", su imagen contrasta en el exterior, donde ya cuenta con numerosos apoyos internacionales.

¹¹ N.Wirtz y M. B. Sheridan, "Guatemalan anti-graft leader Arévalo sworn in as president after 9-hours delay", *The Washington Post*, 15 de enero de 2024.

¹² Sanciones financieras y restricciones de visas contra personas o entidades extranjeras que hayan cometido graves violaciones de los derechos humanos o actos de corrupción en cualquier parte del mundo.

¹³ Entre 2021 y 2024, Washington impuso restricciones de visado y sanciones económicas a más de 400 ciudadanos guatemaltecos, incluidos funcionarios gubernamentales, representantes de la industria y miembros de sus familias, por participar en actividades corruptas que socavaron el Estado de derecho en Guatemala, incluido el expresidente Alejandro Giammattei (2020-2024).

¹⁴ R. Gressier y J. L. Sanz, "Arévalo's Choice of Cabinet Clashes with His Base's Expectations", *El Faro*, 10 de enero de 2024 (https://elfaro.net/en/202401/centroamerica/27204/arevalo-rsquo-s-choice-of-cabinet-clashes-with-his-base-rsquo-s-expectations).

¹⁵ J. Álvarez Díaz, "Los pueblos indígenas de Guatemala queman sus últimas esperanzas con un Arévalo que gobierna con las manos atadas", *Equal Times*, 9 de agosto de 2024 (**www.equaltimes.org/los-pueblos-indigenas-de-guatemala**).

Diplomático de carrera, el Presidente Arévalo trató inmediatamente de reposicionar a Guatemala en la escena mundial con una serie de giras diplomáticas por Europa y Estados Unidos en febrero y marzo de 2024. En este sentido, fue el primer presidente guatemalteco en asistir a la Conferencia de Seguridad de Múnich en febrero de 2024, un foro dedicado a cuestiones de seguridad internacional, donde sus reuniones bilaterales con líderes ucranianos e israelíes indicaron claramente su posición en el contexto geopolítico actual¹⁶. De hecho, el Presidente Arévalo representa una "historia de éxito" en la defensa de la democracia a los ojos de varios aliados occidentales, en particular para los Estados Unidos¹⁷. Por ejemplo, en agosto de 2024, el Presidente Arévalo anunció que su Gobierno no reconocía a Nicolás Maduro como Presidente electo de Venezuela tras las elecciones venezolanas del 28 de julio¹⁸.

El cumplimiento de los 100 días y la batalla en curso contra el pacto de corruptos

Gozando de un alto nivel de simpatía en la escena internacional, el Presidente Arévalo marcó el logro de los 100 días de su gobierno el 23 de abril de 2024 y presentó "10 ejes estratégicos" para mejorar las condiciones de vida de los guatemaltecos en el período 2024-2028¹⁹. El 5 de mayo de 2024, en un intento por enfrentar frontalmente la corrupción institucionalizada, el Presidente Arévalo solicitó formalmente al Congreso la renuncia de la Fiscal General y jefe del MP Consuelo Porras. A pesar de ser considerado "corrupta" y "antidemocrática" por los guatemaltecos y principales donantes de cooperación internacional a Guatemala, Porras se niega a dimitir y pretende permanecer en el cargo hasta el final de su mandato en 2026²⁰. Además, Porras y el MP solicitaron por tercera vez, el 20 de agosto de 2024, el levantamiento de la inmunidad del presidente Arévalo por un presunto caso de corrupción. Tras once meses en el cargo, es probable que las luchas de poder entre el Presidente Arévalo y la Fiscal General siguen siendo cruciales para la aplicación de los "10 ejes estratégicos" del Gobierno²¹.

¹⁶ El Gobierno de Arévalo votó el 10 de mayo de 2024 a favor de una resolución que mejora el derecho de Palestina en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Hay que recordar que la embajada de Guatemala en Israel se trasladó a Jerusalén en 2018.

¹⁷ M. Chang, "Guatemala's New Foreign Policy May Start with the U.S.", *Americas Quarterly*, 21 de marzo de 2024 (https://americasquarterly.org/article/guatemalas-new-foreign-policy-may-start-with-the-u-s/).

¹⁸ Sobre estas elecciones, véase la contribución de Thomas Posado a este volumen.

¹⁹ Inspiradas en las "10 semillas para recuperar el futuro" de la plataforma electoral del partido Semilla, persiguen los siguientes objetivos: 1) transformación del gobierno en uno eficaz y transparente, 2) desarrollo social, 3) protección y seguridad social, 4) lucha contra la desnutrición y la malnutrición, 5) construcción de infraestructuras económicas para el buen vivir, 6) reducción de la brecha digital por medio de la tecnología y la innovación, 7) convivencia pacífica por medio de la seguridad democrática, 8) conservación y protección del medio ambiente, 9) promoción de una ciudadanía sin fronteras y 10) establecimiento de las bases para un nuevo contrato social.

²⁰ Varios de los fiscales que intentaron anular las elecciones de 2023 y jueces acusados de corrupción se presentan actualmente a las elecciones de la Corte de Apelaciones de Guatemala, entre ellos el fiscal de la FECI Rafael Curruchiche. Véase Ferdy Montepeque, "Cómo los fiscales que intentaron anular las elecciones y magistrados señalados compiten por las salas de Apelaciones", *Plaza Pública*, 18 de septiembre de 2024 (www.plazapublica.com.gt/justicia/informacion/como-los-fiscales-que-intentaron-anular-las-elecciones-y-magistrados-senalados).

²¹ En el momento de escribir estas líneas, tanto el presidente Arévalo como representantes parlamentarios como Porras y Curruchiche han felicitado a Donald Trump por su victoria en las elecciones presidenciales estadounidenses del 5 de noviembre de 2024. El apoyo de la futura administración Trump será crucial para la continuidad del mandato del presidente Arévalo y su lucha contra el "pacto de los corruptos".

En relación con su propia lucha contra el "pacto de los corruptos" y como parte de las celebraciones en torno a los 203 años de la independencia de Guatemala, Bernardo Arévalo habló recientemente del legado político de su padre y de la Revolución de 1944, describiéndola como una "revolución valiente" y una "revolución viva"²². De hecho, muchos de los objetivos del partido Semilla para 2024-2028 están en consonancia con una serie de importantes reformas democráticas iniciadas a finales de la década de 1940 que afectan a la educación, las condiciones de vida y las poblaciones indígenas. Más allá de las similitudes cuando comparamos sus trayectorias y orientaciones políticas en el panorama guatemalteco, es el contexto hostil en el que se desarrollan sus presidencias lo que da lugar a una inquietante sensación de "déjà vu".

²² Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, "Presidente Arévalo afirma que la Independencia está viva. "Es una lucha diaria'", 12 de septiembre de 2024, (https://bernardoarevalo.presidencia.gob.gt/presidente-arevalo-afirma-que-la-independencia-esta-viva-es-una-lucha-diaria/).

Para citar este capítulo: Marc-André Anzueto, "Bernardo Arévalo: entre semillas de esperanza y compromisos políticos" in D. Recondo (dir.), *América latina. El año político 2024/Les Etudes du CERI*, n° 275-276, Enero 2025 [en línea: www.sciencespo.fr/ceri/fr/papier/etude].

¿Crisis migratoria en América Latina? Patricia M. Martin

En la última década, más de 7,7 millones de venezolanos¹ – que representan el 25% de la población – han abandonado su país*. Esta población diversa y en gran medida empobrecida está experimentando una forma de desplazamiento transnacional sin precedentes. Las principales causas son una prolongada crisis económica y política provocada por la corrupción estatal, las sanciones punitivas de Estados Unidos y el creciente autoritarismo político. Aunque algunos venezolanos han emigrado a Estados Unidos, Canadá y otros destinos septentrionales, la gran mayoría – 6,5 millones – se ha asentado en países de América Latina y el Caribe, incluyendo 2,5 millones en Colombia y 1,5 millones en Perú². Este movimiento de población marca un importante punto de inflexión para Venezuela, un país que antaño atraía a inmigrantes de todo el mundo. Si bien el éxodo de venezolanos representa una de las dinámicas migratorias más llamativas de la era contemporánea en América Latina, también han surgido otras formas de migración igualmente inéditas. Entre ellas cabe citar el aumento de la movilidad y los desplazamientos intrarregionales, así como el incremento de la migración procedente de Africa y Asia. El seguimiento de estos cambios y el desarrollo de herramientas analíticas para comprender sus causas sigue siendo un reto, sobre todo debido a la politización de la migración. En este breve ensayo sobre la migración contemporánea en América Latina, me basaré en la reciente teorización de Alvarez Velasco sobre los "corredores migratorios" como marco analítico crítico³, ya que su trabajo llama la atención al surgimiento de un régimen fronterizo transnacional en disputa en América Latina, una parte de la última expresión del imperialismo y la intervención estadounidenses en la región. Este enfoque considera la migración como un fenómeno transnacional y, por tanto, permite cuestionar el discurso profundamente nacionalista sobre la "crisis migratoria".

Las (im)movilidades contemporáneas en América Latina4

Desde la época de la conquista, diversas formas de migración y desplazamiento, libres o no, han tenido una profunda influencia en las sociedades y territorios latinoamericanos, un proceso que continúa vigente en la actualidad. En el contexto contemporáneo, la reciente teorización de Alvarez Velasco sobre los corredores migratorios resulta particularmente útil. Generalmente, el término "corredor migratorio" se utiliza de forma descriptiva para referirse

^{*} Agradezco la ayuda de Gerardo Romero Perea con la traducción en español.

¹ HCR, "Emergency Appeal. Venezuela situation": www.unhcr.org/emergencies/venezuela-situation?_gl=1*dnb5up*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQjwxsm3BhDrARIsAMtVz6Nt4htSFeIEHIssf7D8LN9gH8AG6vwP-3fchNxouxe2TLYjL76XJ6oaAnzREALw wcB&gclsrc=aw.ds.

² M. McAuliffe y L. A. Oucho (dir.), *World Migration Report 2024*, Genève, International Organization for Migration (IOM), 2024, p. 89.

³ S. Alvarez Velasco, "Between Hostility and Solidarity: The Production of the Andean Region–Southern Cone Transit Migratory Corridor", In G. Herrera y C. Gómez (dir.), *Migration in South America*, Cham, Springer, 2022, pp. 51-75 (https://doi.org/10.1007/978-3-031-11061-0 3).

⁴ Utilizo el termino (im)movilidad para subrayar la natura relacional y desigual de los derechos a la movilidad.

a los patrones migratorios que se establecen entre un país de origen y un país de acogida, México o Cuba, y Estados Unidos, por ejemplo⁵. En contraposición a esta definición poco precisa, Alvarez Velasco sostiene que un corredor migratorio debe entenderse como "un espacio de lucha transnacional y contingente, producto de la tensión entre movilidad y control"⁶. Relaciones de poder a múltiples escalas que abarcan una serie de formas de (im)movilidad estructuran estos corredores. Si bien los Estados-nación desempeñan un papel central en la configuración de la (im)movilidad de los migrantes, hay una multiplicidad de otros actores que comparten o impugnan este control, tanto dentro como fuera de las fronteras nacionales. Estos actores incluyen un amplio abanico de agentes legales y extralegales implicados en las economías de la migración (transporte, comunicaciones, finanzas, vivienda, mano de obra). Dentro de estos disputados y a menudo violentos campos de poder, los individuos y grupos subalternos luchan por ejercer su movilidad autónoma.

El último Informe sobre las migraciones mundiales de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)⁷ ofrece una visión general de las tendencias significativas que caracterizan los patrones migratorios en América Latina en la actualidad. Estas tendencias indican la existencia de dos grandes corredores migratorios. El primero se extiende desde el norte de Sudamérica (Venezuela, Colombia) hacia el "norte de América" (en particular, Estados Unidos y Canadá), mientras que el segundo se extiende desde la región andina hacia el Cono Sur, tal y como analiza Alvarez Velasco⁸. En cierta medida, este patrón muestra las relaciones geopolíticas generales en las Américas, reflejando la continuación de la hegemonía estadounidense, al tiempo que indica la construcción de un espacio político y económico alternativo. Es importante recordar que estos disputados corredores contemporáneos reflejan patrones migratorios acumulativos, históricamente arraigados a varias escalas.

En América Latina han surgido formas permanentes y cíclicas de migración en la intersección del desarrollo capitalista global y las políticas fronterizas nacionales. Durante el siglo XX, en una época en la que las fronteras físicas entre los países eran generalmente porosas, surgieron en muchos lugares patrones migratorios regionales relacionados con la expansión de la producción agrícola de exportación (café, caña de azúcar, bananas, etc.). En América Central, por ejemplo, los salvadoreños emigraron al país vecino Honduras para trabajar en las plantaciones bananeras de la United Fruit y colonizar tierras; los guatemaltecos se trasladaron a México para trabajar en las plantaciones de café; y los nicaragüenses emigraron a Costa Rica para trabajar en la producción de piña⁹. En el Caribe, los haitianos emigraron a la República Dominicana para trabajar en los campos de caña de azúcar. En Sudamérica, los bolivianos emigraron a Argentina, trabajando primero en la producción de azúcar y luego en fábricas y en el sector informal de Buenos Aires.

⁵ S. Alvarez Velasco, "Between Hostility and Solidarity...", art. citado, p. 53.

⁶ Ibid., p. 51, traducción mía.

⁷ M. McAuliffe y L. A. Oucho (dir.), World Migration Report 2024, op. cit.

⁸ S. Alvarez Velasco, "Between Hostility and Solidarity...", art. citado.

⁹ D. M. Prunier y S. Salazar, "Fronteras centroamericanas y movilidad en 2020. Central American borders and mobility in 2020. A region of fractures and inequalities impacted by COVID-19", *Estudios Fronterizos*, n° 22, 2021, e073 (https://doi.org/10.21670/ref.2110073).

Aunque generalmente se consideran una forma de migración laboral, estos patrones de movilidad regional también forman parte de campos transnacionales de poder político. En los países de origen, la emigración ha servido como supuesta solución a la pobreza y la marginación, coincidiendo con los intereses de las élites políticas y económicas; en los países de acogida, los emigrantes han sido una fuente de mano de obra altamente explotable. Durante este periodo, los emigrantes, vulnerables a la estigmatización y la discriminación, sirvieron como chivos expiatorios. En la década de 1930, por ejemplo, el dictador de la República Dominicana, Rafael Trujillo, organizó la masacre de haitianos que vivían en la región fronteriza entre ambos países. En los años sesenta, la población salvadoreña de Honduras se convirtió en uno de los principales objetivos políticos, lo que provocó la expulsión de unos 300.000 salvadoreños a finales de la década.

Durante la segunda mitad del siglo XX, estas formas de migración regional "sur-sur" – que continúan hasta hoy – fueron opacadas cada vez más por la migración entre América Latina y Estados Unidos. La formación de este "corredor migratorio" es compleja. Históricamente, la migración circular y permanente de mexicanos a Estados Unidos ha estado en el centro de este proceso. Entre las formas importantes de migración se incluyen los movimientos entre comunidades fronterizas y las formas autorizadas y no autorizadas de migración laboral, en particular, pero no exclusivamente, en la agricultura. Aunque la frontera física entre Estados Unidos y México siguió siendo relativamente porosa a lo largo del siglo XX, los emigrantes mexicanos y los ciudadanos estadounidenses de origen mexicano fueron objeto de explotación y racismo, así como de deportaciones masivas dirigidas por el Estado en diferentes períodos del siglo XX¹⁰. A partir de la década de 1960, la emigración a Estados Unidos desde otros países latinoamericanos se desarrolló rápidamente, desencadenada por las convulsiones políticas derivadas del enfrentamiento entre los movimientos políticos revolucionarios y democráticos, por un lado, y el militarismo contrainsurgente y la Guerra Fría, por otro. El éxodo de cubanos en la década de 1960 y el desplazamiento transnacional de guatemaltecos y salvadoreños en la década de 1980 son sólo algunas manifestaciones de este proceso.

El año 1994 marcó un importante punto de inflexión en la política fronteriza de EEUU, con importantes repercusiones en el surgimiento de un corredor migratorio transnacional que une Centroamérica, México y EE.UU¹¹. Con la introducción de la "Operación Gatekeeper", EE.UU. inauguró la política de "prevención a través de la disuasión", dirigida a detener a los migrantes no autorizados antes de que llegaran a territorio estadounidense. Esta nueva estrategia territorial dio lugar a una inversión sin precedentes en infraestructuras de seguridad fronteriza¹², transformando fundamentalmente la naturaleza material e imaginaria de la frontera entre México y Estados Unidos. En un proceso que no ha hecho sino profundizarse y endurecerse desde entonces, en particular a raíz del 11 de septiembre de 2001, la inmigración se ha convertido en una cuestión decisiva de seguridad nacional en Estados

¹⁰ J. Nevins, Operation Gatekeeper and Beyond the War on "Illegals" and the Remaking of the US-Mexico Boundary (2nd ed.), New York & Oxon, Routledge, 2010.

¹¹ Ibid.

¹² T. Miller, "30 Years of Operation Gatekeeper: A Q&A with Joseph Nevins", *The Border Chronicle*, 26 septembre 2024 (www.theborderchronicle.com/p/30-years-of-operation-gatekeeper).

Unidos¹³. La política de prevención a través de la disuasión ha sentado las bases de una profunda criminalización de los migrantes (separaciones familiares, deportaciones y exclusiones, encarcelamiento), así como de la externalización de la política migratoria estadounidense a todo el continente americano.

Con mayor o menor intensidad y a través de una serie de políticas a menudo vinculadas a la ayuda exterior, Estados Unidos intenta persuadir a los países hacia el sur para¹⁴ que eviten que los migrantes lleguen a la frontera estadounidense. Bajo la administración Trump, por ejemplo, Estados Unidos firmó "acuerdos cooperativos de asilo" con Guatemala, Honduras y El Salvador, una política a la que posteriormente puso fin la administración Biden. En el periodo previo a las elecciones estadounidenses de 2024, Estados Unidos presionó intensamente a México para que mantuviera alejados a los migrantes que cruzaban el país de la frontera entre Estados Unidos y México. En junio de 2024, Estados Unidos firmó un acuerdo con el gobierno panameño para detener la migración no autorizada a través del Tapón del Darién. En un proceso dinámico, las medidas de seguridad cada vez más punitivas en todo el corredor migratorio hacia el norte llevan a los migrantes a recurrir a redes informales e ilícitas para garantizar su tránsito; este proceso aumenta la vulnerabilidad y la invisibilidad de los migrantes, al tiempo que fortalece las redes delictivas.

Aunque la OIM informa de que la migración al "Norte de América" desde América Latina sigue siendo una tendencia dominante¹⁵, bajo la sombra de la política migratoria estadounidense, los procesos migratorios que caracterizan a Centroamérica y México se han vuelto cada vez más complejos. Si bien estos países siguen enfrentándose a la emigración, también están negociando con la migración de tránsito y la migración de retorno voluntaria y forzada. Para México, este cambio también implica servir como país de destino para los solicitantes de asilo, lo que resulta un tanto paradójico.

Mientras que el corredor migratorio hacia el norte sigue siendo el más visible en términos geopolíticos, en Sudamérica también se ha desarrollado un corredor migratorio que se extiende desde la región andina hasta los países del cono sur (Argentina, Chile, Brasil). Además del cierre de la frontera estadounidense, una visión más amplia de los derechos de los refugiados, plasmada en el Acuerdo de Cartagena de 1984, y las políticas de libre circulación de mano de obra del MERCOSUR han fomentado la aparición de este espacio migratorio alternativo. De hecho, como muestra el cuadro 1, entre 2015 y 2020, Sudamérica recibió muchos más migrantes procedentes de América Latina que los Estados Unidos. Aunque la migración venezolana representa la mayor parte de este patrón, Sudamérica también ha sido un destino importante para los migrantes del Caribe, incluyendo Haití, Cuba y la República Dominicana. Sin embargo, los contornos políticos exactos de este corredor migratorio alternativo siguen sin estar claros. No sólo existe una brecha significativa entre los ideales de libre movilidad y hospitalidad y su aplicación sobre el terreno, sino que los

¹³ L. Faret, "Enjeux migratoires et nouvelle géopolitique à l'interface Amérique latine-Etats-Unis", *Hérodote*, n° 171, 2018, pp. 89-105 (https://doi.org/10.3917/her.171.0089).

¹⁴ Y al norte...

¹⁵ M. McAuliffe y L. A. Oucho (dir.), op. cit.

¹⁶ S. Alvarez Velasco, "Between Hostility and Solidarity...", art. citado.

países sudamericanos también han dado un paso atrás respecto a una política general de apertura hacia los migrantes. Esto es particularmente visible en la reciente aplicación de políticas de visados para los migrantes del Caribe y África, pero también en el aumento de la cooperación para "ordenar" la movilidad bajo los auspicios de Estados Unidos¹⁷.

Cuadro 1
Cambios en las reservadas de migrantes internacionales en destinaciones selectas en las Américas, 2015-2020

Origen	Destinación América del Sur	Destinación Chile	Destinación Estados Unidos	Destinación México
Nacidos en el resto del mundo 2015	6,080,207	639,724	48,178,877	1,013,691
Nacidos en el resto del mundo 2020	10,887,474	1,645,015	50,632,836	1,197,624
Diferencia absoluta (2020-2015)	4,807,267	1,005,291	2,453,959	183,933
Aumentación en porcentaje (2020-2015)	79.1	157.1	5.1	18.1
Nacidos en América Latina 2015	4,366,500	484,543	24,107,834	170,752
Nacidos en América Latina 2020	9,052,250	1,526,171	24,590,255	272,836
Diferencia absoluta (2020-2015)	4,685,750	1,041,628	482,421	102,084
Aumentación en porcentaje (2015-2020)	107.3	215	2	59.8

Fuente: Preparado por la autora con datos del UNDESA. He incluido Chile para subrayar el crecimiento rápido de la populación inmigrante en el país. Agradezco à Claudia Masferrer por su ayuda en la elaboración del cuadro.

Este breve comentario se ha basado en la teorización de Alvarez Velasco sobre los "corredores migratorios" para examinar el fenómeno contemporáneo de la migración en las Américas. La migración es un fenómeno transnacional que refleja la capacidad de extraer valor de los cuerpos (im)móviles en condiciones de desarrollo desigual. Las estrategias de control de la (im)movilidad aparecen a múltiples escalas, traspasando fronteras y transformando las dinámicas de movilidad regional. A medida que varios países latinoamericanos siguen el ejemplo de Estados Unidos y cierran sus fronteras a los migrantes, las trayectorias de las personas en tránsito se vuelven cada vez más complejas, extendiéndose tanto en el tiempo como en el espacio. Los espacios de tránsito y espera, a veces interminables, ponen de relieve la producción de sujetos apátridas: personas que no pueden ejercer la ciudadanía en ningún lugar y que apenas tienen acceso a formas básicas de seguridad humana. A pesar de la cacofonía de retóricas nacionalistas, la situación de los migrantes en las Américas señala una crisis transfronteriza de derechos humanos y un ataque a la humanidad fundamental de las personas en movimiento.

Para citar este capítulo: Patricia P. Martin, "¿Crisis migratoria en América Latina?", in D. Recondo (dir.), *América latina. El año político 2024/Les Etudes du CERI*, nº 275-276, Enero 2025 [en línea: www.sciencespo.fr/ceri/fr/papier/etude].

¹⁷ *Ibid*.

Segunda parte

América latina frente a la historia

La batalla de Ayacucho (1824) Gustavo Pastor

Revisitar la batalla de Ayacucho nos permite regresar al tiempo de la fundación de las repúblicas latinoamericanas. Lo más resaltante es que muchos de los problemas presentes a inicios de las repúblicas se mantienen vigentes hasta hoy. En este sentido, el camino hacia la libertad política del Perú fue bastante tortuoso y terminaría de concretarse recién en la segunda década del siglo XIX. De hecho, este proceso todo el tiempo estuvo en peligro y terminó de finiquitarse gracias al férreo liderazgo de Simón Bolívar y sus principales generales.

Un contexto político complicado

El antecedente más notable de la guerra por la independencia fue la masiva revuelta de José Gabriel Condorcanqui (conocido como Tupac Amaru II) en 1780. Este líder indígena se rebeló al mando de treinta mil hombres y, a pesar de ser capturado y ejecutado, su revuelta continuó dos años más y costó decenas de miles de muertes. Los españoles pensaron incluso que podrían perder el control de la región sur andina. Lo fundamental de esta revuelta es que marca un punto de inflexión en el imaginario de los pobladores locales sobre las fragilidades que presentaba el régimen virreinal¹.

En las siguientes décadas, las guerras de la corona española contra las principales potencias europeas significaron un aumento de impuestos y de tensiones al interior de las colonias americanas. Al mismo tiempo, la influencia de las ideas de la Ilustración, así como de los modelos de la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos y otros países americanos, sirvieron de inspiración para muchos líderes regionales. Este proceso intelectual de cuestionamiento del antiguo régimen colonial estuvo compuesto por diversos proyectos políticos en competición: el liberalismo republicano criollo, el protectorado, la monarquía constitucional, el federalismo, etc.².

A pesar de las revueltas puntuales en diferentes zonas del territorio, la mayoría de pobladores de todos los sectores socioeconómicos se mantenían bastante fieles a la monarquía española. En efecto, el *statu quo* colonial favorecía al virreinato peruano gracias al monopolio comercial de Lima. Además, el régimen colonial había inculcado un profundo temor en las élites urbanas contra los levantamientos de las clases populares, además, persuadían a los creyentes a través de los púlpitos católicos de no apoyar a los rebeldes, mientras, aumentaban las capacidades represivas de sus fuerzas armadas³.

En la guerra contra Francia (1793-1795), Napoleón obligó a Fernando VII a abdicar para ceder su trono a José Bonaparte. Los españoles de todas las regiones se opusieron en bloque, constituyéndose las Cortes de Cádiz (1810-1814) como una asamblea constituyente que,

¹ C. Walker, "'¡Qué complejo es su destino!': El Perú y la difícil transición de la colonia a la república (1780-1840)", in P. Drinot y A. Vergara (dir.), *La condena de la libertad*, Lima, Crítica, 2022, pp. 32-36.

² C. Contreras y C. Marcos, Historia del Perú contemporáneo, Lima, IEP, 2013, pp. 42-67.

³ C. Walker, "'¡Qué complejo es su destino!'...", art. citado, p. 38.

bajo el control de los liberales, extendió una serie de derechos para todas las poblaciones hispanoamericanas. En 1814, Fernando VII regresó al poder rechazando la Constitución de Cádiz y reinstaurando la monarquía absoluta; sin embargo, seis años después, los liberales lo obligaron a reconocer nuevamente la Constitución de 1812. Toda esta inestabilidad política hizo que la idea de la independencia hiciera su camino en un país relativamente favorable a la monarquía española.

La campaña militar

En agosto de 1820, el general José de San Martín zarpó del puerto de Valparaíso para liberar al Perú con un contingente marítimo jamás antes visto en la región⁴. El proyecto de San Martín se vio beneficiado por las disputas en el seno del alto mando español. El virrey Pezuela, mientras organizaba la defensa de Lima, fue depuesto por un golpe militar a cargo del general La Serna, quien, como nuevo virrey, ordenó la inmediata evacuación de Lima. El 12 de julio de 1821, San Martín llegó a una ciudad abandonada por las tropas realistas y procedió catorce días después a declarar la independencia del Perú. Sin embargo, los independentistas sabían perfectamente que la guerra con España recién comenzaba.

El nuevo virrey movió sus ejércitos hacia la sierra para gobernar desde el Cuzco, mientras esperaba apoyo naval de España. En los dos años siguientes, las tropas del virrey consiguieron importantes victorias militares. Mientras, Lima se sumergía en el desorden, padeciendo de fiebre tifoidea, desabastecimiento de alimentos, sueldos impagos a los soldados patriotas, etc. En esas circunstancias, José de San Martín se reunió con Simón Bolívar en Guayaquil para discutir una estrategia conjunta para desalojar definitivamente a los españoles del Perú. Sin embargo, al no llegar a un acuerdo concreto, San Martín entregó el poder al naciente Congreso peruano para partir al exilio en octubre de 1822⁵.

El general Bolívar hizo su entrada a Lima en septiembre de 1823. Los líderes peruanos lo invitaron a dirigir la campaña libertadora después de devastadoras derrotas ante las fuerzas realistas. Los experimentados comandantes españoles (La Serna, Canterac, Valdés y Olañeta) venían recuperando el control del territorio. Por su parte, los líderes peruanos peleaban entre ellos por el poder, sin buscar realmente vencer a los españoles. En estas circunstancias, Bolívar decidió asumir poderes dictatoriales y comenzar a fortalecer sus ejércitos, reclutando hombres, confiscando fondos y productos para iniciar una ofensiva frontal⁶.

El inesperado triunfo en Junín

Los patriotas sabían que las batallas decisivas se combatirían en la sierra. En junio de 1824, Bolívar aprovechó la rebelión del general Olañeta contra el virrey La Serna para apoderarse

⁴ A. McFarlane, War and Independence in Spanish America, Londres, Routledge, 2014, p. 360.

⁵ P. Klaren, Nación y sociedad en la historia del Perú, Lima, IEP, 2013, p. 171.

⁶ M. Zuluaga, Las luchas por la independencia, Lima, IEP, 2021, pp. 268-269.

de las minas de plata de Cerro de Pasco. El ejército realista quedó dividido en dos bandos: por un lado, el virrey La Serna en el Cuzco, y, por el otro, el rebelde Olañeta en el Alto Perú. Bolívar inmediatamente dirigió su ejército de 7.500 hombres hacia la sierra central para enfrentar al temible Canterac con más de 8.000 soldados.

El 8 de agosto, los ejércitos de Bolívar y Canterac se encontraron en inmediaciones del lago Chinchaycocha (Junín), donde se realizó una peculiar batalla de caballerías a 4100 metros de altura. Los jinetes del bando patriota, gracias a la información brindada por sus milicias guerrilleras, consiguieron alcanzar al ejército realista. Canterac, convencido de su superioridad, envió a su caballería compuesta de aproximadamente 1.300 jinetes a acabar con los 900 hombres a caballo de Bolívar.

Las tropas independentistas resistieron la primera carga frontal de las tropas españolas. Sin embargo, los jinetes realistas consiguieron poco a poco resquebrajar las líneas de Bolívar, sobre todo cuando los hombres del general Miller no lograron ejecutar la maniobra planeada⁷. Bolívar ante la inminente derrota decidió replegar los restos de su caballería para minimizar las pérdidas. Sin embargo, todavía quedaba un grupo de Húsares del Perú rezagados y listos para entrar en combate. El general La Mar, jefe de la división peruana, envió un mensaje al coronel Suárez para que replegara inmediatamente a sus hombres. Sin embargo, el teniente José Andrés Razuri, al ver el flanco izquierdo y la retaguardia realista desprotegidos, comunicó a Suárez que tenían que atacar⁸. Esta desobediencia iría a cambiar inesperadamente la suerte de la batalla de Junín.

Los hombres de Suárez cargaron contra las tropas realistas, quienes fueron sorprendidos por un ataque en retaguardia. Los jinetes patriotas al observar esta nueva configuración se reorganizaron para cargar nuevamente contra los españoles que, a pesar de combatir ferozmente durante 45 minutos, terminaron otorgando una inesperada victoria a los hombres de Bolívar. En la batalla de Junín, los realistas perdieron 12 oficiales, 245 soldados, 80 prisioneros y abandonaron 400 caballos ensillados, mientras que los patriotas perdieron 45 jinetes y tuvieron 99 heridos (incluyendo oficiales como Miller y Necochea)⁹. Este inesperado triunfo significó un punto de inflexión en la guerra porque fue la primera victoria de los independentistas en varios años y también contribuyó a crear dudas en la moral de las tropas españolas.

La batalla de Ayacucho

Bolívar regresó a Lima con una pequeña parte del ejército para poner orden en la ciudad (que cambió de manos cinco veces entre 1821 y 1824), dejando al general Sucre a cargo de la campaña militar en la sierra. Es posible que Bolívar pensara que no habría ninguna batalla importante en época de lluvias. El virrey La Serna tomando conocimiento de la separación del Ejército Unido Libertador decidió atacar a los hombres de Sucre. Comenzó entonces,

⁷ G. Yáñez, Junín y Ayacucho, Lima, Imprenta de la Intendencia General de Guerra, 1924, p. 39.

⁸ H. Pereira, La campaña libertadora de Junín y Ayacucho, Lima, Ed. Jurídica, 1975, p. 45.

⁹ F. De la Barra, *La campaña de Junín y Ayacucho*, Lima, Comision nacional del sesquicentenario de la independencia del Peru, 1974, pp. 158-159.

entre octubre y diciembre, una guerra de posiciones en la sierra donde las tropas realistas buscaban enfrentarse a las tropas independentistas.

Por fin, Sucre recibió autorización para combatir en la Pampa de la Quinua en Ayacucho (rincón de los muertos en quechua). Un hecho curioso de esta batalla es que el general Monet habría solicitado al bando patriota que los soldados con parientes o amigos en el bando contrario pudieran despedirse antes de comenzar el combate (acto que habría sido aceptado por Sucre)¹⁰. En los cerros colindantes al campo de batalla se encontraban indígenas fieles a la causa española con instrucciones de no dejar huir a ningún patriota en fuga. Las tropas independentistas entendían que debían triunfar o morir. Sucre escogió hábilmente un campo de batalla que parecía favorable a los realistas, pero que, en realidad, ofrecía extraordinarias ventajas, como ser una llanura rodeada de profundas depresiones que aseguraban los flancos de sus formaciones. Además, este terreno también eliminaba la posibilidad de envolvimiento o desbordamiento por parte del ejército realista, impidiendo que el virrey desplegara todas sus fuerzas a la vez y obligándolo a un ataque frontal¹¹.

Ambos bandos terminaron sus planes de batalla en la mañana del 9 de diciembre de 1824. Los españoles acordaron un plan concertado entre los altos oficiales, mientras que los patriotas decidieron adaptarse al dispositivo realista¹². Los españoles contaban con aproximadamente 9.310 hombres (según la gran mayoría de historiadores, aunque el general Valdés menciona 6.910 soldados), mientras que las tropas patriotas contaban con 5.780 hombres (según lo descrito por Sucre)¹³. Los españoles además poseían 14 piezas de artillería mientras que los peruanos solo una.

El general Valdés inició las hostilidades atacando las posiciones patriotas. El choque posterior entre ambos ejércitos fue violento y contra todos los pronósticos fue tornándose favorable para las tropas patriotas. Entre ruidos de sables y desgarradores gritos de los heridos, los realistas fueron dejando poco a poco decenas de cadáveres en el campo de batalla. Los esfuerzos del virrey para que sus ejércitos dominaran la batalla fueron cada vez más infructuosos. Sucre parecía dominar todos sus ataques. En esta configuración, el virrey decidió lanzarse como granadero en medio de las filas enemigas, siendo tomado prisionero. Esto contribuyó a diseminar todavía más el pánico y desorden entre las tropas realistas, haciendo que muchos soldados desertaran la batalla¹⁴. Al final, los realistas contaban 1.800 muertos y 700 heridos, mientras que los patriotas tuvieron 300 muertos y 619 heridos.

Los líderes del ejército realista sostuvieron una improvisada junta de guerra en el cerro Condorcunca. La captura del virrey significó el ascenso al mando del general Canterac, quien tomando en cuenta la situación en el campo de batalla propuso la rendición. Esta complicada decisión significaba la pérdida total del virreinato del Perú para la corona española; sin embargo, la mayoría de generales realistas estuvieron de acuerdo. Al declinar el día, el

¹⁰ M. Zuluaga, Las luchas por la independencia, op. cit., p. 274.

¹¹ H. Pereira, La campaña libertadora de Junín y Ayacucho, op. cit., pp. 87-88.

¹² *Ibid.*, pp. 71-73.

¹³ N. Pereyra, "La Batalla de Ayacucho (9 de diciembre de 1824)", *Revista del Archivo General de la Nación,* Vol. 32, n° 1, 2017, p. 275.

¹⁴ N. Pereyra, "La batalla final en Ayacucho", in N. Sobrevilla (dir.), Ayacucho 1824, Lima, FCE, 2024, p. 111.

mariscal La Mar se presentó ante Canterac para expresarle que Sucre estaba dispuesto a concederle una capitulación honrosa.

Los realistas aceptaron las cláusulas de la "capitulación de Ayacucho". Un documento de 18 artículos, bastante ventajoso para los realistas, que entregaba a los patriotas todas las guarniciones realistas hasta Desaguadero (con todos los pertrechos de guerra existentes). Además, los prisioneros realistas debían ser puestos en libertad, mientras que los heridos recibirían atención médica. Se respetarían las propiedades de los españoles ausentes, encargándose además el gobierno peruano de costear el valor de los pasajes de aquellos que desearan retornar. Los españoles que decidieran quedarse serían admitidos en sus mismos empleos y con el sueldo de siempre. Asimismo, el Estado pagaría la deuda contraída por el gobierno español en el Perú (reservándose el Congreso de la República el fallo final sobre este tema)¹⁵.

El triunfo militar en Ayacucho significó la independencia definitiva de América del Sur. Los españoles controlaban únicamente el fuerte Real Felipe en el Callao y las tropas de Olañeta en el Alto Perú. En abril de 1825, el Ejército Unido Libertador terminó de derrotar al último ejército realista en el Alto Perú, creando la República de Bolivia. A inicios de 1826, los realistas de la fortaleza del Callao, después de un año de espera del auxilio español, decidieron rendirse. No cabe duda de que la liberación definitiva del Perú tuvo mucho que ver con el combate a muerte que los ejércitos de Bolívar libraron contra los realistas. La proclamación de la Doctrina Monroe (1823) por parte de Estados Unidos contribuyó a consolidar las independencias latinoamericanas.

La derrota definitiva de las tropas españolas en el Perú significó el surgimiento de nuevas promesas y expectativas entre sus recién estrenados ciudadanos. Sin embargo, la separación de España no implicó una ruptura radical con las estructuras y mentalidades coloniales. Por el contrario, la igualdad ciudadana pronto cedería el paso a la jerarquía social del *statu quo* preexistente, manteniéndose el sistema de clases, razas y estamentos. La Iglesia católica continuó ocupando un rol central en la vida de los peruanos, la minería siguió siendo la columna vertebral de la economía y la corrupción, el clientelismo y el patrimonialismo continuaron campeando en las altas esferas del poder. Por su parte, el caudillismo se convirtió en la forma principal de llegar al poder. Entre 1821 y 1845, el promedio de duración de los presidentes peruanos fue de apenas un año y medio. Dos siglos después, hemos visto en los últimos años cómo estos males se encuentran todavía muy presentes en este país andino.

¹⁵ Signé par José Canterac et Antonio José de Sucre sur le champ d'Ayacucho, le 9 décembre 1824. In G. Yáñez, *Junín y Ayacucho*, op. cit., pp. 104-109.

Para citar este capítulo: Gustavo Pastor, "La batalla de Ayacucho (1824)", in D. Recondo (dir.), *América latina. El año político 2024/Les Etudes du CERI*, n° 275-276, Enero 2025 [en línea: www.sciencespo.fr/ceri/fr/papier/etude].

Cincuentenario del fallecimiento de Perón: una herencia trunca David Copello

"El presidente de los argentinos ha dado a su patria y al continente latinoamericano la más grande expresión de grandeza y humanismo cristiano: entregó su vida en holocausto a la libertad pacífica de los pueblos. Hasta sus últimos instantes, trabajó por la unidad nacional, continental y universal. Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia"¹.

Con este discurso de tonos casi cristianos, el primero de julio 1974, mientras todos los programas de radio y televisión han sido interrumpidos, la vicepresidenta argentina María Estela Martínez de Perón anuncia el fallecimiento de su esposo, el general Juan Domingo Perón, a los 78 años, ocurrido más temprano ese mismo día. Minutos después, la Confederación General del Trabajo (CGT) convoca a todos los trabajadores a cesar sus actividades laborales hasta que se haya concluido el funeral². El sindicato es seguido inmediatamente en esta convocatoria por la Confederación General Económica (CGE), que agrupa a los dirigentes de pequeñas y medianas empresas.

La reelección de Perón a la presidencia en septiembre de 1973, con casi el 62% de los votos, había puesto fin a 18 años de proscripción electoral del peronismo y de exilio de su líder. Sus dos primeros mandatos, entre 1946 y 1955, habían estado marcados por una política voluntarista de industrialización del país y de redistribución de las riquezas. Apoyado en las clases populares, Perón había desplegado un abanico de medidas sociales con tonalidades corporativistas, en un marco autoritario aunque basado en el sufragio universal. Con ello, pretendía encarnar una tercera posición en el escenario internacional: "ni yanqui, ni marxista". Derrocado por un golpe militar en 1955, Perón toma el camino del exilio. Tras algunos años de errancia, se afinca en la España franquista, que le abre sus puertas: desde allí dictará, a distancia, la conducta de sus seguidores que permanecen en el país. Sindicalistas conservadores, grupos armados revolucionarios: los perfiles de quienes se reconocen en el líder son variados; sabrá apoyar a unos u otros (e inclusive a unos contra otros) según la coyuntura y sus intereses del momento. Finalmente, romperá con los sectores revolucionarios de la Juventud Peronista³ a mediados de 1974, una vez reelecto presidente.

¿El final de un romance?

Su fallecimiento provoca manifestaciones colectivas de masas y de carácter transversal en una sociedad argentina que, sin embargo, está polarizada al extremo. El cuerpo del general es expuesto en el recinto del Congreso Nacional durante casi 48 horas, durante las cuales

¹ "Cadena nacional : mensajes por el fallecimiento de Juan Domingo Perón": www.archivorta.com.ar/asset/cadenas-nacionales-de-radio-y-tv-muerte-de-juan-domingo-peron-1974-parte-i/ (Lo traduzco).

² "Cadena nacional : Adelino Romero habla tras el fallecimiento de Perón": www.archivorta.com.ar/asset/cadena-nacional-adelino-romero-habla-tras-el-fallecimiento-de-peron/

³ La Juventud Peronista era una organización llamada "de superficie", afiliada a la organización armada clandestina Montoneros.

decenas de miles de ciudadanos acuden a rendirle homenaje. A pocos metros, bajo una lluvia torrencial, una verdadera marea humana se forma en las inmediaciones del edificio, imposibilitada de llegar hasta el ataúd. Semejantes manifestaciones masivas de duelo popular no se habían visto desde el fallecimiento de Eva Perón en 1952⁴. Permanecerían inigualadas hasta la muerte del deportista Diego Maradona en 2020, que provocaría reacciones de índole y magnitud similares, así como desbordamientos de protocolo comparables.

De hecho, aunque afecte principalmente el ámbito de la representación nacional, la muerte de Perón se inscribe inmediatamente en un tejido de reacciones que trascienden tanto a la Argentina como al campo político. El 3 de julio de 1974, los cuatro partidos disputados en el Mundial de Fútbol (organizado por Alemania Occidental) se interrumpen para un minuto de silencio en honor al presidente fallecido. En este día de duelo oficial, los jugadores argentinos – quienes han improvisado una capilla ardiente en su centro de entrenamiento – llevan un brazalete negro. El equipo ya estaba eliminado, y por ende habían solicitado no jugar el partido sin importancia que los enfrentaba a Alemania del Este, pero su petición fue rechazada bajo amenaza de fuertes sanciones deportivas⁵.

Objeto de pasiones populares hasta nuestros días, la figura del presidente Perón fue frecuentemente presentada como el último bastión de unidad de una Argentina dividida. En su libro *La razón populista*, el teórico Ernesto Laclau llegó a incluirlo entre las encarnaciones prototípicas del concepto de "significante vacío", capaz de aglutinar apoyos tanto de la extrema derecha como de la izquierda radical, a pesar de que fuesen capaces de enfrentarse con armas en mano⁶. Esta observación es solo parcialmente cierta: la unión sagrada de los peronistas ya estaba muy fragmentada al momento de su muerte. El asesinato de José Rucci, líder de la CGT, atribuido a la izquierda del movimiento en septiembre de 1973, siguió a la masacre de Ezeiza en junio de ese mismo año, donde trece militantes de la Juventud Peronista, congregados para recibir al general en su retorno de exilio, fueron matados por los francotiradores de la extrema derecha peronista. Al poco tiempo, una campaña de asesinatos era puesta en pie por grupos parapoliciales dirigidos por el primer círculo de allegados a Perón (entre los cuales la Alianza Anticomunista Argentina), sembrando el terror en las filas de la izquierda (peronista y no peronista).

La muerte de Perón no marca el final de un idilio peronista, pero sí es seguida por una intensificación de la conflictividad política. Unos meses en adelante, bajo la presidencia de María Estela Martínez de Perón, el ejército es movilizado para "aniquilar el accionar de los elementos subversivos". Se comienzan a experimentar a gran escala técnicas de contrainsurgencia que se emplearían de manera sistemática a partir del golpe de estado de marzo 1976: desaparición forzada de personas, tortura y asesinato de opositores en campos clandestinos de detención. La historiografía contemporánea coincide en señalar que, si bien el conflicto

⁴ S. Gayol, Una pérdida eterna. La muerte de Eva Perón y la creación de una comunidad emocional peronista, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2023.

⁵ A. Burgo, "A 50 años del día en que la muerte de Perón paralizó el Mundial", *TyC Sports*, 3 de julio de 2024 (www.tycsports.com/al-angulo/a-50-anos-del-dia-en-que-la-muerte-de-peron-paralizo-el-mundial-id593898.html).

⁶ E. Laclau, La Raison populiste, Paris, Seuil, 2008.

se radicalizó después de su muerte, Perón había contribuido en gran medida a ello en vida, sentando las bases de un discurso y de prácticas represivas que se agudizarían posteriormente⁷.

Símbolo de unión como de división, el cuerpo del general, enterrado en el cementerio de la Chacarita en la ciudad de Buenos Aires, descansaría en paz muy relativa. En 1987, en la fecha aniversario de los trece años de su muerte, la prensa anunciaba que las manos del general habían sido cortadas y robadas en su féretro blindado. El Partido Justicialista, la CGT y la viuda de Perón recibieron una demanda de rescate por 8 millones de dólares, pero se negaron a negociar: los profanadores nunca serán hallados. Este acontecimiento, ocurrido apenas unos años después del fin de la dictadura (1976-1983), en un momento en que el nuevo régimen aún parecía frágil, marcó un punto de inflexión en las maneras de evocar la figura de Perón en democracia. La mutilación de su cadáver fue condenada de manera unánime, incluso por antiguos dictadores, y dio lugar a la difusión de un discurso en el cual Perón se convertía en una figura central, imprescindible (aunque no consensual), de la democracia argentina. Como afirmó el entonces presidente Raúl Alfonsín, perteneciente a la antiperonista Unión Cívica Radical, el robo de las manos de Perón no fue (percibido como) un agravio contra los peronistas, sino contra la misma democracia y el pueblo argentino⁸.

En la deliberación pública argentina, hablar de Perón es establecer una mirada y un juicio tanto sobre la historia de la democracia como sobre su presente, del cual constituye una unidad de medida simbólica. Cuarenta años después del retorno a la democracia, ¿cómo los actores políticos contemporáneos ven a este ilustre fallecido? ¿Qué tipo de manifestaciones ha generado el cincuentenario de su muerte, y qué nos dicen sobre el estado del campo político argentino en 2024?

Un ídolo disputado

En 2024 como en 1974, no escasean las tonalidades religiosas en las evocaciones del general; recuerdan las fórmulas utilizadas por su viuda en el momento de su fallecimiento. Para el primero de julio, la principal central sindical argentina convocó un evento en sus instalaciones "con invitados especiales y toda la mística de la CGT". Mientras tanto los actores partidarios, que organizaban un mitin paralelo, afirmaron celebrar los cincuenta años del "paso a la inmortalidad del General Perón", una expresión repetida incansablemente durante esos días en las publicaciones peronistas en las redes sociales.

⁷ M. Franco, *Un enemigo para la nación: orden interno, violencia y subversión, 1973-1976*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2012.

⁸ R. Guber, "Las manos de la memoria", Desarrollo económico, Vol. 36, nº 141, 1996, pp. 423-442.

⁹ @cgtoficialok, "Este lunes 1ero de Julio desde las 17 hs en el el marco de un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad de Juan Domingo Perón, la @CgtJuventud presenta 'Perón vuelve al Vallese', un acto con invitados especiales y toda la mística de la CGT", X, 28 de junio de 2024, 8:53 PM, https://x.com/cgtoficialok/status/1806762947361825164. Las cursivas son mías.

¹⁰ "Acto de Kicillof: A 50 años del paso a la inmortalidad del General Perón", *Tiempo Argentino*, 1 de julio de 2024 (www.tiempoar.com.ar/ta_article/acto-de-kicillof-a-50-anos-del-paso-a-la-inmortalidad-del-general-peron/).

Sin embargo, estas fórmulas algo grandilocuentes disimulan mal el entusiasmo limitado que supieron generar las conmemoraciones, organizadas por un peronismo atravesado de tensiones tanto partidarias-ideológicas como sectoriales, faltas de un diálogo entre el Partido Justicialista y los sindicatos. Un claro ejemplo de esto es la ausencia de grandes eventos masivos en las calles del país. El mitin partidario se celebró en los jardines de la Quinta San Vicente, antigua residencia de Perón a la cual sus restos fueron transferidos en 2006 (hoy convertida en museo): de escala modesta, apenas reunió a unos cientos de militantes. Aún más reducido fue el auditorio reservado para el acto de la CGT, que solo contó con la presencia de unas decenas de personas, y cuya transmisión en vivo por YouTube fue seguida por apenas 1.500 usuarios. Esta débil movilización refleja las divisiones internas del peronismo, que se intensificaron tras la contundente derrota electoral sufrida por el movimiento en las elecciones presidenciales de 2023, ganadas por el "libertario" Javier Milei frente al candidato peronista de centroderecha, Sergio Massa, quien era ministro de Economía en ese momento. En este contexto, el principal orador del mitin partidario, Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires con ambiciones de liderazgo nacional, viene posicionándose como opositor número 1 al gobierno de Milei. Estas ambiciones han generado fricciones internas, quedando impactada su relación con el dirigente Máximo Kirchner, heredero político de sus padres los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner, y aunque compartan un posicionamiento similar, a la izquierda del peronismo. Uno de los objetivos clave de las conmemoraciones del primero de julio era hacer una demostración de unidad del peronismo en un momento de tensiones, logrando que ambos rivales aparecieran juntos en una "foto de familia". No obstante, el objetivo de unidad solo se alcanzó parcialmente, ya que parte de los líderes más influyentes de la oposición, como Sergio Massa y los miembros de su movimiento, el Frente Renovador, declinaron la invitación. Por ende, la dispersión y la baja participación en las conmemoraciones peronistas exponen las tensiones internas del movimiento y su dificultad para reorganizarse tras la derrota.

Esta reorganización se ve complicada por los intentos de triangulación desatados por el presidente en ejercicio, quien ha aprovechado las conmemoraciones como un elemento más de su estrategia. El 1 de julio, Javier Milei compartió en sus redes sociales el vídeo de un discurso del presidente Perón de diciembre de 1973, en el que criticaba la deuda acumulada por los gobiernos anteriores, estimada en "3 billones, es decir, 3 millones de millones"¹¹. Contra sus opositores y contra sus costumbres, Milei parece reivindicar cierto legado del general, presentándolo como defensor del equilibrio fiscal, una de las principales obsesiones de su gobierno, que ha adoptado medidas radicales para reducir el tamaño y el gasto del Estado, cuyo descontrol atribuye a los gobiernos peronistas que lo precedieron.

Este homenaje a Perón en forma de burla se inscribe dentro de una estrategia más amplia del gobierno de Milei para atraer a figuras clave del peronismo, que viene dando resultados muy concretos y llamativos, causando más desorientación aún entre sus opositores. Dentro de su equipo de gobierno, Guillermo Francos, jefe de gabinete, es un gran conocedor del peronismo del interior y de sus dinámicas territoriales. Daniel Scioli, actual Secretario de

¹¹ Ya se trate de un *lapsus linguae* o de un gesto irónico del general, el error de cálculo parece haber escapado a la atención del actual presidente y de sus equipos de comunicación.

Turismo, Medio Ambiente y Deportes que fuera muy cercano al expresidente Alberto Fernández, y quien también fue candidato presidencial por la coalición peronista-kirchnerista de centroizquierda en 2015, constituye otro ejemplo de esta estrategia de cooptación. Más allá de los ministerios, la captación de dirigentes peronistas por parte del gobierno también se evidencia entre los gobernadores de las provincias, un elemento clave para garantizar la gobernabilidad del Estado federal que es Argentina. Los gobernadores Raúl Jalil (provincia de Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), a pesar de haber sido electos como abanderados de la coalición peronista saliente, se convirtieron rápidamente en aliados del gobierno de Milei, al igual que Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, ex compañero de fórmula de Sergio Massa cuando éste se presentó a las elecciones presidenciales de 2015.

A comienzos de julio 2024, a cincuenta años de la muerte del general Perón, el movimiento que aún reivindica su legado, duramente golpeado por la derrota electoral, aparece dividido. Unos días más tarde, la retórica trascendental de las conmemoraciones dio paso a otro evento de características pomposas: la firma del "Pacto de Mayo" impulsada por Javier Milei, en el feriado patrio del 9 de julio¹². El texto, que consta de diez artículos, pretende entre otros aspectos asentar el compromiso de los gobernantes de respetar la propiedad privada o el equilibrio fiscal, y de reducir el gasto público en torno al 25% del PBI. De los nueve gobernadores peronistas, tres firmaron este texto que se asemeja a una profesión de fe libertaria, en total contradicción con la "mística" peronista exaltadora de la industria nacional, de la que tanto se hablaba uno días antes para honrar la memoria del padre fundador del Estado de bienestar argentino.

¹² Sobre este tema, véase la contribución de Darío Rodríguez en este volumen.

Para citar este capítulo: David Copello, "Cincuentenario del fallecimiento de Perón: una herencia trunca", in D. Recondo (dir.), *América latina. El año político 2024/Les Etudes du CERI*, n° 275-276, Enero 2025 [en línea: www.sciencespo.fr/ceri/fr/papier/etude].

Las transformaciones del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra durante la Nueva República brasileña (1988-2016)

Marina Ferreira de Araujo Fernandes

El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) es el movimiento social más importante de la Nueva República brasileña (1988-2016). Fundado en 1984, el MST fue el primer movimiento social en comprometerse con la lucha por la tierra en la Nueva República y se consolidó, en/por más de treinta años, como el movimiento social más poderoso de Brasil¹. El MST es una acción colectiva profundamente arraigada en el imaginario político brasileño que se ha convertido en una referencia mundial, y es el único movimiento político en la historia de Brasil que ha logrado ocupar la escena política durante tanto tiempo². El MST es el resultado del proceso histórico del campesinado brasileño. De hecho, se inscribe en la continuidad de la historia de la lucha por la tierra, organizando a los sujetos que han sido testigos de la formación del orden latifundista en el país.

El campo de estudios que se ha interesado en el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra ha analizado su trayectoria dividiéndola en fases históricas: su nacimiento, entre 1984 y 1994; su crecimiento, entre 1994 y 2002; y su desempeño a partir del año 2003. En consecuencia, la trayectoria del MST se ha abordado teniendo en cuenta la historia misma de la transformación de la política brasileña y de su orden latifundista.

"No formaremos parte del pacto de la Nueva República"

El MST fue oficialmente fundado en 1984. Desde 1985, durante su primer Congreso nacional, se formuló el vínculo intrínseco entre los objetivos de la organización y la construcción de la democracia en Brasil, como lo demuestra no solo el lema "sin reforma agraria, no hay democracia", sino también y sobre todo la afirmación de que "la ocupación es la única solución". De hecho, desde el principio, existe cierta desconfianza por parte del Movimiento hacia el sistema político. Esta ética conflictiva del MST se manifiesta no solo en la crítica a la concentración de tierras, sino también en la comprensión de que los repertorios de acción extrainstitucionales, como la ocupación, esculpen y refuerzan el orden democrático.

Es importante afirmar que estos actos de ocupación de tierras y la instalación de campamentos se han convertido en formas generalizadas de exigir una reforma agraria en Brasil, según los principales investigadores en los campos de la sociología rural y política. El MST, por su parte, se enfoca en la ocupación de tierras organizada desde núcleos familiares: la ocupación constituye así la esencia del movimiento. El MST denomina a estas ocupaciones "ocupaciones masivas", en contraste con las ocupaciones tradicionales de tierras, realizadas exclusivamente por hombres. João Pedro Stédile, uno de los principales representantes del Movimiento,

¹ B. Bringel, "El lugar también importa. Las diferentes relaciones entre Lula y el MST", *Revista NERA*, Vol. 9, n° 9, 2006, pp. 27-48.

² S. Bleil, "Tener un rostro para existir públicamente: la acción colectiva de los sin tierra en Brasil", *Redes*, nº 1, 2005, pp. 123-153.

declara: "La ocupación brinda a las personas ese sentimiento de unidad, de lucha por el mismo objetivo. Pasar por la prueba de un campamento crea ese sentimiento de comunidad, de alianza. Por eso, no funciona solo con hombres. Debes tener una familia entera"³.

El MST ha sido el promotor más activo de las ocupaciones de tierras en el período posterior al régimen militar, organizando 3.844 (el 45% del total)⁴, desempeñando un papel clave en la popularización y difusión de este repertorio central de acción en el movimiento campesino brasileño, un repertorio modular que combina tradición y experimentación. Está estrechamente vinculado a la identidad de los sin tierra. La ocupación de tierras y la instalación de campamentos se han convertido así en la forma adecuada de reivindicar la reforma agraria en Brasil. El MST, el movimiento sindical y muchas otras organizaciones rurales los utilizan ampliamente.

El MST, a diferencia del pacto nacional participativo⁵, no ha participado en el acuerdo entre el Estado y la sociedad civil dentro de la Nueva República. Mientras que, por un lado, los movimientos sociales brasileños se han involucrado en la participación institucionalizada, reclamando la construcción de espacios institucionales participativos como medio para democratizar el ámbito estatal, por otro lado, el MST ha actuado con una desconfianza total hacia el sistema político. La relación del campesinado con el Estado está históricamente marcada por movimientos que le dan la espalda, intentando trazar su propio camino, mientras que el Estado también le da la espalda a estos movimientos, lo que condiciona los caminos posibles⁶.

Marcha del MST hacia Brasilia

La segunda fase, entre 1995 y 2002, vio la transformación del activismo del MST. El elemento central de esta etapa reside en el paso de una crítica del monopolio de la tierra a un rechazo del modelo agrícola relacionado con el agronegocio. Así, la transformación del modelo agrícola se reafirma como el objetivo principal del programa del MST. Se trata de ampliar la noción de reforma agraria, identificando un nuevo "otro" a desafiar: el agronegocio. A partir de este momento, es importante afirmar que existe un repertorio de ocupaciones que favorece la ocupación de tierras por grandes empresas y no solo las ocupaciones de grandes propiedades estatales no productivas.

El desarrollo de la "Marcha por el empleo, la justicia y la reforma agraria" en 1997 muestra que no solo su repertorio de acción y su programa político se han ampliado, sino también su propia organización interna. De hecho, el MST comenzó a defender no solo la articulación de las organizaciones de la sociedad civil, sino también la creación de organizaciones políticas

³ B. M. Fernandes y J. Stedile, *Brava gente: a trajetória do MST* e *a luta pela terra no Brasil*, São Paulo, Fondation Perseu Abramo, 1999, p. 54.

⁴ R. T. Araujo, "A relação entre a redução das ocupações de terra e as mudanças no confronto em torno da reforma agrária no Brasil", *InSURgência*, Vol. 1, n° 2, 2015, p. 15.

⁵ Entendemos el pacto participativo como una nueva forma de relación entre el sistema político y la sociedad, construida durante la transición democrática en Brasil, a partir de 1988, a través de la proliferación de instituciones participativas como los presupuestos participativos, los consejos de políticas y los planes directores, donde ciudadanos y asociaciones de la sociedad civil están incorporados en la deliberación sobre las políticas.

⁶ C. Grzybowski, Caminhos e Descaminhos dos Movimentos Sociais no Campo, Petrópolis, Vozes, 1987.

que se encargarán de reparar los daños causados por el programa neoliberal implementado desde el advenimiento de la Nueva República, no solo en el campo, sino también en la ciudad.

El MST afirma así que no basta con vencer a las grandes propiedades de tierras. También es necesario enfrentar el movimiento político e ideológico que acepta la concentración de las riquezas rurales llevada a cabo por el agronegocio como sinónimo de desarrollo. Para ello, es esencial confrontar la lucha económica directa contra las grandes empresas capitalistas en el campo. La reforma agraria es, desde esta perspectiva, en interés de toda la sociedad, una solución para los problemas rurales y urbanos, y por eso el MST comienza a estar menos preocupado por la ocupación de los latifundios y a concentrar más su acción contra las grandes empresas transnacionales.

Moverse a la ciudad y organizar a los trabajadores expulsados del campo se convierte en una misión central para el MST durante esta segunda fase. La lucha por la tierra se presenta como una lucha sintética, que revela así el poder unificador del MST. El nuevo modelo de producción se construye sobre principios agroecológicos, en los cuales la soberanía alimentaria permitiría un cambio global en la sociedad: con la agroecología, el MST enfrenta a las grandes empresas en su esencia misma⁷. Este proyecto agrícola popular implica entonces múltiples sujetos, uniendo el campo con la ciudad e instando al Estado a promover la justicia social. Se trata de reafirmar el continuum campo-ciudad recorriendo tanto el camino del campo a las favelas, como de las favelas al campo.

En los años 1990, el potencial de articulación del MST con otras organizaciones estaba en su apogeo. El recurso de la Marcha, de la manifestaciones, es decir un repertorio de acción a la Marcha, a las manifestaciones, es decir, a un repertorio de acción a través del cual los movimientos sociales llaman a la puerta del Estado para rechazar las políticas neoliberales en curso, representó un cambio de paradigma en la relación del movimiento con otras organizaciones políticas. A partir de ese momento, no se trata solo de establecer articulaciones con entidades políticas ya consolidadas, sino de crear un conjunto de organizaciones políticas a partir del núcleo del MST. Por ejemplo, la creación del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST), el intento de disolver la dicotomía rural-urbana, organizando así a los trabajadores de la ciudad, revelan que el MST ha cambiado de paradigma en términos de organización de su red de activismo en Brasil a partir de la creación de nuevas organizaciones políticas.

El MST durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores

Durante la tercera fase, entre 2003 y 2016, la llegada al poder del Partido de los Trabajadores (PT), aliado histórico del MST, y su presencia en la esfera del gobierno federal, puso la relación entre el movimiento social y el Estado en el centro del debate. El modelo de interacción de este período se caracteriza, en particular, por la proximidad entre los movimientos sociales y el Estado, un diálogo en el que los movimientos sociales participan en el proceso de gestión de las políticas públicas. Es un período que ayuda a la recuperación y profundización del

⁷ A. Pahnke, "Social Movement Consolidation and Strategic Shifts: The Brazilian Landless Movement during the Lula and Dilma Administrations", *Latin American Perspectives*, Vol. 47, n° 4, 2020, pp. 206-222.

proyecto democrático-participativo, a través no solo de la expansión de las instituciones participativas en todo el territorio nacional, sino también a través de la entrada de actores de los movimientos sociales en el marco de la gestión gubernamental. El Estado no solo se ha ampliado, sino que ha sido ocupado directamente por los movimientos sociales: estos han verdaderamente cruzado la frontera que separaba la sociedad civil de la esfera estatal.

Es importante señalar que, por un lado, los movimientos sociales brasileños se han involucrado en la participación institucionalizada, reclamando la construcción de espacios institucionales participativos como medio para democratizar el ámbito estatal, mientras que el MST, por su parte, aún parece no sentirse cómodo al estar directamente vinculado a la gestión del Estado. La literatura ha destacado que el MST ha seguido valorando el conflicto en la era del PT, basándose en la comprensión de que solo la presión popular podría "empujar" al gobierno a llevar a cabo una reforma agraria.

La estrategia del MST durante este período revela la construcción de una presión desde el exterior hacia el interior del campo gubernamental. Al mismo tiempo que el MST ejercía presión sobre el gobierno a través de acciones de protesta que se volvieron rutinarias⁸, el Movimiento apostaba por una política de proximidad con ciertos parlamentarios vinculados al PT. Sin embargo, es posible notar la existencia de un consenso en el campo de estudios sobre el MST⁹ en cuanto a su rechazo a formar parte del marco de la política representativa, tanto a nivel ejecutivo como legislativo: el MST continúa rechazando cruzar oficialmente la frontera hacia la participación institucional: el MST sigue considerándolo con cierta sospecha. Aunque el Movimiento siempre ha tenido una relación con las agencias del Estado, como el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), es posible decir que la alergia del MST al ámbito estatal sigue siendo un punto importante de su estrategia política. Durante los gobiernos del PT, el MST continuó manteniendo su discurso a cierta distancia del Estado, en sus esferas legislativa, ejecutiva y judicial, mientras colaboraba discretamente con algunas de sus acciones.

El campesinado y el MST no sólo son elementos perturbadores de la historia brasileña, sino también los enemigos sociales por excelencia del Estado. Esto se debe a la contradicción fundamental de la sociedad brasileña, a saber, la elevada concentración de la propiedad de la tierra. En el proceso de su formación, los campesinos siempre se han enfrentado a los terratenientes coloniales y se han opuesto al Estado¹⁰. Según João Pedro Stédile, "nuestros enemigos son los grandes terratenientes y el Estado, que no democratiza las relaciones sociales en el campo y no desarrolla el mundo rural. Este Estado está estructurado por intereses de clase"¹¹.

⁸ R. Abers, L. Serafim y L. Tatagiba, "Repertórios de interação estado-sociedade em um estado heterogêneo : a experiência na Era Lula", Vol. 57, n° 2, 2014, pp. 325-357.

[°] L. Sigaud, "Ocupações de terra, Estado e movimentos sociais no Brasil", *Cuadernos de antropología social*, n° 20, 2004, pp. 11-23; M. Rosa, "Sem-Terra: os sentidos e as transformações de uma categoria de ação coletiva no Brasil", *Lua Nova: Revista de Cultura e Política*, n° 76, 2009, pp. 197-227; R. T. Araujo, "A relação entre a redução das ocupações de terra...", art. citado; C. Penna y M. Rosa, "Estado, movimentos e reforma agrária no Brasil: reflexões a partir do Incra", *Lua Nova: Revista de Cultura e Política*, n° 95, 2015, pp. 57-86.

¹⁰ B. M. Fernandes, A formação do MST no Brasil, Petrópolis, RJ. Vozes, 2000.

¹¹ B. M. Fernandes y J. Stedile, Brava gente..., op. cit., p. 46.

El MST se inscribe más ampliamente en 500 años de lucha por la tierra por parte de los sectores campesinos organizados, desde la colonización. De hecho, las luchas de los campesinos sin tierra comienzan con la aparición del modelo de los latifundios, hace cinco siglos. Se trata, ante todo, de una historia campesina, de familias que luchan por acceder a la tierra, para trabajar y vivir dignamente. Pero escribir la historia del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra también significa también escribir la propia historia del Brasil. El movimiento en sí nace con la Nueva República brasileña y, como esta última, evoluciona con el tiempo. El MST modifica su programa, su estrategia y su organización a lo largo de los años, siguiendo e influyendo en el contexto político del país. Así, el orden latifundista brasileño ha evolucionado durante la Nueva República, y con él, la principal organización del campesinado brasileño.

Para citar este capítulo: Marina Ferreira de Araujo Fernandes, "Las transformaciones del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra durante la Nueva República brasileña (1988-2016)", in D. Recondo (dir.), *América latina. El año político 2024/Les Etudes du CERI*, n° 275-276, Enero 2025 [en línea: www.sciencespo.fr/ceri/fr/papier/etude].

La región de Schrödinger: América del Norte después de 30 años Tom Long

El 1 de enero del 2024, se marcó el 30° aniversario de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Este momento provocó una nueva ronda de evaluaciones del viejo acuerdo económico – mejor conocido como NAFTA por sus siglas en inglés. La conmemoración fue para algunos comentaristas una oportunidad para celebrar la creación de una región internacional y enfatizar sus éxitos, especialmente en el campo macroeconómico. Para otros, fue un aniversario luctuoso, dado la asociación del acuerdo con el triunfo de un modelo económico neoliberal, para esos analistas la fuente de muchos males¹.

Pero lo más curioso de ese momento no fue que reabrió el recurrente debate sobre el NAFTA. Éste ha provocado fuertes tensiones políticas en Canadá, Estados Unidos y México desde las negociaciones de los años 1990². Las líneas de batalla y hasta los argumentos son bien conocidos. Lo extraño del aniversario fue que toda la celebración y reprobación giraron alrededor de una región que, como el famoso gato del físico Schrödinger, está viva y muerta a la vez. El significado y el porvenir de América del Norte siguen siendo inciertos a la apertura de su cuarta década.

El desarrollo de una región paradójica

En los términos definidos por el regionalismo económico, América del Norte fue un producto del NAFTA. El acuerdo trilateral quitó aranceles y facilitó el movimiento de bienes y capitales (pero por lo general, no a personas). El NAFTA fue un contrato legal que regía las relaciones económicas; no contenía, como los acuerdos europeos, aspiraciones comunitarias³. En los años posteriores a la firma, cumplió con esos propósitos iniciales. Hubo una expansión tremenda de comercio e inversión regional, a un ritmo aún mayor que el crecimiento global. Se profundizaron las conexiones de producción regional y esas pasaron de ser una faceta de unas industrias tradicionalmente norteamericanas como la automotriz a nuevos sectores. Todo eso pasó a pesar de la profunda crisis económica que vivió México en el mismo año que inició el NAFTA⁴.

Según sus propios arquitectos, la misión principal del NAFTA fue sencilla: aumentar el comercio y la inversión. Fue impulsado en gran medida por una nueva generación de políticos y economistas mexicanos que vieron en la negociación un camino para revolucionar la

¹ T. Long, "Treinta años: caminos, utopías y distopías", Nexos : Sociedad, Ciencia, Literatura, 1 de enero de 2024.

² M. A. Cameron y B. W. Tomlin, *The Making of NAFTA: How the Deal Was Done*, Ithaca, Cornell University Press, 2000, pp. 179-207.

³ R. A. Pastor, *Toward a North American Community: Lessons from the Old World for the New,* Washington, Institute for International Economics, 2001; H. Milner, "Regional Economic Co-Operation, Global Markets and Domestic Politics: A Comparison of NAFTA and the Maastricht Treaty", in W. D. Coleman y G. D. Underhill (dir.), *Regionalism and Global Economic Integration*, Londres & New York, Routledge, 2012, pp. 19-41.

⁴ R. A. Pastor, *The North American Idea: A Vision of a Continental Future*, New York, Oxford University Press, 2011; J. Serra Puche, *El TLC y la formación de una región: un ensayo desde la perspectiva mexicana*, Mexico, Fondo de Cultura Económica, 2015.

economía de su país después de años de estancamiento y crisis⁵. En este sentido, el éxito del NAFTA fue innegable. El comercio regional triplicó y la inversión extranjera en México vivió un aumento vertiginoso. México se convirtió en un líder mundial de exportaciones de manufacturas, incluso en sectores claves como automóviles⁶. Eso sí, esas exportaciones se destinaron en su gran mayoría a un solo mercado; una y otra vez, los negociadores mexicanos destacaron que su objetivo primordial fue asegurar el acceso a los consumidores de norte. Pero a pesar de esa atadura geográfica, México evitó el retorno a otro vicio de la dependencia: el ciclo de *commodities* que experimentaron muchos de sus pares sudamericanos.

Por otro lado, las corporaciones estadounidenses, incluso las grandes compañías agrícolas, acogieron al NAFTA desde el principio. No sólo abrió al mercado vecino a sus ventas e inversiones, concretó un nuevo modelo que luego se replicó en una serie de arreglos económicos en América Latina y el mundo⁷. Seguramente, la posibilidad de trasladar operaciones y fábricas a un ambiente vecino, pero menos regulado y con trabajadores peor pagados, presentó un negocio atractivo para algunas compañías. Al final, ese aspecto que tanto despertó la oposición del candidato presidencial Ross Perot tuvo menor impacto real en la producción estadounidense que la tecnología informática y la competencia asiática. Sin embargo, siguió moldeando las impresiones públicas acerca de la región incluso hasta su renegociación en el 2018.

En Canadá, el NAFTA fue recibido con mayor frialdad; el país norteño ya tenía su propio acuerdo con Estados Unidos y no quería diluir las ventajas ahí obtenidas. Aceptó sin mayor entusiasmo la necesidad política de formar parte del proyecto norteamericano⁸. Durante años, el interés en Ottawa en el trilateralismo varía, pero en general la relación con "el vecino del vecino" fue de menor importancia⁹. Aún así, y sin gran aclamación política, el peso del mercado norteamericano ejerció una fuerza que reorientó a muchos sectores económicos en los tres países. Un incipiente trilateralismo brotó, a veces contracorriente al ambiente político.

El declive del viejo regionalismo norteamericano

La idea inicial de la región como una entidad económica singular pareció morir varias veces antes de cumplir los treinta. El mismísimo NAFTA ya no estaba en vigor cuando se marcó su natalicio. Había sido reemplazado por un nuevo acuerdo, conocido en México como el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) y en Estados Unidos como el United States-México-Canadá Agreement (USMCA). En Canadá, se llama el Canadá-United States-

⁵ T. Long, "Echoes of 1992: The NAFTA Negotiation and North America Now", Washington, Woodrow Wilson Center, 2014 (www.wilsoncenter.org/publication/echoes-1992-the-nafta-negotiations-and-north-america-now).

⁶ R. A. Pastor, The North American Idea..., op. cit.

⁷ F. Duina, *The Social Construction of Free Trade: The European Union, NAFTA, and Mercosur, Princeton, Princeton University Press, 2006.*

⁸ A. McKercher, "Ménage à deux: Canadá y los límites de la idea de América del Norte", in E. Hershberg y T. Long (dir.), *El regionalismo en América del Norte: ¿estancamiento, declive o renovación?*, trad. K. Walter, Mexico, El Colegio de México, 2024, pp. 108-138.

⁹ H. W. Konrad, "Los vecinos del vecino: comprender la ecuación Canadá-México", *Revista Mexicana de Política Exterior*, n° 51, 1997, pp. 33-44.

México Agreement (CUSMA) en inglés y Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) en francés. Cada país inistió en poner su propio nombre primero – produciendo dos nombres incluso en un solo idioma. Pero aún más notable es que ninguna de las cuatro versiones del título del nuevo acuerdo incluye el nombre de la región. La identidad regional norteamericana nunca fue un punto fuerte del proyecto integracionista, pero con el nuevo acuerdo, ni siquiera se mantuvo el pretexto.

En la misma línea, las negociaciones para reemplazar el NAFTA reflejaron un espíritu muy diferente que las rondas que iniciaron el proyecto regional. Sin duda, existieron muchas formas de mejorar y actualizar el acuerdo firmado en 1994. Pero el motivo no surgió de un deseo de renovar sino de las amenazas que lanzó el presidente Donald Trump, primero desde su campaña electoral y después desde la Casa Blanca. Él cuestionó la misma sobrevivencia del acuerdo – cosa profundamente arraigada en las economías canadienses y mexicanas – y además aplicó aranceles a los socios norteamericanos. La negociación de los años 1990 fue compleja y a veces contenciosa, pero existió un objetivo común. En la creación del T-MEC, predominó la búsqueda de ventajas asimétricas¹⁰.

Además, el nuevo acuerdo colgó una espada de Damocles sobre la región. El artículo 34 incluye un mecanismo para la revisión del tratado, llamado "la cláusula del atardecer". Esta provisión requiere que, después de seis años, los tres gobiernos reafirmen sus deseos de mantener el acuerdo; sin esa aprobación, se abre una renegociación. Si este proceso no produjera un nuevo trato, el T-MEC se terminaría después de dieciséis años. Como consecuencia de la cláusula, el acuerdo fundamental de la economía regional más grande del mundo está aún más expuesto a los vaivenes electorales y las demandas asimétricas estadounidenses¹¹.

El retorno de América del Norte

En otros aspectos, la región que emergió en la década de los 1990 ya había dejado de existir mucho antes de Trump. Los ataques del 11 de septiembre de 2001 pausaron el crecimiento regional. El giro en las políticas de seguridad fronteriza en Estados Unidos aumentó los tiempos de espera y los costos de transacciones. En una región donde la gran mayoría de los bienes cruzan las fronteras por tierra, eso significó una pérdida de ventaja comparativa¹². En este mismo año, China entró en la Organización Mundial de Comercio (OMC) y su potencia como exportador disparó, incluso en el mercado norteamericano. Desplazó a muchos productos mexicanos en el mercado estadounidense y hasta dentro del mismo México¹³.

¹⁰ L. Macdonald, "'Estaba listo para ponerle fin': La teoría del nuevo regionalismo, la presidencia de Trump y la integración de América del Norte", in E. Hershberg y T. Long (dir.), *El regionalismo en América del Norte...*, op. cit., pp. 181-214.

¹¹ D. A. Gantz, "Key Issues in USMCA Implementation", in M. Ellyatt (dir.), *The Future of Trade*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2023, pp. 19-46; L. Arnaud, "From NAFTA to USMCA: Revisiting the Market Access—Policy Space Trade-Off", *New Political Economy*, Vol. 29, n° 3, 2024, pp. 356-369.

¹² P. Andreas et T. J. Biersteker, *The Rebordering of North America: Integration and Exclusion in a New Security Context,* New York, Routledge, 2003; J. Ackleson, "From 'Thin' to 'Thick' (and Back Again?): The Politics and Policies of the Contemporary US–Canada Border", *American Review of Canadian Studies*, Vol. 39, no 4, 2009, pp. 336-351.

¹³ B. Stallings, "China y América del Norte: cómo una potencia asiática perturbó la vecindad de Estados

A la vez, sin embargo, emergió otra versión de América del Norte, una que no tuvo lugar en el texto del NAFTA. Este es un regionalismo de millones de vínculos interpersonales, o sea, de la realidad cotidiana de una intensa integración social. Ese América del Norte sigue más viva que nunca. Surge claramente de las migraciones entre los tres países – y no solamente del caso de mexicanos residentes en Estados Unidos. Más allá, existe en los vínculos entre organizaciones de sociedad civil, asociaciones profesionales y comunidades y familias transfronterizas. Incluso se ve en el campo de la gobernanza, aunque lejos de las ciudades capitales. Oficiales locales, estatales y de agencias nacionales suelen trabajar de la mano con los colegas en el país vecino sin atraer atención mediática ni académica.

En general, ha habido una desconexión entre ese regionalismo cotidiano y las políticas nacionales. A veces, como en el caso de la migración, se enfrentan. Pero en otros momentos, el regionalismo cotidiano ha sido la salvación de América del Norte. La movilización de esos vínculos jugó un papel en la defensa de los acuerdos regionales contra las amenazas de Trump¹⁴. Durante años, el Partido Demócrata fue igualmente crítico del NAFTA, esos vínculos han cambiado su postura.

En ese sentido, América del Norte no solo se mantiene con vida, pero prospera. Se ve claramente en la reanudación del dinamismo económico. Los años posteriores a la pandemia global han visto la recuperación de la economía trilateral. El nuevo T-MEC ha sido un éxito, incluso a pesar de sí mismo. La rivalidad y "guerra comercial" entre Estados Unidos y China están abriendo nuevas oportunidades para productores norteamericanos. México ha recibido inversiones de empresas que buscan evitar riesgos geopolíticos y trastornos en sus cadenas de producción¹⁵. Ahora sí, mucho de ese crecimiento regional se debe a la expansión de la economía estadounidense y su sorpresivo *boom* de productividad. La consecuencia, sin embargo, ha sido mayor espacio regional para invertir en tecnología y energía (renovable y carbonífera). El reciente dinamismo de la región norteamericana es la envidia del mundo.

América del Norte, cara al futuro

Después de tres décadas, la idea original de América del Norte ha sufrido graves cambios, gracias a transiciones geopolíticas e inquietudes en la política doméstica—especialmente en los Estados Unidos. Ahora, la región enfrenta un momento de incertidumbre y de posibilidad: de estancamiento, declive o renovación¹⁶.

Por el lado pesimista, tenemos el nacionalismo y la xenofobia. Esos retos son muy visibles en el *trumpismo* pero que se presentan en Canadá y México también. Además, los dirigentes políticos de la región han sufrido de una visión de corto plazo, negando pequeños sacrificios

Unidos", in E. Hershberg y T. Long (dir.), El regionalismo en América del Norte..., op. cit., pp. 421-456.

¹⁴ L. Macdonald, "'Estaba listo para ponerle fin'...", art. citado.

¹⁵ T. Stringer y M. Ramírez-Melgarejo, "Nearshoring to Mexico and US Supply Chain Resilience as a Response to the COVID-19 Pandemic", *Findings*, 22 de deciembre de 2023 (https://doi.org/10.32866/001c.91272).

¹⁶ Para una versión más comprensiva de esos argumentos, véase las conclusiones de E. Hershberg y T. Long, *El regionalismo en América del Norte: ¿estancamiento, declive o renovación?*, trans. K. Walter, México: El Colegio de México, 2024.

para futuros beneficios. Durante dos décadas, muchísimas oportunidades para mejorar la cooperación regional han sido perdidas por la culpa de esas tendencias.

A su favor, el regionalismo tiene una lógica política para los Estados Unidos que va más allá de los intereses corporativos. La percepción, tal vez *construcción*, de una amenaza china crea una demanda para una región estratégicamente segura. La nueva obsesión de fortalecer las cadenas productivas en ciertos sectores ofrece argumentos para profundizar el regionalismo, invertir en la infraestructura compartida, y dar un trato preferencial a los vecinos. Esa idea ha penetrado en la conciencia política canadiense, tal vez por su larga experiencia de saber aprovechar de la alianza noratlántica para ganar beneficios con pérdidas mínimas de autonomía. Por su propia historia y posición, México ha sido mucho más cauteloso – y lo seguirá siendo mientras vive en la larga sombra del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Pero México tiene mucho a juego, especialmente por la peligrosa cláusula del atardecer. Adoptará una actitud pragmática.

Al comienzo de su cuarta década, entonces, América del Norte es una región suspendida entre la vida y la muerte. El aniversario del 1994 no fue recibido con un espíritu de comunidad como esperaban algunos de sus promotores. Pero a pesar de las palizas sufridas, una región transformada sigue en pie, llena de potencialidades.

Para citar este capítulo: Tom Long, "La región de Schrödinger: América del Norte después de 30 años", in D. Recondo (dir.), *América latina. El año político 2024/Les Etudes du CERI*, n° 275-276, Enero 2025 [en línea: www.sciencespo.fr/ceri/fr/papier/etude].

Tercera parte

América latina en las urnas

Tres tendencias en las elecciones latinoamericanas de 2024: eficacia recompensada, alternancia pacífica y conflicto postelectoral *David Recondo*

En 2024, siete países latinoamericanos celebraron elecciones: elecciones presidenciales en Venezuela (28 de julio); elecciones presidenciales y legislativas en El Salvador (4 de febrero), Panamá (5 de mayo), República Dominicana (19 de mayo), México (2 de junio) y Uruguay (27 de octubre); y elecciones municipales en Chile (26 y 27 de octubre).

Mientras que en 2023 los presidentes en ejercicio fueron víctimas de un rechazo generalizado, en 2024 el panorama es más equilibrado: en dos países (El Salvador y República Dominicana), el presidente en ejercicio fue reelegido, mientras que en México, la candidata del partido al que pertenece el presidente en ejercicio ganó las elecciones muy por delante de sus dos rivales. En El Salvador, donde el presidente en funciones, Nayib Bukele, obtuvo más del 84% de los votos, y en México, donde Claudia Sheinbaum ganó con casi el 60% de los votos (frente al 27,4% del principal candidato de la oposición), las elecciones reflejaron un claro respaldo a los gobiernos en el poder. Esta validación también fue evidente en los resultados de las elecciones legislativas, donde los votos también favorecieron a los candidatos de la "mayoría presidencial". En Panamá y Uruguay, por el contrario, el electorado votó a favor de la alternancia, y aunque el voto fue más disperso en las elecciones legislativas, los dos nuevos jefes de Estado podrán contar también con mayoría absoluta en el Parlamento.

En Chile, las listas de la oposición de derecha y centro-derecha obtuvieron en las elecciones municipales mejores resultados globales que las de la coalición gubernamental (izquierda y centro-izquierda). Estos resultados prefiguran, sin duda, los de las elecciones legislativas de 2025.

Así pues, las elecciones de 2024 han roto parcialmente con la dinámica pendular que ha caracterizado las elecciones de los últimos diez años. También contradicen la otra tendencia que parecía afianzarse en el panorama político del subcontinente: gobiernos minoritarios enfrentados a mayorías parlamentarias recalcitrantes. Por último, los outsiders que habían capitalizado el voto de rechazo contra los titulares en 2023 brillaron por su ausencia, esta vez.

Las elecciones presidenciales venezolanas reflejan una dinámica totalmente distinta. Las autoridades electorales sólo anunciaron resultados parciales, muy cuestionados tanto por la oposición como por los observadores internacionales. Las autoridades declararon la victoria del presidente saliente, Nicolás Maduro, mientras que la oposición presentó resultados diametralmente opuestos que favorecían a su candidato, Edmundo González. Con la comunidad internacional dividida sobre el camino a seguir, el candidato opositor se exilió en España, mientras que los manifestantes que exigían la publicación del recuento de votos fueron violentamente reprimidos por el ejército y la policía. Todo indica que el presidente en funciones seguirá en el cargo, a pesar del discutible veredicto de las urnas.

¹ También se celebraron elecciones municipales el 18 de febrero de 2024.

Las elecciones dependen de los contextos locales y nacionales, por lo que reflejan cuestiones específicas de cada situación. No obstante, siempre surgen elementos comunes. En 2024, tres espectros recorrieron las campañas electorales e influyeron en la orientación del voto: el de la corrupción de las clases dirigentes, el de la inseguridad vinculada al crimen organizado y el del deterioro de la economía para una gran parte de la población.

Para citar este capítulo: David Recondo, "Las tres tendencias de las elecciones latinoamericanas en 2024: premio a la eficacia, alternancia pacífica y conflicto postelectoral", in D. Recondo (dir.), *América latina. El año político 2024/Les Etudes du CERI*, n° 275-276, Enero 2025 [en línea: www.sciencespo.fr/ceri/fr/papier/etude].

Nayib Bukele 2.0: ¿el camino hacia la desconsolidación democrática? Kevin Parthenay

La reelección del presidente Bukele el 4 de febrero de 2024 es sintomática de un riesgo que se cierne sobre muchos países latinoamericanos por el constante cuestionamiento de las reglas y el funcionamiento democráticos¹. Este "hombre fuerte", como lo describió recientemente el semanal *Time*, intriga tanto como inspira. Ha logrado resultados donde todos los gobiernos anteriores habían fracasado, y goza de una popularidad sin parangón a escala continental y mundial. Al mismo tiempo, está poniendo a prueba la democracia al sugerir que las prácticas autoritarias podrían ser preferibles a la democracia. Por lo tanto, es esencial entender quién es, qué hace y qué representa, porque el "modelo Bukele" ya está empezando a ser emulado en otros países latinoamericanos. Aquí analizamos tres aspectos: el proceso y significado de su reelección, los resultados de su primer mandato y el peligro que representa para la democracia salvadoreña.

Una reelección aplastante pero controvertida

La reelección de Nayib Bukele como Presidente de El Salvador presenta una paradoja inicial². Si bien fue aplastante, en cuanto a los resultados obtenidos, suscitó polémica en cuanto a su legalidad porque, al igual que muchos otros dirigentes de la región, fue necesario eludir el pacto constitucional para presentarse a otro mandato. El artículo 152 de la Constitución de la República de El Salvador de 1983 prohíbe la reelección inmediata. Esta prohibición fue incluso confirmada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que declaró en 2014 que era necesario esperar diez años antes de buscar la reelección3. Sin embargo, el 3 de septiembre de 2021, la CSJ, formada por una mayoría de magistrados afines al Gobierno en el poder (desde una recomposición forzada el 31 de agosto de 2021), declaró finalmente que el presidente Bukele podía presentarse a la reelección. Sin embargo, para poder presentar su candidatura, Bukele debía dejar el cargo seis meses antes del inicio del nuevo mandato. Para ello, Nayib Bukele entregó oficialmente el poder a una persona de su confianza, Claudia Juana Rodríguez de Guevara. Frente a este primer bypass, existe ahora una legítima preocupación por la posible introducción a futuro de proyectos de reforma constitucional que permitirían presentarse a varios mandatos consecutivos y, por tanto, mantenerse en el poder. Otra cuestión controvertida en este periodo preelectoral fue la supresión por la Asamblea de un artículo del código electoral (artículo 291-A) que impedía cualquier reforma en el año anterior a las elecciones. Si bien esta derogación permitía introducir cambios menores (la introducción de

¹ V. Bergengruen, "The Strongman", *Time*, 29 de agosto de 2024 (https://time.com/7015636/president-nayib-bukele-interview/).

² K. Parthenay, Crises en Amérique latine: la démocratie déracinée, París, Armand Colin, 2020.

³ G. Labrador, C. Palacios, J. Ramón, S. Chávez, D. Pérez, K. Moreno y M. Cea, "Jueces a la medida: la farsa de la depuración de Bukele", *Plaza Pública*, 12 de julio de 2023 (www.plazapublica.com.gt/content/jueces-la-medida-la-farsa-de-la-depuracion-de-bukele).

la foto de los candidatos en las papeletas), abría la posibilidad de cambios de mayor calado en futuras elecciones, generando un clima de incertidumbre e inestabilidad electoral.

A pesar de estas polémicas, la reelección fue inequívoca y no hubo dudas durante el periodo de campaña. Los resultados electorales así lo atestiguan: 84,65% de los votos (un verdadero plebiscito), contra 6,40% y 5, para los partidos históricos del país, respectivamente el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda) y la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha), que siguen hundiéndose políticamente. La participación se mantuvo constante con un 52,6% (+0,7% con respecto a 2019).

Un plebiscito y una evaluación

Bukele debe su aplastante victoria y su inigualable popularidad a los logros y éxitos de su primer mandato. La puesta en marcha del "Plan de Control Territorial" ha reducido drásticamente las cifras de violencia en un país asolado por la delincuencia (la tasa de homicidios bajará de 38/100.000 en 2019 a 2,4 en 2023). El uso del ejército para perseguir a los miembros de las maras (bandas), bajo el estado de excepción activado durante el covid-19 y posteriormente prorrogado, y el encarcelamiento masivo (sobre todo en nuevas megacárceles como el Centro de Contención del Terrorismo, CECOT) han hecho posible esta rápida erradicación de la delincuencia. El éxito del país en materia de seguridad ha puesto a Bukele en el mapa y lo ha convertido en un modelo para el continente (Ecuador, Honduras y Argentina toman ahora ejemplo de su modelo). En el plano económico, la construcción de infraestructuras a escala nacional (hospitales, una biblioteca nacional -financiada por China- e instalaciones portuarias en Ajacutla y La Unión, también financiadas por China) ha dado un nuevo impulso a una economía que, sin embargo, es frágil y corre el riesgo de una nueva dependencia de una potencia exterior. Bukele también contribuido a restaurar la imagen de su país, uno de sus principales objetivos, situándolo de nuevo en el radar internacional⁴. Bajo su mandato, El Salvador ha pasado de ser un "país pequeño, pobre y extremadamente violento" a convertirse en el "país más seguro del hemisferio occidental" y atractivo en términos económicos: Google ha instalado un centro regional de datos; ha surgido una ciudad internacional dedicada al surf, lo que ha permitido albergar una etapa del campeonato mundial; también, ha concedido el curso legal a una criptomoneda (Bitcoin) lo que ha dado al país una renovada atención internacional⁵. Esta diplomacia disruptiva, respaldada por una intensa comunicación digital, ha reposicionado a este pequeño país centroamericano en los asuntos continentales e internacionales.

Para su reelección, sin embargo, Nayib Bukele centró su campaña en la economía. En contraste con sus resultados en el frente de la seguridad, la economía de El Salvador siguió siendo frágil durante su primer mandato, debido sobre todo a la crisis del covid-19 y a la

⁴ N. Wirtz, "Google And El Salvador Reach A Modern Multi-Million-Dollar Agreement", *Global Finance*, 22 de septiembre de 2023 (https://gfmag.com/economics-policy-regulation/google-and-el-salvador-reach-a-modern-multi-million-dollar-agreement/).

⁵ K. Parthenay, "Diplomacia digital contra la estigmatización internacional: el caso Bukele", *International Affairs*, Vol. 100, nº 1, 2024, pp. 301-321 (https://doi.org/10.1093/ia/iiad285).

incierta inversión pública en Bitcoin. Bukele hizo de la economía el punto central de su discurso de investidura para su segundo mandato, anunciando que habría que administrar "medicinas amargas" para dar un vuelco a la economía y hacer de El Salvador un país floreciente. En este sentido, el regreso de Trump a la Casa Blanca anuncia el inicio de nuevas oportunidades comerciales y de inversión, a pesar de los excesos de poder que al nuevo presidente Trump no le importan. Bukele siempre ha mantenido una estrecha relación con Trump y su entorno, y Trump no esperó a las elecciones estadounidenses rodearse de la derecha conservadora. Como prueba de ello, a su ceremonia de investidura asistieron personas cercanas a Trump (Carlson Tucker, Donald Trump Jr.), así como miembros del Congreso y del Senado de EEUU. Bukele también pasó el fin de semana siguiente a la toma de posesión rodeado de políticos, empresarios e inversores estadounidenses, todos ellos miembros del entorno de Trump. Naturalmente, esta nueva cercanía plantea la cuestión de la durabilidad de los vínculos forjados con China durante la administración Biden. En una línea similar, destaca también la cercanía de Bukele a los líderes conservadores latinoamericanos. Aunque en la toma de posesión sólo estuvieron presentes representantes de la derecha latinoamericana, Bukele estrechó lazos con el argentino Javier Milei durante una visita de Estado de varios días. Este acercamiento entre los líderes conservadores prefigura probablemente un reajuste de los lazos económicos y comerciales entre El Salvador y los países de la región.

La democracia en peligro

Paradójicamente, es debido a su éxito que Nayib Bukele representa un peligro para la democracia salvadoreña. La securitización del país, cuestión prioritaria para la población salvadoreña, por medios que no respetan las reglas democráticas (prolongación indefinida del estado de excepción, política de encarcelamiento masivo, militarización de la seguridad, violación de los derechos humanos fundamentales) explica un cuestionamiento progresivo de la validez de la democracia como sistema. La opinión pública en El Salvador ha cambiado considerablemente en los últimos años. En 2023, menos de la mitad de los salvadoreños (46%) apoyaba la democracia como régimen preferible a cualquier otro. Al mismo tiempo, el 41% estaba dispuesto a probar otras formas de gobierno (era indiferente a la democracia y pensaba que era preferible el autoritarismo). Hasta ahora, la seguridad de El Salvador ha sido a costa de su democracia.

Además, si la reelección fue posible burlando el texto constitucional, en un contexto ya marcado por una deriva autoritaria en la gestión del poder, los resultados de las elecciones ofrecen una legitimidad adicional a la excesiva personalización del poder y a un modelo conservador-autoritario. Un clima de sospecha se ha instalado progresivamente en la esfera pública. Por ejemplo, muchos funcionarios ya no se atreven a hablar mal del Presidente y su entorno por miedo a perder su empleo. Se ha convertido en un lugar común escuchar, de todo tipo de interlocutor, que cuando se habla del Presidente "se baja la voz y se mira por encima del hombro"⁶. En este sentido, se han documentado recientes casos de censura

⁶ C. Amaya, C. Romero, M. Romero, W. Monterrosa, D. Reyes, L. Canizalez, T. Ortiz y M. Díaz, "Ver, oír y

en los sectores de la educación y la sanidad contra empleados públicos, que hacen temer la instauración o consolidación de un régimen de terror en el seno de la administración del Estado⁷. Por otro lado, recientes revelaciones sobre el enriquecimiento de la familia Bukele durante el primer mandato (2019-2024) hacen temer el retorno de viejas prácticas neopatrimoniales que vivió el país durante administraciones anteriores (Arena y FMLN).

En muchos aspectos, El Salvador de Nayib Bukele es un fascinante laboratorio de cuestionamiento de la democracia a través de prácticas autoritarias legitimadas por la población⁸. Si bien la cuestión de la seguridad ha sido el caballo de Troya de esta dinámica de desconsolidación democrática, ahora se plantean dos cuestiones fundamentales: ¿se mantendrá este primer mandato autoritario justificado por el imperativo de la seguridad para hacer frente a otras cuestiones, sobre todo económicas? *En última instancia*, ¿aceptará Bukele dejar el poder o sucumbirá -como otros- a los cantos de sirena *del "tercer mandato"* para aferrarse al poder?

callar en el gobierno de Nayib Bukele", *Plaza Pública*, 22 de noviembre de 2024 **(www.plazapublica.com.gt/centroamerica/reportaje/ver-oir-y-callar-en-el-gobierno-de-nayib-bukele**).

Para citar este capítulo: Kevin Parthenay, "Nayib Bukele 2.0: ¿el camino hacia la desconsolidación democrática?", in D. Recondo (dir.), América latina. El año político 2024/Les Etudes du CERI, nº 275-276, Enero 2025 [en línea: www.sciencespo.fr/ceri/fr/papier/etude].

⁷ E. Lemus, "Nayib Bukele y la expansión patrimonial familiar", Expediente Público, 1 de noviembre de 2024 (www.expedientepublico.org/nayib-bukele-y-la-expansion-patrimonial-familiar/).

⁸ R. S. Foa y Y. Mounk, "El peligro de la desconsolidación: la desconexión democrática", *Journal of Democracy*, Vol. 27, n° 3, 2016, pp. 5-17 (www.journalofdemocracy.org/articles/the-danger-of-deconsolidation-the-democratic-disconnect/).

Elecciones en México: la continuidad en el cambio David Recondo

El 2 de junio de 2024 se celebraron simultáneamente cuatro procesos electorales en México: elecciones federales (presidenciales y legislativas¹); elección de gobernador en ocho entidades federativas y de jefe de gobierno, en la Ciudad de México; elección de diputados locales en 31 entidades federativas y en la Ciudad México; elección de concejales municipales en 1.802 de los 2.477 municipios del país². En total, ese día, se eligieron 20.708 cargos.

Por primera vez desde la independencia de México, en 1821, una mujer ha sido elegida Presidenta de la República. Claudia Sheinbaum, exalcaldesa de Ciudad de México (2018-2024) del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido fundado por su predecesor, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), obtuvo el 59,7% de los votos. Su principal rival, Xóchitl Gálvez, que encabeza una coalición formada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), obtuvo el 27,4% de los votos. Por último, un tercer candidato, Jorge Alvarez Máynez, del partido Movimiento Ciudadano (MC), obtuvo un modesto – pero inesperado – 10,3%³.

La coalición encabezada por Claudia Sheinbaum⁴ también ganó la mayoría de los diputados federales y senadores, siete de las ocho gubernaturas, el gobierno de la Ciudad de México y la mayoría de los diputados locales.

La participación fue del 61,5% de los votantes registrados⁵, un 2,4% menos que en 2018, cuando fue elegido el presidente en funciones, Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, Claudia Sheinbaum obtuvo casi seis millones de votos más que su predecesor.

Campaña electoral de alta tensión

La campaña electoral estuvo marcada por un nivel de violencia particularmente elevado. Ciento treinta precandidatos o candidatos fueron víctimas de ataques (amenazas de muerte, atentados, secuestros), 34 de los cuales fueron asesinados⁶.

¹ Quinientos diputados federales y 128 senadores.

² INE, *Numeralia del Proceso Electoral Federal y Local 2023-2024*, 30 de agosto de 2024 (https://ine.mx/numeralia-proceso-electoral-2024/).

³ INE, Cómputos Distritales. Elecciones Federales 2024 (https://computos2024.ine.mx/presidencia/nacional/candidatura).

⁴ La coalición que apoyó la candidatura de Sheinbaum incluía Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT). Esta misma coalición ha presentado candidatos a la Cámara de Diputados y al Senado, a la Ciudad de México y a las gubernaturas. En las elecciones para diputados locales, presentó candidatos en 23 estados; en siete estados, Morena se alió con el PVEM o el PT; en dos estados (Hidalgo y Sinaloa), los tres partidos participaron por separado. Finalmente, en 12 estados, Morena (con o sin PVEM y PT) formó alianzas con partidos regionales. En las elecciones municipales, Morena celebró alianzas de geometría variable con sus tres aliados nacionales y/o con partidos regionales (véase https://ine.mx/actores-politicos/convenios-de-coalicion/).

⁵ Número de electores inscritos: 98.469.994 (INE, op. cit.).

⁶ México Evalúa, *Violencia en elecciones de 2024 superó la de 2018 y 2021*, 2 de julio de 2024 (www.mexicoevalua.org/violencia-en-elecciones-de-2024-supero-la-de-2018-y-2021/). En las elecciones federales de 2018 fueron asesinados 48 precandidatos o candidatos. Véase: V. A. Herández Huerta, "Candidatos

La comunicación de las dos principales candidatas se hizo eco de esta violencia, con virulentos ataques personales. Ya fuera en debates televisados, discursos públicos o declaraciones a los medios de comunicación, las dos rivales se deshicieron en invectivas. Ambos se acusaron mutuamente de corruptas, incompetentes y manipuladas por sus "patrocinadores" políticos.

Además de estos ataques cruzados, la campaña se centró en la cuestión de la continuidad de los programas sociales, incluidas las becas para alumnos de educación primaria, secundaria y media-superior, y los subsidios para mayores de 65 años. La candidata de la oposición repitió una y otra vez que estas prestaciones se mantendrían en caso de cambio de gobierno, mientras que la candidata de la "continuidad" la acusaba de querer acabar con ellas. Las propuestas parecían converger, hasta el punto de que la distinción cristalizó en dos puntos: el estilo personal y el tipo de liderazgo que ejercerían ambas candidatas en caso de ser elegidas.

Los rasgos de carácter, la imagen y la actitud de las dos candidatas estuvieron en el centro de la campaña, en todas sus expresiones mediáticas. Los partidarios de la oposición señalaron la frialdad robótica de Sheinbaum, su entonación y su aire de clasemediera capitalina, para destacar mejor la espontaneidad e incluso la autenticidad de Gálvez, de origen indígena y modesto. Los partidarios de la futura presidente, por su parte, denunciaron la agresividad de la opositora y su oportunismo de empresaria.

Además de las referencias a las personalidades de las candidatas, la comunicación política se centró en los riesgos de una deriva autoritaria, según los partidarios de Gálvez, y de que el Estado sea capturado por las mafias políticas del "viejo régimen", según los partidarios de Sheinbaum. Algunos señalaron el riesgo de una profundización del autoritarismo instaurado por López Obrador, de quién Sheinbaum no sería más que una marioneta; otros auguraron la restauración de un régimen "neoliberal" en el que el Estado sería la gallina de los huevos de oro de un cártel de empresarios depredadores.

El tercer candidato, Jorge Álvarez Máynez, fue la sorpresa de las elecciones. Candidato joven, desconocido hasta entonces para la opinión pública, fue respaldado por el MC. Este candidato "no alineado" se distinguió de sus dos rivales por evitar los ataques personales y presentar propuestas originales sobre temas tan diversos como la seguridad, la lucha contra el racismo, la no violencia, el acceso de los jóvenes la cultura y al empleo, etcétera. Destacó el hecho de que era el único en no haber participado en gobiernos anteriores. Su juventud, su espontaneidad y el uso especialmente hábil que hizo de las redes sociales le valieron la preferencia del electorado más joven.

Tras las elecciones, la coalición opositora denunció un fraude "sistémico", señalando el apoyo directo del Presidente a la campaña de Claudia Sheinbaum y el uso clientelar de programas sociales. Las denuncias fueron objeto de un litigio con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los jueces federales reconocieron la intervención indebida del Presidente en las elecciones, pero concluyeron que no había sido tal como para alterar sustancialmente el resultado de la votación.

asesinados en México, ¿competencia electoral o violencia criminal?", *Política y gobierno*, Vol. 27, nº 2, 2020, pp. 1-30 (www.politicaygobierno.cide.edu/index.php/pyg/article/view/1307/1026).

Morena: la nueva hegemonía

Tras una disputa sobre la asignación de los escaños de representación proporcional, los partidos que apoyaban la candidatura de Claudia Sheinbaum obtuvieron una mayoría calificada (dos tercios) en la Cámara de Diputados⁷. En el Senado, tres miembros de la oposición se unieron a la coalición oficialista, alcanzando ésta los dos tercios de la Cámara Alta desde su primera sesión, en septiembre de 2024.

El mapa electoral para todos los niveles de gobierno refleja lo que algunos observadores han descrito como un "tsunami político"⁸. Morena progresó en todo el país, incluso en bastiones de la oposición. Desde el Congreso de la Unión hasta los congresos estatales, desde la Presidencia de la República hasta las gubernaturas, Morena es la fuerza política dominante. El partido de la Presidenta gobierna ahora en 23 de las 32 entidades federativas, frente a cuatro en 2018. Además, sus simpatizantes junto con sus aliados del Partido del Trabajo (PT), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y de varios partidos regionales tienen mayoría en 27 de los 31 congresos estatales en los que hubo elecciones (todos los estados excepto Coahuila), es decir, cinco más que antes⁹. Por último, en los estados gobernados por la oposición, como Guanajuato y Jalisco, Morena y sus aliados obtuvieron más escaños que antes. Morena sólo perdió escaños en la Ciudad de México, donde, sin embargo, consiguió mantener una mayoría calificada. Sobre todo, ganó, incluyendo el Congreso y la gubernatura, en Yucatán, que está en manos del PAN desde 2018.

El mapa electoral de los municipios es más diverso, pero los candidatos de Morena y sus aliados también aumentaron su presencia en los mil 802 ayuntamientos de ciudades medianas y grandes donde hubo elecciones, en 30 de las 32 entidades federativas.

La hegemonía de Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión y en tres cuartas partes de los congresos estatales le da el poder de impulsar reformas constitucionales sin tener que negociar con la oposición, lo que no ocurrió durante el mandato Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

Una de las manifestaciones más espectaculares de este maremágnum electoral es la desaparición del PRD, el partido que López Obrador cofundó en 1989 y en el que Claudia Sheinbaum dio sus primeros pasos. El partido histórico de la izquierda mexicana ha sido

⁷ El sistema electoral mexicano combina la mayoría simple (300 escaños en la Cámara de Diputados, 64 en el Senado) y la representación proporcional (200 escaños en la Cámara de Diputados, 64 en el Senado). La polémica se ha centrado en el porcentaje de sobrerrepresentación del que puede beneficiarse una fuerza política mediante la representación proporcional. La Constitución estipula que la diferencia entre los votos obtenidos por un partido y los escaños que se le asignan no debe superar el 8%. La oposición argumentó que este porcentaje debía aplicarse a los votos obtenidos por la coalición en su conjunto, y no a los obtenidos por cada uno de los partidos que la componen, considerados individualmente. Las autoridades electorales se pronunciaron a favor de la segunda interpretación, lo que permitió la coalición ganadora alcanzar la mayoría calificada tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, tras "robar" tres senadores a la oposición. Para más detalles de los resultados, véase https://computos2024.ine.mx/presidencia/nacional/candidatura.

⁸ C. S. M. Maldonado, "Morena, el 'tsunami' político de México: de dominar 4 a 24 estados en seis años", *El País*, 3 de junio de 2024 (https://elpais.com/mexico/elecciones-mexicanas/2024-06-03/morena-el-tsunami-politico-de-mexico-de- dominar-4-a-24-estados-en-seis-anos.html).

⁹ Cualquier reforma constitucional debe ser aprobada por las dos terceras partes de ambas cámaras federales, y por la mayoría de los diputados locales en al menos 17 de los 32 congresos estatales y de la Ciudad de México.

literalmente absorbido por Morena. Además, el PRI, partido surgido de la revolución de 1910 y que dominó la política de 1929 a 2000, obtuvo los resultados más bajos de su historia. Por último, en la Cámara de Diputados, el PAN, el partido de oposición más antiguo del régimen posrevolucionario, retrocedió al tercer lugar, detrás de Morena y el PVEM.

Paralelamente a su expansión territorial, el nuevo partido dominante ha diversificado su base social, extrayendo sus votos de los sectores socioeconómicos bajos y medios, tanto en zonas urbanas como rurales. Sin embargo, entre 2018 y 2024 Morena parece gentrificarse, ya que su popularidad ha disminuido significativamente en ambos extremos del electorado: los más precarios y los más pudientes¹⁰.

Tendencia: multipartidismo de geometría variable y versatilidad electoral

Morena domina la representación política, pero su hegemonía dista de ser absoluta si observamos los patrones de votación a nivel local y regional desde la fundación del partido, en 2011. De hecho, en las localidades y regiones del centro y norte del país, en particular, pero también en el sureste (Chiapas, península de Yucatán), las configuraciones políticas y los patrones de votación reflejan un alto grado de pluralismo. Los bastiones electorales de los partidos políticos son efímeros, tan fluidas son las alianzas y tan frecuentes los realineamientos. Desde este punto de vista, Morena se asemeja mucho más a un partido atrapatodo que acoge a las más diversas fuerzas políticas, ya sean tránsfugas de partidos de oposición, notables locales o líderes emergentes para quienes el partido oficialista es poco más que una "franquicia" con un alto valor agregado en el mercado electoral. La mayoría de los electores mexicanos, en el norte, centro y sur del país, en el campo y en las ciudades, también se ha vuelto cada vez más voluble, lo que hace improbable un nuevo régimen de partido hegemónico como el que prevaleció de 1929 a 2000¹¹.

¹⁰ W. Sonnleitner, "¿Dónde surgió, ganó y se expandió Morena?", *Mapas y Votos*, 5 de junio de 2024 (https://mapasyvotos.colmex.mx/mapas-y-votos-en-aristegui-noticias/).

¹¹ W. Sonnleitner, "Le Mexique s'est-il polarisé ? Changement et continuités d'une géographie électorale plurielle et fragmentée", *Cahiers des Amériques latines*, n° 104, 2024 (http://journals.openedition.org/cal/19177).

Para citar este capítulo: David Recondo, "Elecciones en México: la continuidad en el cambio", in D. Recondo (dir.), América latina. El año político 2024/Les Etudes du CERI, n° 275-276, Enero 2025 [en línea: www.sciencespo.fr/ceri/fr/papier/etude].

Las elecciones en la República Dominicana: continuidad política Christian Girault

Las elecciones generales, celebradas el 19 de mayo de 2024, estuvieron precedidas el 18 de febrero por elecciones municipales. Al igual que en 2020, las elecciones municipales fueron un anticipo de las generales. El partido gobernante, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), ganó las elecciones por un amplio margen, obteniendo 120 de los 158 consejos municipales en juego. La victoria de Carolina Mejía, alcaldesa de Santo Domingo y secretaria del PRM, con 61 % de los votos, fue un símbolo de continuidad. Sin embargo, hay que señalar dos puntos: la participación relativamente baja (sólo el 46,7% de los votantes inscritos) y la fuerza de los partidos de la oposición en algunos municipios del interior (La Vega, por ejemplo).

Las elecciones, que se celebran en la República Dominicana cada cuatro años, tradicionalmente en mayo, comprenden las elecciones legislativas (Cámara de Diputados y Senado), la elección de diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y la elección presidencial. En 2024, el electorado no mostró mucho entusiasmo por estas elecciones, ya que el partido parecía decidido de antemano. Desde el inicio, el presidente Luis Abinader, que se presentaba para un segundo mandato consecutivo, beneficiaba de un amplio apoyo y la oposición parecía especialmente débil y dispersa. Desde finales de 2023, todos los institutos de encuestas daban a Abinader como vencedor en la primera vuelta. Así que no había verdadero suspenso. Las normas electorales prevén una segunda vuelta si el candidato principal no obtiene el 50% más uno de los votos en la primera vuelta. Antes de analizar los resultados, vale la pena echar la vista atrás a los cuatro años de gobierno de Abinader, elegido en julio de 2020 e instalado un mes después, en plena pandemia de covid-19¹.

Balance del primer mandato de Abinader (2020-2024)

Son varias las razones que explican la valoración generalmente favorable de la actuación del Presidente saliente. El éxito de la gestión de la pandemia de covid-19 es el primer punto positivo. El último informe disponible muestra 4.400 muertes de un total de 630.000 personas afectadas por la enfermedad en el país. Se trata de un buen registro epidemiológico comparado con el de países vecinos de la región como Guatemala, Panamá, Honduras y Costa Rica. El gobierno realizó una compra urgente de vacunas, la organización de campañas de vacunación fue eficaz, y las medidas sanitarias frenaron la propagación del virus. Cabe señalar que el servicio de metro de Santo Domingo funcionó sin interrupción durante todo el periodo.

La buena salud de la economía dominicana es sin duda el principal argumento del Gobierno. En efecto, tras la breve recesión de 2020, el crecimiento del producto interior bruto (PIB) se ha reanudado a un ritmo del 5-6%, muy por encima de la media de los países de la Región. El sector turístico, extremadamente dinámico, está impulsando este crecimiento, con siete

¹ Sobre las elecciones de 2020 y el Gobierno de Luis Abinader, véase C. Girault, "L'alternance politique (2020-2022)", Opalc, diciembre de 2022 (www.sciencespo.fr/opalc/sites/sciencespo.fr.opalc/files/GIRAULT%20 C.%20Republique%20Dominicaine%2C%20L%27%20alternance%20politique%20(2020-2022) 0.pdf).

millones de visitantes en 2023 y un objetivo de diez millones para 2026. Abinader ha hecho de ello una prioridad lanzando un nuevo programa de desarrollo turístico en el sur (proyecto Bahía de las Águilas). Las exportaciones también se han visto impulsadas por los altos precios del oro y el cacao. Las zonas francas industriales del país también están recobrando impulso, proporcionando 190.000 puestos de trabajo. La inversión extranjera directa (IED) registró un flujo constante de alrededor de 2.500-3.000 millones de dólares al año durante el periodo 2013-2021, alcanzando la cifra récord de 4.000 millones de dólares en 2022². Las transferencias procedentes del extranjero (*remesas*), principalmente de Estados Unidos, donde la comunidad dominicana cuenta con 2,4 millones de personas, también están aumentando considerablemente (10.2 mil millones de dólares en 2023)³. Estos buenos resultados también se observan en el frente monetario y financiero, con un peso estable y un aumento de las reservas del Banco Central. La República Dominicana se ha convertido en la primera economía de la región Centroamérica-Caribe, y Santo Domingo es sin duda su metrópoli más dinámica.

A nivel interno, el gobierno de Abinader sólo ha cumplido muy parcialmente su promesa de luchar contra la corrupción. Inicialmente, Miriam Germán, la Procuradora General, emitió algunas duras acusaciones y se realizaron algunos arrestos espectaculares. Al principio del mandato, la corrupción se vio ciertamente frenada, ya que algunos funcionarios temían ser encarcelados. Sin embargo, los juicios se alargaron y, al final, ningún político destacado – ex presidente o ministro – fue condenado. El proceso iniciado en el marco del escándalo Odebrecht, debía sacar a la luz compromisos políticos que implicaban sobornos por un total de 92 millones de dólares, pero no arrojó resultados⁴. Por otra parte, un senador notoriamente corrupto fue absuelto por los tribunales y pudo recuperar su escaño sin dificultad. El propio Presidente Abinader se vio atrapado entre dos fuegos, al aparecer su nombre en el escándalo de los "Papeles de Panamá", en octubre de 2021.

Los resultados de las elecciones del 19 de mayo de 2024

Cuadro 1 Resultados de las elecciones presidenciales en la República Dominicana en 2020 y 2024

	Partido Revolucionario Moderno (PRM)	Partido de la Liberación Dominicana (PLD)	Fuerza del Pueblo (FdP)	Otros partidos	Participación electoral
2020	L. Abinader 52,52 %	G. Castillo 37,46%	L.Fernández 8,90%	1,12%	55,29%
2024	L. Abinader 57,44%	A. Martínez 10,39%	L.Fernández 28,85%	3,32%	54,37%
Fuente: Junta Central Electoral					

² Cepal, La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2023, Santiago, Naciones Unidas, 2023 (https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/9a7cc765-ac4e-40dc-b69d-4ffe3cc4508e/content).

³ M. Orozco, "Future Flows of Family Remittances to Latin America and the Caribbean", Washington, The Dialogue, 27 de julio de 2024 (www.thedialogue.org/wp-content/uploads/2024/07/Future-Flows-of-Family-Remittances-07.27.2024.pdf).

⁴ N. Piera, "La recta final para el caso Odebrecht, donde solo dos fueron sentenciados", YouTube, 17 de octubre de 2021 (www.youtube.com/watch?v=P75y74lF4Jc).

Luis Abinader, candidato a un segundo mandato presidencial de cuatro años, fue elegido en primera vuelta con el 57,4% de los votos. Leonel Fernández, del partido Fuerza del Pueblo (FdP), y Abel Martínez, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), quedaron en un lejano segundo lugar, con el 28,8% y el 10,4% de votos respectivamente. El ex presidente Fernández había cumplido ya tres mandatos y aspiraba a un cuarto. Mejoró su resultado de las anteriores elecciones porque su partido, surgido de una escisión del PLD, consiguió "desviar" gran parte de las fuerzas del antiguo partido. Abel Mártinez, ex alcalde de Santiago, la segunda ciudad del país, obtuvo una puntuación decepcionante que puso de manifiesto la debilidad de este partido caído en desgracia. Para el partido en el poder, sin embargo, la victoria debe ser matizada por una participación electoral bastante baja: 54,4%, frente al 55,3%, en 2020, en medio de la pandemia. La plancha electoral del candidato presidencial y de su vicepresidenta, Raquel Peña, atrajo apenas al 30,8% de los electores inscritos.

El PRM tiene mayoría en el Congreso, con 24 de los 32 escaños del Senado y 134 de los 190 escaños de la Cámara de Diputados. Los siete escaños asignados para representar a la comunidad residente en el extranjero (más de 860.000 inscritos) también están en manos del PRM. Por último, de los veinte escaños asignados a la República Dominicana en el Parlacen, doce son para el PRM⁵.

Gobierno de la mayoría en el sistema de partidos

Las elecciones de 2024 confirman la tendencia reciente hacia la afirmación de un partido mayoritario dominante que llena el "cartón completo", como había hecho el PLD en el periodo anterior. El PRM es una de las últimas ramas surgidas de un tronco único, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), originalmente el partido de oposición a la dictadura de Trujillo (1930-1961), fundado en La Habana en 1939. Como tal, goza de un alto grado de legitimidad, al igual que las otras ramas que gobernaron el país desde el centro a partir de 1978⁶.

El PRM mantiene estrechos vínculos con los principales sectores económicos locales y los inversores extranjeros. Cuenta con el favor de los empresarios – empezando por el propio Presidente –, pero también conserva el apoyo de los militantes históricos de la tradición "revolucionaria" (anti-dictatorial), de muchos intelectuales por ejemplo. Además, sabe desplegar todo un abanico de acciones clientelistas para dominar el espectro político y aglutinar a los pequeños grupos de izquierda y derecha.

La singularidad de la República Dominicana

Las elecciones arrojan luz sobre la vida política de un país relativamente desconocido, raramente mencionado en los panoramas políticos del conjunto de América Latina. Algunas

⁵ La República Dominicana es miembro de pleno derecho del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

⁶ Durante el régimen autoritario de Joaquín Balaguer (1966-1978 y 1986-1996), la democratización del sistema político fue una lucha cuesta arriba. Véase J. Hartlyn, *The Struggle for Democratic Politics in the Dominican Republic*, Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 1998.

características lo acercan a las demás naciones de América Latina y el Caribe, mientras que otras tendencias lo diferencian.

El fortalecimiento de las clases medias urbanas, cada vez más concentradas en Santo Domingo y Santiago de los Caballeros, es un rasgo importante que recuerda la situación de las grandes metrópolis latinoamericanas. Sin embargo, un análisis más detallado muestra que la tasa de pobreza se ha estancado en torno al 20% durante los últimos veinte años, a pesar del crecimiento económico. Sigue habiendo grandes bolsas de pobreza en las ciudades y en algunas zonas rurales. El Indice de Desarrollo Humano (IDH) de las Naciones Unidas ha aumentado notablemente, pero la situación social sigue siendo frágil en general: los salarios son bajos y el desempleo y el subempleo están muy extendidos. La emigración a Estados Unidos continúa, al igual que la inmigración procedente de Haití. Como en otros lugares de América Latina, parece que el futuro de las clases medias es crucial para la supervivencia de la democracia⁷.

Por otra parte, aquí como en todas partes, los votantes expresan cada vez más su rechazo a diversas formas de corrupción. A pesar de la censura, numerosas publicaciones de periodistas independientes como Nuria Piera e informes de organizaciones cívicas como Participación Ciudadana⁸ han documentado ampliamente los graves hechos de corrupción. La ausencia de sanciones serias contra los "aprovechadores" y los infractores de alto rango conduce a menudo a un rechazo de la política, lo que puede explicar el alto índice de abstención registrado en 2024, a pesar de los numerosos incentivos para votar – se ha denunciado la compra de votos, una práctica vergonzosa que recuerda los viejos defectos del sistema electoral. Al final, la confianza en las instituciones democráticas parece bastante baja, y el país se une a la media mediocre de los países del continente, con un apoyo a la democracia de sólo 48%, la tasa media de América Latina⁹.

Es el funcionamiento del sistema de partidos antes mencionado lo que más distingue a la República Dominicana de otros países latinoamericanos. En ausencia de partidos de izquierda o de derecha, no es posible la alternancia o el movimiento "pendular" entre estos dos polos - la oscilación de 2020 fue un episodio excepcional. Otro rasgo original es la permanencia de una clase de políticos experimentados que brincan de un puesto político a otro, o de la administración al sector privado, con gran facilidad. Apenas hay espacio para la innovación política: aquí no hay lugar para políticos improvisados – los famosos *outsiders* –, que abundan en otros lugares.

Además, la ideología desempeña un papel menor en el espacio público. Por ejemplo, los sentimientos xenófobos y las expresiones de nacionalismo antihaitiano prácticamente no encuentran expresión electoral. En cambio, la presencia de grandes núcleos de militantes procedentes de la antigua base del PRD impone una semántica "revolucionaria", "liberadora" o "modernista", según los casos.

⁷ Rosario Espinal destaca la cuestión del sector de bajos ingresos, justo por encima del umbral de pobreza, que representa un tercio del electorado y se encuentra en una posición vulnerable, especialmente en tiempos de inflación (R. Espinal, "Clase media y política dominicana", *Estudios Sociales*, Vol. XLIII, n° 161, 2020, pp. 73-96).

⁸ Participación Ciudadana: https://pciudadana.org/2023/07/analisis-coyuntural-latinobarometro-2023-y-prospectiva/

⁹ Latinobarómetro citado por Participación Ciudadana, *ibid*.

A nuestro juicio, las causas de esta singularidad dominicana hay que buscarlas en la historia particular de la descolonización del país en el siglo XIX, y más recientemente en la fase de transición democrática de finales del siglo XX, muy larga y dolorosa. Hay que añadir que la estrecha relación con la omnipresente cultura política estadounidense, a través de los medios de comunicación y los vínculos transnacionales, es otro elemento fundamental que distingue a la República Dominicana de los países hermanos de América Latina.

Para citar este capítulo: Christian Girault, "Las elecciones en la República Dominicana: continuidad política", in D. Recondo (dir.), *América latina. El año político 2024/Les Etudes du CERI*, n° 275-276, Enero 2025 [en línea: www.sciencespo.fr/ceri/fr/papier/etude].

Elecciones en Panamá: el retorno del martinellismo Claire Nevache

El 5 de mayo de 2024, los panameños eligieron a su nuevo presidente, José Raúl Mulino, en unas elecciones a una sola vuelta, con el 34,2% de los votos. Electo a sus 65 años, Mulino no es un novato en política: su participación se remonta a su oposición a la dictadura en los años ochenta, como representante de los sindicatos patronales. Durante la década de 1990, Mulino fue presidente de un pequeño partido fundado por él mismo que, mediante fusiones con otros partidos, formó finalmente una alianza con el partido Cambio Democrático en 2009. En este contexto, Mulino apoyó la candidatura del magnate de los supermercados Ricardo Martinelli en su ascenso a la presidencia. En 2009, tras la victoria de Martinelli, Mulino fue nombrado sucesivamente ministro de Gobierno y Justicia, y después ministro de Seguridad.

Este último cargo es el que más críticas ha acarreado a Mulino, en relación con episodios de represión de movimientos sociales¹ y acusaciones de irregularidades en un contrato para la compra de radares de vigilancia marítima².

La elección de José Raúl Mulino como Presidente de la República habría sido inimaginable un año antes. Entonces, ¿qué secuencia de acontecimientos llevó a la elección de este abogado de negocios?

¿Cómo llegó Mulino a ser candidato dos meses antes de las elecciones?

José Raúl Mulino fue elegido bajo la bandera del partido personalista *Realizando Metas*, cuando el candidato "natural" debería haber sido su fundador, el expresidente Ricardo Martinelli. El recuerdo de este mandato (2009-2014), caracterizado por el pleno empleo, cifras de crecimiento de dos dígitos y considerables obras de infraestructura (en particular, la primera línea de metro de Centroamérica) durante un periodo de auge económico para toda la región, sigue poniendo nostálgica a una parte de la población, sobre todo en un momento marcado por la desaceleración económica y las consecuencias sociales de la pandemia. Para sus seguidores, los repetidos escándalos de corrupción y los numerosos procesos judiciales que enfrenta Ricardo Martinelli no empañan su trayectoria. De hecho, este líder con rasgos populistas ganó las elecciones primarias de su partido en junio de 2023 con el 96.95% de los votos.

Sin embargo, tras su mandato, Martinelli fue acusado de una serie de delitos de blanqueo de capitales, corrupción y escuchas telefónicas ilegales. Intentó escapar de la justicia trasladándose a Estados Unidos, donde finalmente fue detenido y encarcelado durante un año, antes de ser extraditado a Panamá en 2018. Tras otro año en prisión preventiva, fue

¹ Human Rights Everywhere, "Informe Sobre Violación de Derechos Humanos En Changuinola Del 7 al 11 de Julio de 2010", *Revista Panameña de Política*, n° 10, 2010, pp. 117-142.

² ACAN-EFE, "Fiscalía imputa al exministro de Seguridad Mulino por contrato con Finmeccanica", *Metro Libre*, 1 de agosto de 2019.

finalmente puesto bajo arresto domiciliario, y luego absuelto dos veces, en medio de sospechas de posibles presiones sobre el sistema judicial.

En junio de 2023, pocas semanas después de las primarias de su partido, Martinelli fue finalmente condenado a 10 años y ocho meses de prisión, en un caso relacionado con la compra de un grupo de medios de comunicación con 40 millones de dólares de dinero público. Sin embargo, la Constitución del país estipula que no puede ocupar la presidencia de la República ninguna persona que haya sido condenada a más de cinco años de cárcel (art. 182). La defensa de Martinelli intentó aplazar la ejecución de la sentencia, utilizando todos los recursos legales posibles, mientras él anunciaba que su esposa sería su compañera de fórmula. Al final, ante la posibilidad de que ambas candidaturas fueran anuladas, su exministro de Seguridad, José Raúl Mulino, fue nombrado candidato a la Vicepresidencia en octubre de 2023.

La Corte Suprema de Justicia rechazó el último recurso de Ricardo Martinelli en vísperas de la apertura oficial de la campaña electoral, apenas tres meses antes de la votación. Cinco días después, ante la posibilidad de ser detenido, el expresidente se refugió en la embajada de Nicaragua, que le concedió asilo político y desde donde hizo campaña para la elección de su vicepresidente, al tiempo que denunciaba la "persecución política" de la que estaba siendo objeto. Dos meses antes de la campaña electoral, el organismo electoral declaró oficialmente nula la candidatura de Martinelli, mientras que la de José Raúl Mulino estaba siendo examinada por la Corte Suprema de Justicia. Finalmente, el viernes anterior a las elecciones, se levantó la incertidumbre y se confirmó la presencia de Mulino en las papeletas electorales.

Los meses que precedieron a las elecciones estuvieron, por tanto, marcados por un alto grado de incertidumbre ligado a la judicialización de la campaña electoral. La retórica empleada por Ricardo Martinelli en el sentido de que su procesamiento no era más que el reflejo de intereses políticos destinados a excluirle de la contienda electoral parece haber dado sus frutos³. Según una encuesta, el 68% de la población cree que el proceso de Martinelli fue un juicio político, mientras él lideraba las encuestas. Los resultados electorales muestran que la campaña electoral basada en la equivalencia entre las candidaturas de José Raúl Mulino y Ricardo Martinelli fue bastante eficaz.

Fue una campaña basada en la promesa de una renovada prosperidad económica y del poder adquisitivo de la población la que resultó más convincente en detrimento de las cuestiones vinculadas a la corrupción y al Estado de derecho. Paralelamente a esta victoria, otro sector de la población se movilizó en sentido contrario.

La emergencia de una fuerza política "anticorrupción"

Los diferentes índices de medición de la calidad de la democracia ubican a Panamá como una "democracia electoral" (V-Dem) o una "democracia deficiente" (Demoracy Index), ubicando al país entre el cuarto y el séptimo lugar del continente, detrás de Uruguay, Costa

³ "68% cree que juicio a Ricardo Martinelli fue político", *Panamá América*, 27 de febrero de 2024 (www.panamaamerica.com.pa/politica/68-cree-que-juicio-ricardo-martinelli-fue-politico-1224086).

Rica o Chile. Sin embargo, contrario a estos países, los índices de Panamá tendieron a disminuir a lo largo de los últimos diez años.

En este contexto, ciertos sectores de la población, con un nivel de vida superior a la media, están cada vez más indignados con el tema de la corrupción. Desde la pandemia, esta cuestión aparece sistemáticamente en los sondeos de opinión como el principal problema del país, con la percepción de que esta problemática va en aumento⁴. Esto se refleja en una desconfianza generalizada hacia las instituciones y en reflejos antipolíticos y antiparlamentarios.

A partir de 2019, este antiparlamentarismo se convirtió en una opción electoral, dentro de lo que algunos han llamado el movimiento "anticorrupción"⁵. En un momento en que la Asamblea estaba salpicada de escándalos, la consigna era no reelegir a los diputados en ejercicio. Además, varias personalidades de la sociedad civil y opositores a Ricardo Martinelli aprovecharon la oportunidad para presentarse como candidatos al margen de los partidos políticos. Los candidatos que hacen uso de esta opción son comúnmente denominados por el público como "candidatos independientes". En 2019, estos candidatos no partidistas obtuvieron casi una cuarta parte de los votos en las elecciones presidenciales, así como cinco escaños de los setenta y uno que cuenta la Asamblea Nacional.

Mientras tanto, la desconfianza en la política y la indignación por los escándalos de corrupción han aumentado aún más, en parte como consecuencia de la dudosa gestión de la pandemia, y en parte como resultado de un amplio movimiento social contra un contrato minero. En efecto, existían fuertes sospechas de conflictos de intereses entre miembros del gobierno y la empresa minera, y de corrupción entre los parlamentarios encargados de aprobar el contrato entre la empresa y el Estado. Posteriormente, el contrato fue declarado inconstitucional por el Tribunal Supremo de Justicia⁶.

La sensibilidad anticorrupción se organizó de forma diferente durante las elecciones de 2024. Las dificultades de llevar a cabo una campaña electoral con poca financiación y sin estructura partidista convencieron al candidato que había quedado tercero en las elecciones presidenciales de 2019, Ricardo Lombana, para fundar un partido político: el Movimiento Otro Camino (MOCA). Mientras tanto, muchos candidatos no partidistas pertenecientes a este movimiento anticorrupción se han unido bajo una única bandera, llamada *Vamos*, sin fundar sin embargo un partido político.

Esta fuerza política ha demostrado ser el reflejo del auténtico descontento de una parte del país. Ricardo Lombana quedó segundo en las elecciones presidenciales con el 24,59% de los votos. Por otra parte, el grupo parlamentario anticorrupción, que reúne a diputados de Vamos, diputados del MOCA y un disidente de otro partido, se convirtió en el grupo más numeroso de la Asamblea, con 24 escaños. La entrada de este nuevo grupo también representa una renovación de la Asamblea Nacional en términos sociodemográficos: mientras que la

⁴ CIEPS, III Encuesta CIEPS de Ciudadania y Derechos, 2023 (https://cieps.org.pa/wp-content/uploads/2023/04/informe_ECD_CIEPS_2023.pdf).

⁵ H. Brown Araúz y M. Acosta, "La comunidad virtual y su actor político: el hashtag #NoALaReelección en las elecciones panameñas de 2019", *Sociology and Technoscience*, Vol. 12, n° 1, 2022, pp. 187-215.

⁶ C. Nevache, "Panamá : desarticulación del sistema de partidos en medio de movilizaciones históricas", *Revista de Ciencia Política*, Vol. 44, n° 2, 2024, pp. 393-414.

proporción de mujeres en la Asamblea es inferior al 20%, el grupo "anticorrupción" cuenta con un tercio de mujeres y el promedio de edad del grupo es casi diez años inferior al promedio de la Asamblea. En términos políticos, sin embargo, más allá de la promesa de hacer política de forma diferente, no está claro que sus propuestas rompan con el consenso de centro-derecha que ha caracterizado al país durante los últimos treinta y cinco años.

Así pues, tras las elecciones presidenciales, el Presidente electo parecía encontrarse en dificultades, con un grupo parlamentario de tan sólo quince diputados, en un momento en que debían debatirse cuestiones cruciales, en particular el futuro del fondo de pensiones y la cuestión minera que mencionábamos anteriormente. Sin embargo, las primeras votaciones en la Asamblea parecen mostrar un realineamiento de la política panameña a favor del Presidente.

De hecho, durante los veinte años que siguieron a la transición a la democracia, el Partido Revolucionario Democrático y el Partido Panameñista se opusieron entre sí, hasta la llegada de Martinelli en 2009, que se presentó como el líder capaz de superar esta oposición. Quince años después, estas tres fuerzas políticas parecen haberse aliado en el seno de la Asamblea Legislativa, frente a un nuevo actor: la fuerza "independiente" y anticorrupción.

Para citar este capítulo: Claire Nevache, "Elecciones en Panamá: el retorno del martinellismo", in D. Recondo (dir.), América latina. El año político 2024/Les Etudes du CERI, n° 275-276, Enero 2025 [en línea: www.sciencespo.fr/ceri/fr/papier/etude].

Uruguay, elecciones generales 2024: el Frente Amplio vuelve al poder Damien Larrouqué

Las elecciones generales de Uruguay se celebraron el domingo 27 de octubre de 2024. Aunque fue necesaria una segunda vuelta para confirmar, cuatro semanas después, la victoria del candidato presidencial del Frente Amplio (FA), Yamandú Orsi, que se había impuesto en la primera vuelta con nada menos que el 46% de los votos, el triunfo de la coalición de izquierdas fue indiscutible. Además de Montevideo y su periferia, su tradicional bastión electoral, el Frente Amplio ganó en más de la mitad de los departamentos rurales, algunos de ellos bastiones históricos del Partido Nacional (PN), como Tacuarembó, Durazno y Florida.

En un país donde el voto es obligatorio y la abstención se castiga con una multa, la participación sigue siendo muy alta: nueve de cada diez votantes acudieron a las urnas. Con un 89,6% en la primera vuelta y un 89,35% en la segunda, estas asombrosas cifras de participación superan en unos treinta puntos la media de los países latinoamericanos en los que el voto es obligatorio – como en Costa Rica y Paraguay –, pero también en unos diez puntos la media de los países que también aplican una sanción económica a la abstención (como Argentina y Brasil)¹. Constante de la vida política uruguaya desde hace cuarenta años, esta alta participación es uno de los signos tangibles de una democracia sana y dinámica. La serena alternancia en el poder constituye otra ilustración.

Una coalición de izquierdas de nuevo en alza

Tras tres mandatos sucesivos de cinco años en el poder (2005-2020), el FA se prepara para tomar de nuevo las riendas el 1ero de marzo. El mandato de la coalición llamada "multicolor" (y luego "republicana"), que se formó oportunamente entre las dos vueltas electorales de hace cinco años, no habrá sido por tanto más que un paréntesis. Liderada por el PN e integrada por seis partidos que iban del centro (el Partido Independiente, PI) a la extrema derecha (el Cabildo Abierto, CA), esta alianza heteróclita no logró sobrevivir a la competición partidista del periodo previo a las elecciones primarias de junio.

Su recomposición durante el periodo de *ballotage* no frenó en nada el impulso electoral del FA. Por el contrario, la fórmula ganadora "Orsi-Cosse" recibió casi 150.000 votos más que en la primera vuelta: en la medida en que la participación electoral se mantuvo constante², esto significa que una proporción significativa del electorado centrista, en particular del PI y sin duda también del ala izquierda del Partido Colorado (PC), redirigió sus votos de segunda vuelta al favor del FA. En resumen, veinte años después de la primera, Uruguay vivió en 2024 su segunda alternancia derecha/izquierda desde el retorno a la democracia en 1985³.

¹ Para más información, cf. CELAG, "Voto obligatorio y participación electoral en América Latina", 11 de noviembre de 2022 (www.celag.org/voto-obligatorio-y-participacion-electoral-en-america-latina/).

² Apenas 7.000 sufragios menos fueron registrados a escala nacional entre la primera y la segunda vuelta, cf. sitio de la Corte electoral (**www.gub.uy/corte-electoral**/).

³ Tras un largo proceso de moderación programática y un paciente esfuerzo de movilización ciudadana (iniciado a finales de los años ochenta), la primera alternancia derecha / izquierda se produjo en octubre

Docente de formación e intendente de Canelones – el departamento que rodea la capital –, Yamandú Orsi proviene del ala mayoritaria de izquierda, el Movimiento de Participación Popular (MPP), representado por el ex presidente José Mujica (2010-2015) y su esposa, la senadora Lucía Topolansky. En las elecciones generales de 2019, Orsi fue jefe de campaña de Daniel Martínez. Es apreciado por los sectores más a la izquierda del FA. Tan político "de base" como hombre de aparato, encarna los esfuerzos de la coalición por poner en primer plano a nuevos candidatos⁴. Tras su (ajustada) derrota en 2019, la izquierda uruguaya supo cuestionarse a sí misma, iniciando un saludable proceso de renovación, que los votantes le han reconocido cinco años después⁵.

Con dieciséis senadores electos, el FA tiene mayoría absoluta en el Senado. De acuerdo con la Constitución, la cámara alta estará presidida por la futura vicepresidenta, Caroline Cosse, compañera de fórmula de Orsi. Exdirectora de Antel (la empresa estatal de telecomunicaciones) y exministra de Industria, Energía y Minería en el segundo mandato del socialista Tabaré Vázquez (2015-2019), ha sido sobre todo alcaldesa de la capital (2020-2024), un cargo que garantiza una gran visibilidad política y actúa como trampolín electoral para los concejales que lo ostentan. Como Presidenta de la Cámara Alta, Caroline Cosse sumará su voz a los debates parlamentarios y, si es necesario, su voto a la bancada de la izquierda, que consolidará así su posición de fuerza en la Asamblea General⁶. Compuesta por 99 miembros elegidos por representación proporcional, la Cámara Baja estará dominada por el FA, que cuenta con 48 diputados. Sin mayoría absoluta, pero de acuerdo con la cultura política del "presidencialismo pluralista" del país⁷, el FA deberá ser capaz de forjar acuerdos interpartidistas, lo que no debería ser difícil de obtener. De hecho, resulta que el PN, segundo partido del Parlamento con nueve senadores y 29 diputados, ha hecho campaña "en el centro", siguiendo el ejemplo de su líder, Alvaró Delgado, espíritu cartesiano, veterinario de profesión y miembro, en su juventud, del movimiento wilsonista situado en el ala izquierdista del PN.

Las enseñanzas uruguayas

Una de las primeras observaciones que se pueden hacer de las elecciones uruguayas es el derrumbe del campo reaccionario. Mientras que el ex general Guido Manini Ríos había obtenido más del 11% del electorado bajo la etiqueta del CA en 2019, las raíces electorales

de 2004, con la victoria de Tabaré Vázquez, líder emblemático fallecido en diciembre de 2020. Para más información sobre el ascenso electoral de la izquierda uruguaya, véase: A. Garcé y J. Yaffe, "La izquierda uruguaya (1971-2004), ideología, estrategia y programa", *América Latina Hoy*, n° 44, 2006, pp. 87-114.

⁴ De hecho, una de las principales debilidades del FA era la dificultad para renovar sus cuadros. Véase F. Rosenblatt, *Party Vibrancy and Democracy in Latin America*, Oxford, Oxford University Press, 2018, pp. 184-195.

⁵ C. Rossel y F. Monestier, "Uruguay 2020: el despliegue de la agenda de centro derecha en pandemia", *Revista de Ciencia Política*, Vol. 41, n° 2, 2021, pp. 413-414; D. Vairo et F. Antía, "Uruguay 2022: entre el referéndum, las reformas estratégicas y los escándalos políticos", *Revista de Ciencia Política*, Vol. 43, n° 2, 2023, pp. 387-388.

⁶ Es el poder legislativo en Uruguay, compuesto por el Senado y la Cámara de Representantes, es decir, el Congreso según el derecho constitucional estadounidense.

⁷ J. Lanzaro, "Uruguay: las alternativas de un presidencialismo pluralista", in J. Lanzaro (dir.), *Tipos de presidencialismo y coaliciones políticas en América Latina*, Buenos Aires, CLASCO, 2001, pp. 283-317.

de su partido no lograron arraigarse⁸. Es más, su partido ha tenido como rival a un partido disruptivo llamado Identidad Soberana, de tendencia conspirativa. Entre las dos, estas listas de extrema derecha obtuvieron menos del 6% de los votos y apenas dos diputados cada una, frente a los nueve diputados y tres senadores de la AC hace cinco años. En un momento en que la fiebre populista recorre la mayoría de las democracias del mundo, los uruguayos siguen apegados al consenso democrático. En otras palabras, se han mostrado relativamente insensibles a lo que Pierre Rosanvallon llama la "política negativa", particularmente asociada al "que-se-vayan-todos" (dégagisme, en francés) ⁹.

De acuerdo con esta primera observación, parece que la moderación y el pragmatismo están en el corazón de la cultura política nacional: constituyen el reflejo de una transición democrática que se construyó, como se suele decir, alrededor de un "pacto" entre civiles y militares¹º. La segunda lección radica en la identificación partidista del votante medio, que puede situarse en el centro del espectro político. En otras palabras, una campaña en Uruguay se gana "en el centro". La derecha ya lo ha entendido perfectamente: si bien el sistema de voto proporcional le permite entrar dispersa en las elecciones parlamentarias, no puede derrotar a la izquierda unida del FA en la segunda vuelta de las presidenciales sin formar una alianza basada en un ideario liberal-conservador común.

Además, la izquierda uruguaya está demostrando que todavía es posible ganarse el corazón de los votantes manteniendo un auténtico programa de izquierdas. Sin renunciar a su herencia socialdemócrata¹¹, el FA sigue teniendo la intención de apoyar el cambio social y cultural, pero sin olvidar las prioridades socioeconómicas que representan la dignidad por el trabajo, la lucha contra la desigualdad, la justicia social, el desarrollo sostenible, la educación o la salud¹². En una época en que la izquierda de gobierno está en crisis por todo el mundo, es deseable que esta fuerte identidad programática inspire a dirigentes y activistas más allá de las fronteras uruguayas.

Por cierto, el FA se mostró dividido ante el referéndum constitucional celebrado el mismo día de las elecciones generales, a iniciativa de la central sindical uruguaya (PIT-CNT), que pretendía rebajar la edad legal de jubilación a 60 años y prohibir los fondos de pensiones privados. Con sólo un 39% de aprobación, la reforma fue rechazada. Por otra parte, el FA se unió contra otro plebiscito, éste llevado a cabo por la derecha, que pretendía autorizar las redadas policiales nocturnas y al que se opusieron el 61% de los votantes.

⁸ D. Larrouqué, "L'élection présidentielle en Uruguay : défaite du Front large et autonomisation de l'extrême droite", in O. Dabène (dir.), *Amérique latine*. *L'année politique 2024/Les Etudes du CERI*, n° 245-246, 2020, pp. 82-84 (www.sciencespo.fr/opalc/sites/sciencespo.fr.opalc/files/LAPO%202019%20Fran%C3%A7ais.pdf).

⁹ P. Rosanvallon, Le Siècle du populisme : histoire, théorie, critique, Paris, Seuil, 2020, pp. 72-74.

¹⁰ C. G. Gillespie, Negotiating Democracy: Politicians and Generals in Uruguay, Cambridge, Cambridge University Press, 1991.

¹¹ D. Larrouqué y L. Rivera-Vélez, "Le Front ample en Uruguay (2005-2019) : longévité au pouvoir et résilience d'un parti social-démocrate", in F. Gaudichaud y T. Posado (dir.), *Gouvernements progressistes en Amérique latine (1998-2018) : la fin d'un âge d'or*, Rennes, PUR, 2021, pp. 187-198.

¹² Para más información, véase el documento siguiente: FA, *Bases programáticas 2025-2030*, s.l.n.d. (https://urlr.me/xu4pWD).

Aunque rechazado, este segundo referéndum ilustra una de las prioridades cardinales del Partido Conservador: la lucha contra la delincuencia y la inseguridad¹³. Será sin duda una tarea difícil para el FA hacer frente al reto de la delincuencia, en un momento en que algunos agitan el fantasma de una progresiva "latino-americanización" del país en esta materia.

¹³ I. Fynn Marguery, V. Pérez Bentancur y L. Tiscornia, "Uruguay 2023: Security as a persistent challenge and the decline of non-policy politics as a political asset", *Revista de Ciencía Política*, Vol. 44, n° 2, 2024, pp. 441-462.

Para citar este capítulo: Damien Larrouqué, "Uruguay, elecciones generales 2024: el Frente Amplio vuelve al poder", in D. Recondo (dir.), *América latina. El año político 2024/Les Etudes du CERI*, n° 275-276, Enero 2025 [en línea: www.sciencespo.fr/ceri/fr/papier/etude].

Las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio de 2024: un escrutinio fraudulento

Thomas Posado

Las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio de 2024 marcan una nueva etapa en la consolidación autoritaria del gobierno de Nicolás Maduro. Varios meses después de la votación, siguen enfrentándose dos versiones de los resultados. Por un lado, el Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo encargado de organizar los comicios y cercano a Maduro, declaró sobre la base del 96,87% de las actas escrutadas que el presidente saliente había ganado las elecciones con el 51,95% de los votos emitidos, frente al 43,18% de Edmundo González, su principal rival de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD). El gobierno alega que el pirateo informático le ha impedido publicar los resultados detallados. Sin embargo, éstos deben transmitirse por medios analógicos y deben conservarse las actas en papel, por lo que un pirateo informático no puede explicar esta falta de comunicación.

Por su parte, la oposición ha publicado en Internet lo que afirma son las actas del 83,50% de los mesas electorales, lo que le permite establecer resultados diametralmente opuestos (67,08% para Edmundo González frente a 30,46% para el jefe de Estado saliente)¹. El propio Nicolás Maduro ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que también le apoya, para legitimar el resultado anunciado por el CNE. La misión de observación de la Fundación Carter presentó ante la Organización de Estados Americanos (OEA) las actas que confirman la victoria de la oposición. El gobierno de Maduro sostiene que estas actas son falsas, pero todo hace pensar que el ejecutivo organizó un fraude masivo.

Los 29 y 30 de julio, se produjeron 915 protestas espontáneas, acusando al gobierno de fraude, sobre todo en zonas urbanas de clase popular que habían apoyado durante mucho tiempo a Hugo Chávez y luego a Nicolás Maduro². El gobierno desplegó una implacable represión. Además de las 27 muertes registradas, la organización no gubernamental Foro Penal informó de que 1.767 personas habían sido detenidas hasta el 30 de septiembre de 2024³. La represión tiene múltiples facetas. Cientos de personas han sido despedidas de instituciones públicas por publicar en las redes sociales un simple mensaje de oposición a Maduro. Edmundo González se encuentra ahora exiliado.

Hacer campaña en un régimen autoritario

Edmundo González fue designado candidato por defecto. Las primarias organizadas en octubre de 2023 por la coalición opositora, la PUD, habían dado la victoria a María Corina Machado con el 92,3% de los votos emitidos, pero fue declarada inhabilitada por el TSJ. A

¹ https://resultadosconvzla.com

² Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, "Crisis democrática y escalada represiva en un contexto post electoral", 23 de agosto de 2024 (www.observatoriodeconflictos.org.ve/tendencias-de-la-conflictividad/conflictividad-social-en-venezuela-durante-julio-de-2024).

³ https://foropenal.com/

continuación, presentó la candidatura de Corina Yoris, una académica que nunca había desempeñado un papel político destacado, que también fue rechazada por el CNE sin razón aparente. Ante estos obstáculos institucionales puestos por el Ejecutivo, la PUD se agrupó en torno a la candidatura de Edmundo González, un ex embajador poco conocido por los venezolanos. Esta restricción a la libertad de candidatura no se limitó a los casos mencionados. Henrique Capriles, heraldo de las facciones más conciliadoras con los gobiernos chavistas, también fue considerado inhabilitado. La candidatura de Manuel Isidro Molina, apoyada por el Partido Comunista de Venezuela (PCV), no fue validada por el CNE, aunque no se explicaron las razones. Desde 2012, dieciséis partidos políticos de diversas orientaciones, han sido objeto de "intervenciones" por parte del TSJ, que ha sustituido su dirección por otra más favorable al Gobierno madurista.

El carácter antidemocrático de estas elecciones también se desprende de la escasa renovación del censo electoral. De los 4,5 a 5 millones de venezolanos en edad de votar que viven en el extranjero, una fracción del electorado considerada más favorable a la oposición, sólo 69.211 figuran en el registro electoral. En algunos casos, la ilegalidad de su situación en el país de acogida fue suficiente para impedir su inscripción en el registro electoral. En otros casos, el Gobierno de Maduro restringió al máximo la inscripción de estos venezolanos en embajadas y consulados.

Incluso la fecha de las elecciones, que se adelantó varios meses, fue elegida de forma oportunista por el Gobierno: el 28 de julio es el aniversario del nacimiento de Hugo Chávez. Sin embargo, explotar el carisma del fallecido líder resulta cada vez más complejo, más de once años después de su muerte.

María Corina Machado desempeñó un papel destacado en la campaña presidencial de González. El fervor que ha despertado es una consagración paradójica. Debe su éxito a su radicalismo ideológico, defendiendo el mantenimiento de las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos e incluso la intervención militar norteamericana para liberar al país del yugo madurista. También se ha negado a participar en las elecciones regionales de noviembre de 2021. Su éxito marca el fracaso de la oposición más conciliadora, sin duda vinculado a los escasos resultados obtenidos a través de las negociaciones. Ahora, la principal dirigente de la oposición venezolana, María Corina Machado, ha dado un giro estratégico al pasarse a la vía electoral.

¿Qué dicen los resultados electorales publicados por la oposición?

Un estudio de los resultados detallados publicados en línea por la oposición pone de relieve el desalineamiento de las clases populares venezolanas con el chavismo. Es necesariamente sesgado, ya que falta el 16,5% de estas actas, probablemente las de las zonas donde el Gobierno de Maduro tiene un mayor control, lo que impide a la oposición obtenerlas. Sin embargo, las tendencias son instructivas en cuanto a la evolución del equilibrio de poder político. Por primera vez desde que Hugo Chávez llegó al poder, incluso las clases populares votaron mayoritariamente a la oposición liberal. Edmundo González ganó en los 23 estados federales y en 267 de los 295 municipios cuyos resultados están disponibles (de los 335 del país).

Tiene mayoría tanto en las zonas urbanas como en las rurales, entre las clases pudientes y entre las clases populares, aunque obtuvo mejores resultados en las primeras (el electorado tradicional de la PUD) que en las segundas. Se trató menos de un voto de apoyo a un proyecto liberal que de un voto de castigo a la década de crisis que ha sufrido la sociedad venezolana bajo la presidencia de Nicolás Maduro.

Mientras que Edmundo González obtuvo sus mayores victorias en los estados bastión de la oposición venezolana, en los Andes cercanos a la frontera con Colombia (Táchira, 81,89%; Mérida 76,90%), también obtuvo altas puntuaciones en todas las capitales de estado (Maracaibo 74,87%; Valencia 72,97%; Barquisimeto 72,02%), así como en estados rurales que anteriormente habían sido ganados por Chávez y luego por Maduro (Barinas 74,49%; Portuguesa 64,05%; Apure 62,96%). En Caracas, ganó por goleada tanto en los sectores pudientes del este de la ciudad, tradicionalmente ganados por la oposición (Chacao 84,51%, Baruta 83,71%, El Hatillo 83,34%), como en las zonas populares de Petare (69,25%), Antímano (58,71%) y 23 de Enero (57,74%).

Las zonas donde Nicolás Maduro obtuvo mejores resultados fueron las regiones aisladas. De los 28 municipios en los que ganó, sólo siete tenían más de 40.000 habitantes y sólo uno más de 100.000 (Ocumare del Tuy). Tres de ellos están ubicados en regiones, relativamente raras en Venezuela, donde las poblaciones indígenas son mayoritarias (dos con mayoría Warao en el delta del Orinoco, uno con mayoría Wayuu en la península de la Guajira). Dieciocho de estos municipios se concentran en dos estados (Sucre y Miranda). Es posible especular que se trata de zonas donde el control clientelar del gobierno central conserva parte de su antigua fuerza.

Estas elecciones confirman la "huida hacia adelante autoritaria" de Nicolás Maduro, a la que ninguna mediación internacional parece capaz de poner fin para sacar al país de esta nueva crisis⁴. La toma de posesión para el nuevo mandato presidencial de seis años tendrá lugar el 10 de enero de 2025. Aunque no cabe duda de la lealtad de todas las instituciones del Estado venezolano a Nicolás Maduro (en primer lugar el Ejército), Edmundo González sigue empeñado en reclamar el poder a pesar del riesgo de un nuevo enfrentamiento, similar al que tuvo lugar con Juan Guaidó en 2019, el de una competición por el reconocimiento internacional, que acabó en fracaso a ojos de todos los actores.

Nicolás Maduro tiene tanto interés en mantenerse en el poder porque marcharse supondría no sólo perder el acceso a los abundantes ingresos petroleros del país, sino también enfrentarse a un posible enjuiciamiento por parte de la Corte Penal Internacional por los abusos contra los derechos humanos cometidos en los últimos años. El descontento del pueblo venezolano con la deriva autoritaria del poder y el colapso económico no cesa.

⁴ T. Posado, "Venezuela : la fuite en avant autoritaire", *La vie des idées,* 17 de septiembre de 2024 (https://laviedesidees.fr/Venezuela-la-fuite-en-avant-autoritaire).

Para citar este capítulo: Thomas Posado, "Las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio de 2024: un escrutinio fraudulento", in D. Recondo (dir.), *América latina. El año político 2024/Les Etudes du CERI*, n° 275-276, Enero 2025 [en línea: www.sciencespo.fr/ceri/fr/papier/etude].

Cuarta parte

América latina en perspectiva

Perú: el peligro de una democracia impotente Rodrigo Barrenechea y Alberto Vergara

En los últimos siete años, Perú ha experimentado una agitación política endémica y un declive democrático*. Siete personas han ocupado la presidencia durante este periodo. A principios de diciembre de 2022, en respuesta a los repetidos intentos del Congreso de destituirlo, el Presidente Pedro Castillo intentó un autogolpe. La maniobra fracasó, al igual que su posterior intento de huir del país. Fue encarcelado, y la vicepresidenta primera, Dina Boluarte, que le sucedió como presidenta interina, reprimió las manifestaciones callejeras autorizando un uso excesivo de la fuerza, ilegítimo en democracia. En enero de 2023 *The Economist* calificó a Perú de "régimen híbrido" en su índice anual sobre el estado de la democracia en el mundo¹.

La literatura académica sobre el "retroceso democrático" tiende a considerar, casi por definición, que las democracias mueren por una excesiva concentración de poder en muy pocas manos, a menudo las de un hombre fuerte solitario como el húngaro Viktor Orbán, el turco Recep Tayyip Erdoğan o el filipino Rodrigo Duterte. Sin embargo, el caso de Perú sugiere que puede ser de otro modo: las democracias también pueden perecer como resultado de la dilución del poder. La democracia peruana está al borde del colapso, no por culpa de un tirano popular, sino porque ha estado plagada de una miríada de líderes impopulares e inexpertos con pocos incentivos para actuar si no es por motivos de muy corto plazo. Hay tan pocos partidos políticos y élites capaces de agregar intereses y representar a la sociedad que la democracia tiene dificultades para funcionar y el Estado para cumplir sus misiones fundamentales.

En resumen, Perú ha sufrido un proceso de "erosión democrática". La política peruana está marcada a diario por acontecimientos que son a la vez reflejo de la fragilidad de la democracia y señal de un régimen antidemocrático.

En los últimos años, los conflictos entre los poderes ejecutivo y legislativo han dado lugar a siete procesos de destitución presidencial. Tres de ellos han prosperado, siendo el tercero y último la destitución por el Congreso del presidente Pedro Castillo como respuesta a su intento de golpe de Estado. En 2019, el presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso en una disputa sobre medidas anticorrupción. Los conflictos recurrentes sobre temas importantes – con poderes rivales no solo enfrentados, sino amenazando con aniquilarse políticamente entre sí – han llevado gradualmente a que el ejército se involucre más en el proceso político.

Tras convertirse en presidente interino en noviembre de 2020, Manuel Merino se vio obligado a dimitir apenas cinco días después de asumir el cargo. En la última serie de disturbios, bajo la presidencia de Dina Boluarte, violentas manifestaciones sacudieron el país. Estos sucesos, brutalmente reprimidos por el ejército y la policía nacional, se saldaron con la muerte de sesenta personas en el momento de escribir estas líneas, en marzo de 2023².

^{*} Este artículo fue publicado en inglés en 2023 en el *Journal of Democracy*: R. Barrenechea y A. Vergara, "Peru: The Danger of Powerless Democracy", Journal of Democracy, Vol. 34, n° 2, 2023, pp. 77-89. Traducido por David Recondo.

¹ "The World's Most, and Least, Democratic Countries in 2022", *Economist*, 1 de febrero de 2023 (www-economist.com/graphic-detail/2023/02/01/the-worlds-most-and-least-democratic-countries-in-2022).

² El diario limeño La República lleva un registro en línea de los fallecidos, recordándolos en una página

La trayectoria seguida por el régimen político en los últimos años confirma que el país se aleja cada vez más de la democracia.

Hace siete años, las elecciones presidenciales en este país andino de 34 millones de habitantes estuvieron marcadas por una segunda vuelta excepcionalmente reñida entre Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y Keiko Fujimori, hija y heredera política de Alberto Fujimori, el autoritario presidente de Perú en los años noventa. PPK ganó por sólo unos 40.000 votos en una contienda en la que se emitieron más de diecisiete millones de sufragios. Sólo se clasificó para la segunda vuelta en junio de 2016 con una proporción de votos históricamente baja, en torno al 20%. Tras negarse a aceptar su derrota, Keiko Fujimori prometió que aplicaría su programa gracias a la mayoría de 73 escaños de su partido en el Parlamento (que tiene 130 en total).

Tras un primer intento fallido en diciembre de 2017, el Congreso logró derrocar a PPK en marzo de 2018, alegando su implicación en el gigantesco escándalo de corrupción de Odebrecht y, en particular, el artículo 113 de la Constitución de 1993, que estipula que el cargo presidencial puede ser declarado vacante si el Congreso declara que el presidente en ejercicio padece una "incapacidad física o moral permanente". Por ello dimitió el 21 de marzo, justo antes de que los diputados de izquierda se unieran a los fujimoristas para votar a favor de su destitución. Informes posteriores sugirieron que el primer vicepresidente Martín Vizcarra, ex gobernador regional todavía poco conocido en la escena nacional, se había coordinado con los fujimoristas³.

Se había sembrado la semilla de una guerra entre partidos. Pedro Pablo Kuczynski intentó sobrevivir negociando con el Parlamento, pero se encontró en el punto de mira del arma más destructiva del Congreso. Martín Vizcarra ha adoptado una línea hostil hacia el Congreso y el fujimorismo, armando una amplia coalición popular para compensar su falta de apoyo partidario regular. En diciembre de 2018, propuso tres reformas constitucionales que los peruanos aprobaron por abrumadora mayoría en un referéndum, incluida prohibición de que los miembros del Congreso se presenten a mandatos consecutivos. En septiembre de 2019, se produjo una nueva escalada cuando disolvió el Congreso invocando otra disposición constitucional (artículo 134) que permite al jefe del Ejecutivo disolver la legislatura y convocar nuevas elecciones si los diputados rechazan un voto de confianza en dos gabinetes consecutivos. Inmediatamente, el Congreso declaró inconstitucional la actuación de Vizcarra, notificó la suspensión de su presidencia y designó a la segunda vicepresidenta Mercedes Aráoz (también segunda vicepresidenta de PPK en el pasado) como presidenta interina. La confusión reinó durante unas horas hasta que el popular Vizcarra publicó una foto suya en las redes sociales, acompañado por el jefe de la Policía Nacional y altos mandos militares. Mercedes Aráoz se negó a aceptar su candidatura a la presidencia del Congreso el 1 de octubre, y el Tribunal Constitucional selló posteriormente la victoria de Martín Vizcarra al dictaminar que su disolución

web específica: https://data.larepublica.pe/paro-nacional-muertos-por-protestas-en-peru-cuantos-y-quienes-son-un-recuento-de-los-civiles-que-fallecier-on-dina-boluarte. De las 60 víctimas mortales registradas por *La República*, 48 eran civiles ultimados, según el periódico, "probablemente por las fuerzas del orden durante los enfrentamientos que se produjeron en las manifestaciones".

³ "Pese a negarlo, Vizcarra tuvo contacto con el fujimorismo en plena vacación a PPK: chats lo confirman", *Gestión*, 8 de noviembre de 2020 (https://gestion.pe/peru/politica/chats-vizcarra-a-hernandez-confirman-contacto-con-fujimorismo-en-plena-vacancia-a-ppk-nndc-noticia/).

del Congreso era legal. Así, mientras Vizcarra y Aráoz se disputaban la presidencia en septiembre de 2019, el primero ganó al demostrar que contaba con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Pero las escaladas entre la Presidencia y el Congreso son difíciles de detener. Aunque el partido de Keiko Fujimori tenía 58 miembros menos en el Congreso tras las elecciones anticipadas de enero de 2020, la nueva legislatura seguía oponiéndose al presidente (sin partido que lo apoyara, Vizcarra no tenía candidato en el Congreso y los diputados recién elegidos adoptaron rápidamente una postura defensiva frente a un presidente popular anticongresista). Una vez más, los legisladores intentaron declarar una vacante presidencial en virtud del artículo 113, acusando a Vizcarra de corrupción que se remonta a su época como gobernador en el sur de Perú. Mientras que el primer intento, en septiembre de 2020, fracasó, el segundo, en noviembre, tuvo éxito. Vizcarra dejó el cargo discretamente el 9 de noviembre.

La rapidez con la que, en plena pandemia, un Congreso impopular consiguió destituir a un presidente popular ha causado indignación. Manuel Merino, el presidente designado por el poder legislativo, se encontró con una fuerte desaprobación pública. Nombró un gabinete de figuras autoritarias de derechas y movilizó a las fuerzas de seguridad para consolidar su control del poder, pero en menos de una semana las protestas le obligaron a ceder el testigo a otro presidente de transición, no sin una violenta represión que dejó dos muertos y más de un centenar de heridos.

La erosión de la democracia adquirió una nueva dimensión en las elecciones presidenciales de 2021. Si los políticos habían reducido el sistema a una suma de acaparamientos de poder, los dos candidatos que llegaron a la segunda vuelta el 6 junio introdujeron cada uno una nueva forma de autoritarismo.

Candidata a la presidencia por tercera vez, Keiko Fujimori prometió hacer de Perú una "demodura" y defendió el legado autoritario de su padre encarcelado⁴. En cuanto a Pedro Castillo, se presentó en la lista de un partido autoproclamado marxista-leninista⁵. Con una campaña populista, prometió desmantelar las instituciones políticas y convocar una asamblea electa para revisar la Constitución, aplicando la misma receta que otros populistas de izquierda de los Andes.

Durante la campaña, ambos candidatos advirtieron de fraude. Pedro Castillo ganó las elecciones por el mismo estrechísimo margen (menos de tres décimas de punto porcentual) que había llevado a PPK a la presidencia frente a Keiko Fujimori cinco años antes⁶.

Keiko Fujimori se negó a aceptar su derrota, alegando fraude electoral y llamando a sus partidarios a tomar las calles contra la "amenaza comunista". Sin pruebas, ella y sus seguidores acusaron a una vasta organización clandestina de falsificar votos en zonas remotas del país.

⁴ Así lo prometió en una entrevista en Twitter el 25 de febrero de 2021 (https://x.com/KeikoFujimori/status/1365040976037838850).

⁵ "Perú Libre: Ideario y Programa", febrero de 2020 (https://apisije-e.jne.gob.pe/TRAMITE/ESCRITO/2108/ARCHIVO/FIRMADO/9716.PDF).

⁶ Sobre las razones de la victoria de Castillo, véase R. Barrenechea y D. Encinas, "Perú 2021: Democracia por Defecto", *Revista de Ciencia Política*, Vol. 42, n° 2, 2022, pp. 407-438.

Keiko Fujimori, apoyada por todos los partidos de derecha, intentó anular más de 200.000 votos en la sierra, donde Pedro Castillo había obtenido resultados excepcionales⁷. Sin embargo, no pudieron anular la victoria de Castillo, que juró su cargo en julio de 2021.

Recién llegado a la función pública (había sido miembro de un sindicato de profesores) y enfrentado a una oposición que le negaba toda legitimidad, Pedro Castillo tuvo un comienzo difícil. La atención de la prensa y la oposición se centró inicialmente en sus aliados de extrema izquierda, pero pronto se desplazó a los escándalos de corrupción e incompetencia en los que estaban implicados la mayoría de los miembros de su gabinete. Su gobierno se caracterizó por una mezcla de retórica radical, ineptitud política y patrimonialismo manifiesto. Durante sus diecisiete meses de mandato, cambió de ministros a razón de uno cada seis días.

El índice de aprobación de Castillo, inicialmente bajo (en agosto de 2021) cayó considerablemente con el paso de los meses (19% en abril de 2022)⁸. Privado del apoyo popular, se convirtió rápidamente en el blanco de los intentos de destitución del Congreso. Viajó al interior del país, celebrando reuniones televisadas con líderes comunitarios mientras pronunciaba discursos populistas y aumentaba sus ataques al Congreso. Al mismo tiempo, investigadores penales investigaban las creíbles acusaciones de corrupción vertidas contra él.

El 7 de diciembre de 2022, justo cuando el Congreso se disponía a votar un tercer procedimiento de vacancia contra Castillo, y a pesar de no contar con los 87 votos necesarios para destituirlo, el Presidente entró en pánico y anunció en directo por televisión que disolvía el Congreso, declaraba el estado de excepción, imponía el toque de queda y convocaba la formación de una Asamblea Constituyente. Tras una hora de confusión, quedó claro que Castillo actuaba fuera del control de su gabinete, de su partido en el Congreso y, sobre todo, de las fuerzas armadas. El alto mando militar y la policía nacional emitieron un comunicado conjunto rechazando el golpe y reafirmando su lealtad a la Constitución. El Congreso votó inmediatamente la vacancia de la presidencia y tomó juramento a Dina Boluarte. Pedro Castillo fue detenido ese mismo día.

Dina Boluarte, abogada y burócrata, había abandonado el partido de Castillo y gozaba de escaso apoyo popular: según una encuesta nacional realizada el mes anterior a la crisis de diciembre, de los encuestados estaba a favor de celebrar elecciones anticipadas si caía Castillo. Sólo el 8% quería que el Congreso siguiera en funciones hasta 20269. Boluarte, sorprendida, anunció sin embargo que ella y el Congreso seguirían en funciones hasta el final de la legislatura. Las protestas no tardaron en estallar. Al igual que ocurrió con la destitución de Martín Vizcarra, un amplio sector de la población protestó contra lo que una toma de poder por parte de un Congreso impopular.

Al darse cuenta de su error, Dina Boluarte declaró entonces que su gobierno sería de transición y dijo estar abierta a elecciones en 2024. Pero este anuncio llegó demasiado tarde. Las manifestaciones ya estaban teniendo lugar en todo el país, alcanzando niveles de violencia

⁷ S. Levitsky y A. Vergara, "Trumpian Tactics Threaten to Undo Democracy in Peru", *New York Times*, 23 de junio de 2021.

⁸ IPSOS-Perú, "Opinión Data-Noviembre 2022" (www.ipsos.com/es-pe/opinion-data-noviembre-2022).

⁹ Instituto de Estudios Peruanos, "Informe de Opinión-Noviembre 2022" (https://iep.org.pe/noticias/iep-informe-de-opinion-noviembre-2022).

sin precedentes: edificios públicos destruidos, varios aeropuertos y decenas de carreteras bloqueadas, la casa de un diputado incendiada.

El gobierno ha recurrido a una estrategia de militarización para hacer frente a las manifestaciones. La nueva presidenta y sus aliados afirmaron que Perú no estaba sumido en una crisis política caracterizada por manifestaciones generalizadas y descentralizadas, sino en una insurrección criminal. Altos mandos de la policía nacional y del ejército se hicieron eco de la retórica del conflicto armado interno de los años ochenta y noventa, cuando Sendero Luminoso ocupaba los titulares internacionales. Pocos días después de la toma de posesión de Dina Boluarte, se inició una espiral de represión y desórdenes que se ha cobrado hasta el momento sesenta vidas. El 15 de diciembre de 2022, un intento de tomar el control del aeropuerto de la ciudad andina de Ayacucho desembocó en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, con el resultado de diez muertos. Según informes fiables, al menos seis de ellos murieron por disparos militares¹⁰. El 9 de enero de 2023, en otra ciudad del interior del país (Juliaca), la policía nacional se enfrentó a manifestantes, matando a dieciocho personas e hiriendo a decenas de civiles. Poco después, una multitud atacó a dos policías que estaban de servicio en la ciudad. Uno de ellos fue apaleado; su compañero murió quemado en su coche patrulla¹¹. Dina Boluarte cuenta ahora con el apoyo de los círculos más conservadores y autoritarios de la política peruana, los mismos que rechazaron la candidatura presidencial con la que se presentó, por considerar que debía su victoria únicamente al fraude.

Desde 2016, el declive democrático de Perú se ha acelerado. El ejército – en parte contra su voluntad – ha vuelto gradualmente a la política. La derecha ha rechazado los resultados de un proceso electoral legítimo. Un presidente de centro-izquierda intentó un autogolpe. Aumentaron la represión estatal y las violaciones de las libertades civiles. Las "armas definitivas" previstas en la Constitución se han utilizado repetida y frívolamente con fines parecidos a los golpes de fuerza. Se ha roto el consenso cívico que implica la democracia. ¿Por qué Perú ha tomado este camino?

EL HUNDIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

Las violaciones de los derechos humanos y el uso excesivo de la fuerza que han marcado a Perú en los últimos meses podrían ser síntomas de una forma clásica de deterioro de la democracia: un deslizamiento hacia la coerción y el autoritarismo. Sin embargo, la tendencia a más largo plazo revela un problema diferente: esta situación no es tanto el resultado de una acumulación de poder como de una dilución del mismo.

¹⁰ C. Prado y R. Laura, "Radiografía de homicidios", IDL Reporteros, 15 de febrero de 2023 (www.idl-reporteros.pe/radiografia-de-homicidios).

¹¹ D. Pereda Z, "Policeman Burned to Death amid Protest, Unrest in Peru, Death Toll Rises to 47", USA Today, 11 de enero de 2023 (https://eu.usatoday.com/story/news/world/2023/01/11/peru-policeman-burned-death-protest-death-rises-47/11031307002/).

Los estudios sobre democratización han considerado generalmente que la concentración de poder – por parte de oligarcas, generales o un hombre fuerte – es el enemigo natural de la democracia. El trabajo de Robert A. Dahl sobre la democracia como "poliarquía" se centra en las condiciones que permiten a los grupos desafiar y romper el poder oligárquico¹². La democracia surge cuando el poder se desconcentra hasta el punto de que ningún actor puede imponer unilateralmente su voluntad a los demás. Todos los actores del juego político deben entonces aprender las artes de la negociación, el compromiso, la argumentación, la persuasión y las concesiones mutuas: deben acostumbrarse a la realidad del pluralismo y encontrar la manera de perseguir sus diferentes objetivos y representar sus diversos intereses en este marco.

La idea de que la concentración de poder es la antítesis de la democracia ha guiado los trabajos sobre la desdemocratización. Los investigadores se han centrado principalmente en las formas en que el poder puede concentrarse, ya sea de forma abrupta, en un golpe de Estado¹³, o a través de procesos más graduales de retroceso y erosión democrática¹⁴.

Sin embargo, aunque es necesario limitar y distribuir el poder para evitar el autoritarismo, es igualmente crucial que los líderes tengan poder suficiente para que la democracia funcione. El caso de Perú demuestra que, en ausencia de individuos y organizaciones capaces decir, con poder de representar eficazmente a los distintos grupos de interés, clases, regiones y facciones de la sociedad, una democracia puede volverse ingobernable hasta el punto de comprometer sus principios liberales y allanar el camino al autoritarismo.

Hace una década, Peter Mair afirmaba que las democracias europeas estaban en retirada. Los ciudadanos se retiraban a sus vidas privadas y los políticos a sus despachos, erosionando el atractivo de los partidos como foros de interacción entre ciudadanos y políticos¹⁵. En la literatura sobre la desinstitucionalización del sistema de partidos en América Latina se pueden encontrar rastros de este diagnóstico¹⁶. En Perú, el fenómeno es más profundo y generalizado; los partidos y los políticos han desaparecido más que desconectarse de los ciudadanos. En este caso, el fenómeno se refleja en la extrema dilución del poder observada en forma de fragmentación electoral, la progresiva sustitución de funcionarios profesionales por *outsiders* políticos y la ruptura de los vínculos entre los representantes electos y la sociedad. Estos tres fenómenos están transformando la política en un juego a corto plazo en el que los políticos no se sienten en absoluto estimulados a cooperar, sino más bien a adoptar comportamientos radicales y depredadores. Los políticos sin pasado, sin futuro político y sin una base a la que

¹² R. A. Dahl, *Polyarchy: Participation and Opposition*, New Haven, Yale University Press, 1971; R. A. Dahl, *Who Governs? Democracy and Power in an American City*, New Haven, Yale University Press, 1961.

¹³ J. J. Linz, *The Breakdown of Democratic Regimes: Crisis, Breakdown, and Reequilibration*, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1978; S. Mainwaring y A. Pérez-Liñán, "Lessons from Latin America: Democratic Breakdown and Survival", *Journal of Democracy*, Vol. 24, n° 2, 2013, pp. 123-137.

¹⁴ N. Bermeo, "On Democratic Backsliding", *Journal of Democracy*, 2016, Vol. 27, n° 1, pp. 5-19; S. Levitsky y D. Ziblatt, *How Democracies Die*, New York, Crown, 2018; A. Pérez-Liñán, N. Schmidt y D. Vairo, "Presidential Hegemony and Democratic Backsliding in Latin America, 1925-2016", *Democratization*, Vol. 26, n° 4, 2019, pp. 606-625.

¹⁵ P. Mair, Ruling the Void: The Hollowing of Western Democracies, Londres, Verso, 2013.

¹⁶ S. Mainwaring, F. Bizzarro y A. Petrova, "Party System Institutionalization, Decay, et Collapse", in S. Mainwaring (dir.), *Party Systems in Latin America: Institutionalization, Decay, and Collapse*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018, pp. 17-33.

rendir cuentas sólo están interesados en maximizar sus ganancias, su poder y su influencia en el presente. En nuestra opinión, esto explica la serie de tomas de poder fallidas que han minado Perú en los últimos años y han desvitalizado su democracia.

Fragmentación electoral

La fragmentación electoral, un excelente indicador de la dilución del poder, se remonta a los últimos años del régimen de Alberto Fujimori, quien huyó del país y renunció a la presidencia en noviembre de 2000 tras una década en el poder. Los partidos políticos habían quedado marginados y muy debilitados bajo el régimen autoritario que Fujimori había instaurado con su autogolpe de abril de 1992, en el que disolvió el Congreso y suspendió las actividades del poder judicial para arrogarse poderes legislativos y judiciales. En 2001, once partidos obtuvieron representación, el mayor de los cuales obtuvo poco más de un cuarto de los votos.

Para frenar la fragmentación de los partidos, el Congreso adoptó reformas, pero fracasaron. Las tendencias centrífugas han persistido. Hay poca lealtad a los partidos, ya que los políticos no dependen de ellos para hacer campaña, sino de sus propios recursos y reputación. La fragmentación fomenta la iniciativa política individual, ya que se necesitan pocos votos para ser elegido diputado. Es posible salir elegido haciéndose con el control de pequeñas emisoras de radio locales, por ejemplo, o "alquilando" pequeñas "máquinas" electorales organizadas por agentes políticos a sueldo¹⁷. Una vez elegido, el candidato las abandona para buscar nuevas oportunidades. Así es como el Congreso pasó de seis a trece agrupaciones de partidos entre 2016 y 2019. El Congreso elegido en 2021 empezó con diez bloques y ahora tiene trece. La fragmentación también es visible en la elección presidencial. En 2001, los dos candidatos ganadores de la primera vuelta obtuvieron juntos de los votos. En 2021, esta cifra había caído al 32%. Una encuesta realizada en febrero de 2023 mostraba que cuando se pedía a los encuestados que nombraran a alguien que sería un buen candidato a la presidencia, la persona más mencionada sólo recibía el 4,5% de las respuestas y era, además, un outsider político. De la veintena de candidatos mencionados (los encuestadores no presentaron una lista, sino que se limitaron a dejar que los encuestados sugirieran nombres), sólo dos superaron el 4%. En total, el 71% de los encuestados no mencionaron ningún nombre o afirmaron categóricamente que nadie sería un buen candidato¹⁸.

Incluso antes de 2021, cuando entró en vigor la reforma que prohibía la reelección inmediata, los miembros del Congreso rara vez conservaban sus escaños en las siguientes elecciones. Esta medida redujo a los partidos en el poder a meros nombres que eran barridos en gran medida en cada ronda del ciclo electoral: Perú Posible pasó de 45 escaños en 2001 a solo dos en 2006; el Partido Aprista Peruano, de 36 escaños en 2006 a 4 en 2011; Perú Gana, de 47 escaños en 2011 a ninguno en 2016; y Peruanos por el Kambio, de 18 escaños en 2016 a cero cinco años

¹⁷ S. Levitsky y M. Zavaleta, "Why No Party-Building in Peru?", en S. Levitsky et al (dir.), Challenges of Party-Building in Latin America, Cambridge, Cambridge University Press, 2016, pp. 412-439.

¹⁸ Instituto de Estudios Peruanos, "Informe de Opinión-Febrero 2022" (https://iep.org.pe/noticias/iep-informe-de-opinion-febrero-2023/).

después. En cada elección, los peruanos han elegido a un presidente de un partido diferente, solo para que cinco años después sea expulsado del cargo. Desde la elección del ingeniero agrónomo Alberto Fujimori como presidente en 1990, los votantes han recurrido a *outsiders* para resolver problemas arraigados y de larga data, como los deficientes servicios públicos, la debilidad del Estado de derecho, la elevada desigualdad y la exclusión étnica. Por lo general, al principio, el presidente *outsider* suscita grandes esperanzas y beneficia de un alto índice de aprobación, pero luego su apoyo se debilita y se desploma. Desde 2001, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, PPK y Pedro Castillo han llegado al poder antes de caer en el descrédito político. Como resultado, el poder ha circulado más de lo que se ha acumulado, y los líderes políticos experimentados siguen siendo esquivos. Durante mucho tiempo se ha descrito a Perú como una "democracia sin partidos". Hoy podríamos hablar de una democracia sin políticos.

Amateurismo personalista

Uno de los rasgos más llamativos del declive democrático de Perú es la sustitución de políticos profesionales por aficionados sin experiencia ni apoyos sólidos. La fragmentación electoral y la *alternancia* han acabado con cualquier posibilidad de carrera política. Sólo quedan aficionados, incluso para los más altos cargos del Estado. Dada la naturaleza efímera y frágil de los partidos, estos aficionados tienden, por defecto, a basarse en el *personalismo*, sin el apoyo o el control de organizaciones más amplias como los partidos. De los nueve presidentes que ha tenido el país desde 2001, seis no habían ocupado nunca un cargo electo. Tres de ellos se presentaron en nombre de partidos que no eran más que aparatos "personalistas", mientras que otros tres no tenían vínculos significativos con el partido bajo cuya etiqueta se presentaban.

Los sucesores en la presidencia desde 2016 ilustran esta tendencia. Pedro Pablo Kuczynski, tecnócrata de renombre, lideró una inestable coalición de centro-derecha y solo se interesó por los barrios de clase media y alta de Lima. Martín Vizcarra había sido gobernador de una pequeña región durante un mandato. Pedro Castillo era un maestro rural que dirigía un pequeño sindicato. Su experiencia política se limitaba al cuarto puesto en una carrera por la alcaldía de un distrito con menos de dos mil votantes. Los medios de comunicación apenas habían oído hablar de él y sólo apareció en las encuestas diez días antes de la primera vuelta, el 11 de abril de 2021. Pronto se supo que su candidatura era improvisada y que no tenía vínculos reales con el partido marxista-leninista (dirigido por un cirujano formado en Cuba) en cuya lista se presentaba. La mayoría de los asesores de Pedro Castillo eran miembros de su familia. Dina Boluarte, su sustituta, es una funcionaria ordinaria que no consiguió un mandato en la alcaldía ni un escaño en el Congreso. Una vez elegida Primera Vicepresidenta, consideró el cargo tan precario que se aseguró de poder conservar su trabajo principal en el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

El amateurismo político se ha visto facilitado por el comportamiento electoral de los peruanos y reforzado por la reforma constitucional de 2018. Si bien las tasas de reelección al Congreso habían sido extremadamente bajas desde el retorno del país a la democracia, esta reforma prohibió la reelección inmediata de los miembros del Congreso. Una ley similar relativa a gobernadores y alcaldes se aprobó en 2015, convirtiendo las instituciones electorales

de Perú en una máquina de detener carreras políticas. Si bien los amateurs carecen por definición de experiencia política, la dificultad y luego la prohibición absoluta de presentarse a la reelección les priva automáticamente de cualquier futuro político.

Los aficionados no sólo son propensos a cometer graves errores de apreciación (como demostró el intento de Pedro Castillo de hacerse con el poder), sino que tienen poca responsabilidad debido a la falta de vínculos organizativos. Este sistema favorece el comportamiento irresponsable.

Sin vínculos políticos

La tercera característica de la erosión democrática es la ausencia de vínculos significativos y estables entre los políticos y la sociedad. En los años ochenta, los clivajes programáticos configuraron el sistema de partidos en Perú y establecieron vínculos relativamente estables con el electorado. Después de Fujimori, las orientaciones de los partidos políticos y sus candidatos se diluyeron, y los *outsiders* que han llegado al poder desde entonces se han distinguido por sus giros políticos una vez en el cargo. Los partidos que son poco más que nombres en los carteles de campaña de candidatos "personalistas" no van a pedir cuentas a los políticos. Las tácticas clientelistas para movilizar a los votantes durante las campañas varían según la campaña. La identificación partidista es débil.

Los vínculos más estables que los actores políticos mantienen con la sociedad no se basan tanto en identidades políticas como en "anti-identidades". *Los outsiders* promueven el rechazo visceral a los partidos, en particular al fujimorismo¹9. El antifujimorismo apenas logró alejar a Keiko Fujimori de la presidencia, pero ha sido el único programa de una serie de *outsiders* (Alejandro Toledo, Ollanta Humala, PPK, Martín Vizcarra, Pedro Castillo) apoyados por partidos que no tienen recursos para dotarlos de un programa de gobierno, exigirles cuentas o apoyarlos una vez que han llegado a la más alta magistratura del Estado. Más recientemente, a raíz de Pedro Castillo, la derecha pareció agruparse en torno a una ideología antiizquierdista para apoyar la presidencia de Dina Boluarte.

LA EROSIÓN DE LA DEMOCRACIA Y SUS CONSECUENCIAS

Una de las consecuencias de la erosión democrática a la que asistimos en Perú es el considerable peso de los cálculos cortoplacistas, tanto en las campañas políticas como en la gestión de los asuntos públicos. Sin experiencia política, ante perspectivas inciertas y desconectados de la sociedad, los políticos peruanos sólo tienen como horizonte el presente. La fragmentación, el amateurismo y la desconexión con los ciudadanos aumentan la incertidumbre sobre el futuro. La lealtad a partidos que son poco más que cáscaras vacías

¹⁹ C. Meléndez, El mal menor: vínculos políticos en el Perú posterior al colapso del sistema de partidos, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 2019.

carece de sentido, y la reelección está fuera de discusión. Hay pocos incentivos para la moderación: los resultados electorales pueden ser impugnados, el Congreso disuelto, los presidentes depuestos y los golpes de Estado intentados. Es como si las reglas del juego fueran: "¡Prueba suerte y no esperes!".

La dimisión forzada de Pedro Pablo Kuczynski de la presidencia ilustra esta lógica. Tanto los partidos de izquierda como los fujimoristas se opusieron ferozmente a él. La izquierda esgrimió razones más o menos ideológicas: era un tecnócrata neoliberal formado en Estados Unidos, cuya base estaba formada por peruanos blancos de clase alta. Los fujimoristas no se oponían a PPK por razones programáticas (había apoyado a Keiko Fujimori contra Ollanta Humala en 2011), sino porque había derrotado a su candidato en 2016. En otras palabras, querían derrocarlo porque pensaban que podían hacerlo a la primera oportunidad.

Esto ocurrió cuando los medios de comunicación denunciaron que PPK se había corrompido cuando era ministro de Economía de Alejandro Toledo. Los fujimoristas se convirtieron inmediatamente en los más fervientes partidarios de utilizar la vacancia, el arma nuclear de la Constitución peruana, para destituir al presidente. Había muchas posibilidades de que el PPK desapareciera del Congreso en las siguientes elecciones, que es exactamente lo que ocurrió.

Tras la salida del PPK, el Congreso entabló un tira y afloja con el presidente Vizcarra, retándolo a emitir un decreto de disolución. Una vez hecho esto y elegida y juramentada una nueva legislatura, el Congreso destituyó a Vizcarra mediante la vacancia. Además de derrocar a PPK, esta destitución delató la falta de visión y egocentrismo de los líderes políticos, pues llevó a cabo en medio de una pandemia en uno de los países más afectados por el covid-19. El clima de confrontación, las diatribas de la oposición acusando a Vizcarra de "comunista" y el recurso inmediato a las medidas constitucionales más radicales dan cuenta de la falta de mesura y la negativa a cooperar.

Una vez destituidos el PPK y Vizcarra, triunfaron el pensamiento y la gestión a corto plazo, pues quedó claro que se podía hacer desaparecer a los opositores de la noche a la mañana. El negacionismo electoral de los adversarios de Castillo y su posterior negativa a reconocer la legitimidad de su presidencia fue un presagio de los comportamientos desleales que se avecinaban. Por su parte, el círculo de Castillo y Perú Libre se dedicaron a medidas destinadas a maximizar los beneficios de su acceso temporal al poder: depredación de los recursos públicos y, al igual que otros líderes populistas andinos, la promoción (por parte de Perú Libre en particular) de cambios institucionales radicales que debían ser adoptados por una asamblea constituyente cuyo proyecto de nueva constitución debía ser sometido directamente a referéndum popular sin la aprobación del Congreso.

El concepto de erosión democrática nos ayuda a explicar no sólo las dinámicas de conflicto, depredación y oposición desleal que se observan en el seno de la clase política peruana, sino también la aparente incapacidad de la sociedad peruana para resolver los conflictos tras la caída de Castillo. Las violaciones de los derechos humanos cometidas por el gobierno y la sobreimplicación del ejército y la policía nacional en el proceso político no son tanto la obra deliberada de una dictadura que concentra el poder como la expresión de una dilución

del poder y de la fragilidad de un gobierno desbordado que, presa del pánico ante las manifestaciones masivas, sacrificó la democracia en nombre del orden²⁰.

Los políticos peruanos son capaces de entrar en un conflicto institucional desenfrenado, pero no de federar demandas o movilizar a la sociedad para resolver conflictos. Esto es tanto más lamentable hoy cuanto que el carácter descentralizado de las protestas hace más difícil la agregación de intereses y la negociación. Desde que la presidenta Dina Boluarte reconoció la necesidad de anunciar elecciones anticipadas para paliar la crisis, diputados de izquierda y derecha se han enzarzado en disputas e inercias. Los partidarios de la izquierda siguen reclamando un referéndum sobre la convocatoria de una asamblea constituyente, mientras que los partidarios de la derecha temen que un nuevo recurso a las urnas pueda costarles sus escaños. Curiosamente, como resultado de estas disputas, los únicos que en el Congreso apoyan plenamente la idea de unas elecciones anticipadas son los fujimoristas, el único partido con alguna posibilidad de supervivencia.

Aunque la Presidenta Boluarte ha abusado de su autoridad aprobando una represión excesiva, su poder es tan precario como el de sus predecesores. Según informes fidedignos, ha intentado abandonar el cargo en dos ocasiones²¹. Así pues, incluso durante el episodio más autoritario de la política peruana en décadas, no es la concentración de poder lo que explica la crisis, sino la precariedad política y la dilución del poder. Lamentablemente, el futuro amenaza con repetirse.

FUERA LA POLÍTICA, DENTRO LA FUERZA

La desdemocratización, en Perú como en todas partes, significa sustituir la política por la fuerza. La trayectoria de Perú, desde el debilitamiento de la política hasta un gobierno basado en la violencia irresponsable y abusiva, es demasiado directa. Es una advertencia. Las quejas sobre la clase política son habituales en todas partes, pero Perú es lo que parece un país sin partidos ni políticos profesionales. La cuestión ya no es qué tipo de gobierno quieren los peruanos, sino si el país puede realmente ser gobernado. Las tendencias aquí descritas no son exclusivas de este país andino. En otros lugares de América Latina, Guatemala también parece estar sufriendo una erosión de la democracia. Durante la campaña para las elecciones presidenciales de junio de 2023, por ejemplo, Zury Ríos, hija y heredera política del dictador de los ochenta Efraín Ríos Montt, se encontró liderando las encuestas con menos del 20% de apoyo. El actual presidente, Alejandro Giammattei, llegó a la segunda vuelta en 2019 con sólo el 13,9% de los votos²². El Congreso guatemalteco, por su parte, está formado desde hace tiempo por representantes

²⁰ "Joint Statement: The Biden Administration Must Denounce Violent Repression in Peru", Washington Office on Latin America, 13 de enero de 2023 (www.wola.org/2023/01/the-biden-administration-must-denounce-violent-repression-in-peru).

²¹ "Dina Boluarte quiso renunciar tras primeros fallecidos, pero Otárola la convenció de quedarse", *La República*, 23 de enero de 2023.

²² Nota del editor: el artículo fue publicado en inglés en 2023.

políticos que no sorprenderían a los peruanos: los diputados cambian constantemente de bando y los partidos no tienen vínculos sólidos con la sociedad (a pesar de cierto clientelismo en las zonas rurales). comportamiento depredador, facilitado por el debilitamiento de la democracia, se observa ahora en Guatemala. Poderes ilegales, informales y de facto llenan el vacío dejado por la política democrática. No ha surgido ningún hombre o mujer fuerte. El país tiene que lidiar con un pluralismo inestable y corrupto que hace improbables reformas significativas. Según el politólogo Omar Sánchez-Sibony, Guatemala ya no es una democracia, a pesar de que las elecciones siguen siendo competitivas (al menos para los que pueden participar). Estos antecedentes deberían preocupar a los peruanos, ya que las actividades ilegales e informales han penetrado gradualmente en la política peruana.

Además de Perú y Guatemala, Colombia y Chile muestran las características de una creciente crisis de representación: inesperados *outsiders* llegan a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y los partidos ya no son capaces de representar adecuadamente a sus sociedades. Al igual que Perú, estos dos países también han visto estallar violentas revueltas sociales, sólo para ser respondidas con una brutal represión estatal.

Según fuentes oficiales, *el estallido* social en Chile, que alcanzó su punto álgido entre octubre de 2019 y marzo de 2020, se saldó con la muerte de 36 personas, mientras que 29 fallecieron durante las protestas en Colombia en 2021. Por un lado, las sociedades latinoamericanas están descargando una ira sin precedentes. Por otro, los gobiernos reaccionan con cada vez más represión. Estos son signos claros de un sistema de representación que falla. Así pues, los mecanismos de erosión democrática no son exclusivos de Perú. Como le gusta decir al politólogo uruguayo Juan Pablo Luna, Perú no es un caso raro en América Latina, sino simplemente la vanguardia de una crisis de representación a escala regional²³.

²³ J. P. Luna, En vez del optimismo: Crisis de representación política en el Chile actual, Santiago, Editorial Catalonia, 2017.

Para citar este capítulo: Rodrigo Barrenechea y Alberto Vergara, "Perú: el peligro de una democracia impotente", in D. Recondo (dir.), *América latina. El año político 2024/Les Etudes du CERI*, n° 275-276, Enero 2025 [en línea: www.sciencespo.fr/ceri/fr/papier/etude].